

**LA CONTRIBUCIÓN DE LAS EDITORIALES DEL PERIÓDICO EL TIEMPO A LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DEL PERDÓN Y LA
RECONCILIACIÓN, Y DE LA VIOLENCIA Y EL CONFLICTO**

ORIANA OBAGI OROZCO

oobagi@gmail.com

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
MAESTRÍA EN ESTUDIOS POLÍTICOS
BOGOTÁ, D.C.
ENERO 2011**

**LA CONTRIBUCIÓN DE LAS EDITORIALES DEL PERIÓDICO EL TIEMPO A LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DEL PERDÓN Y LA
RECONCILIACIÓN, Y DE LA VIOLENCIA Y EL CONFLICTO**

ORIANA OBAGI OROZCO

oobagi@gmail.com

Trabajo de Grado para Optar al Título de:

Magíster en Estudios Políticos

Director: ALBERTO ENRIQUE CIENFUEGOS RIVERA

Economista, Magíster en Estudios Políticos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

MAESTRÍA EN ESTUDIOS POLÍTICOS

BOGOTÁ, D.C.

ENERO 2011

Quizás para la única representación social en la cual el lenguaje se queda corto es para aquella de la *Gratitud*.

Al motor de mi corazón,

A mi director, Un maestro

A mi familia,

A los amigos,

Y a Dios que me permitió contar con todos ustedes.

“El viento azotaba la bandera de un templo, y dos monjes disputaban sobre la cuestión. Uno de ellos decía que la bandera se movía, el otro que se movía el viento. Argumentaban sin cesar. Eno el Patriarca dijo: “No es que el viento se mueva; no es que la bandera se mueva; es que vuestras honorables mentes se mueven”.

Doctrina sutra²

² Tomado de *“De Macondo a mancuso. Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Una aproximación desde la psicología social crítica.”* Segunda edición, abril de 2008.

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	16
1.1	Planteamiento del problema	16
1.2	Pregunta de Investigación	23
1.3	Objetivo General	23
1.4	Objetivos Específicos	23
1.5	Hipótesis	24
1.6	Justificación	24
1.6.1	El Tiempo, un “todo poderoso” del lenguaje	27
1.6.2	¿Por qué las editoriales?	31
1.7	Metodología	32
2	MARCO TEÓRICO	36
2.1	La cara de la guerra psicosocial	37
2.1.1	Elementos constitutivos de la Guerra Psicosocial	41
2.1.2	Consecuencias de la guerra psicosocial	43
2.2	La venganza como consecuencia de la guerra psicosocial	45
2.2.1	Resistir: una salida	48
2.3	Las representaciones sociales: imagen de la realidad	49
2.4	El poder del lenguaje	52
3	PROGRAMAS NARRATIVOS	55
3.1	Análisis Cuantitativo	55
3.2	Programa Narrativo Mensajes Tipo 1	60
3.2.1	Análisis predicativo Mensajes Tipo 1	60
3.2.2	Programa narrativo alusivo a los mensajes tipo 1	70
3.3	Programa Narrativo Mensajes tipo 2	75
3.3.1	Análisis Predicativo Tipo II	75
3.3.2	Programa narrativo mensajes tipo II	84
4	Análisis Crítico	90
5	CONCLUSIONES	98
6	REFERENCIAS	108

7	ANEXOS.....	109
7.1	Editoriales	109
7.2	Programa Narrativo Editoriales El Tiempo	229
	(Agosto 2009 – Julio 2010).....	229

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema

Seis décadas lleva Colombia sumida en la violencia, en los fragores de una lucha fratricida cuyos efectos se multiplican. Desde 1948, fecha en la que nace la violencia política³ en el país, diálogos de paz han pasado, ceses al fuego han sucedido, liberaciones han sido desvelo mediático y la historia se repite. Existe una combinación de factores que actúan como el motor del continuismo de la guerra y que explican este fenómeno. Una de las causas de la perpetuación de la violencia en Colombia es la inclinación de las víctimas a impartir su propia justicia y a hacer parte del círculo vicioso en el que se ha convertido el conflicto, es decir, víctimas se convierten en victimarios. “Lo peor en el mal no es, pues, quizás, el sufrimiento, ni siquiera el sufrimiento del inocente, sino más bien que sólo la venganza parezca poder remediarle. (...) Sólo puedo asegurar la equidad para mí más que provocando la iniquidad respecto a otro distinto de mí.”⁴ Comportamientos de este tipo evidencian que no ha sido posible el cierre de los ciclos de la violencia, lo que potencializa aún más el deseo de los afectados de resarcir su dolor.

³ Gustavo Adolfo Quesada, en su prólogo a la primera edición de *“De Macondo a mancuso”*, reconoce que la guerra, las masacres, los secuestros y el reclutamiento forzado son prácticas que inician incluso desde 1811 en la Nueva Granada y que se extienden durante el siglo XIX hasta hoy. Sin embargo, “los procesos que se inician en 1948 se enmarcan en una inusitada violencia contra el sector civil, y en un sistemático uso de los modernos medios de comunicación para adelantar una guerra psicológica que oculte la verdad de los hechos, maximice la “maldad” del enemigo y la “bondad” de quienes representan el Estado, y prepare a la población para aceptar la liquidación de quienes se oponen al statu quo.” En *“De Macondo a mancuso. Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Una aproximación desde la psicología social crítica.”* Segunda edición, abril de 2008. p. 26.

⁴ ARENDT, Hanna mencionada en POLO, Joaquín. *El perdón como posibilidad para vivir juntos*. Tesis de Maestría en Filosofía. Pontificia Universidad Javeriana, 2006.

El segundo factor de la prolongación del conflicto tiene que ver con que más allá de las masacres, la toma de pueblos y los atentados perpetrados por los grupos al margen de la ley, el escenario de la guerra deja ver un entramado de símbolos y formas del lenguaje que alimentan las manifestaciones propias de la violencia. Ya no se trata de la guerra en su forma material sino inmaterial. Tiene que ver con la carga psicológica de las palabras y de las acciones encaminadas a infundir miedo, impotencia, temor, odio y sentimientos de venganza en el conjunto de la población. Tiene que ver con los efectos de la guerra psicológica, más peligrosa que la guerra misma en tanto sus secuelas se resisten a las reparaciones materiales. Esta es – quizás – la huella más difícil de erradicar cuando se trata de cortar el círculo de violencia en el que se inserta la persona al convertirse en víctima.

Hago referencia a “un nuevo tipo de confrontación, cuya intención es crear patrones de conducta y anular el criterio y voluntad ciudadanos.”⁵ Una guerra, cuyos efectos cobran cada vez más fuerza por el crecimiento desaforado de los medios de comunicación y su centralidad en la sociedad. En este contexto, los comportamientos sociales –en su mayoría– son reflejo de los significantes que del conflicto, la violencia y la guerra construyen y promueven los medios de comunicación. Quienes ejercen este tipo de confrontación psicológica lo hacen en un espacio reducido de operación, no obstante su alcance se multiplica en la medida en que los medios intervienen en la transmisión de mensajes. Un individuo es capaz de reproducir y multiplicar los efectos nocivos de la violencia básicamente a través de tres campos: la mente (por ser el punto de donde surge la racionalidad o irracionalidad de los actos); las acciones, capaces de materializar el odio y la venganza, y en la relación con otros, donde es posible alimentar el círculo vicioso. De este modo, las representaciones sociales de la guerra

⁵ ARAUJO, Luis Mario. En Prólogo a la segunda de Edición. *De Macondo a mancuso. Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Una aproximación desde la psicología social crítica*. Ediciones Cátedra Libre. Bogotá, 2008. Segunda edición.

impulsadas por los medios “se sitúan en el sustrato mismo de los planos simbólicos de significación social, como son los sistemas morales, axiológicos, políticos, económicos jurídicos y culturales.”⁶

Frente a esta problemática aún no se ha planteado solución. Los usos del lenguaje como constructores sociales del perdón y la reconciliación escasamente han sido mencionados como posibilidad, como una herramienta política para frenar la multiplicación de las manifestaciones de violencia. Hablar de perdón, aún más en la escena política, es asumido como retórica, como asunto filosófico, o simplemente como propio de la religión. Sin embargo, ante la reproducción de la violencia, el perdón es el lado opuesto de la venganza; el primero pone fin al rencor, el segundo recrea y multiplica los efectos de la guerra.

En el plano legislativo, la Ley 975⁷ de Justicia y Paz, que contempla como ejes la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas es un instrumento inicial. *Inicial* porque los tres pilares –aunque son fundamentales– no bastan para el logro de la reconciliación nacional. La verdad, la justicia y la reparación son conceptos absolutos en el lenguaje; sus usos simbólicos dan la impresión de solución a los problemas, no obstante en la práctica contrastan con la realidad. Estos elementos son: i) la verdad, que más allá de ser una pieza clave para la reconciliación, en la ley funciona como indicador del número de años de cárcel del victimario, ii) la justicia con posibilidad de exenciones, lo que se convierte en motivo de inconformidad para las víctimas, iii) y la reparación, pero sólo en el terreno de lo material. Así las cosas, la opción para resolver el conflicto entre víctimas y victimarios es el perdón –pieza clave de la reconciliación– y para alcanzarlo es necesario recurrir al mismo elemento utilizado por la guerra psicosocial: los

⁶ BARRERO, Edgar, SUAREZ, Rosa. *Representaciones sociales y cotidianidad en los espacios universitarios. En: Culturas universitarias, usos y aproximaciones a un concepto en construcción.* Bogotá, 2002. Arfo editores, 2002, p .46.

⁷ La Ley de Justicia y Paz fue aprobada en el año 2005 como complemento de la ley 782 de 2002, cuyos beneficios sólo pueden aplicarse a responsables de delitos indultables. Responsables de delitos como el secuestro y el homicidio deberán someterse a la Ley de Justicia y Paz que contempla una pena alternativa entre 5 y 8 años, con derecho a beneficios según los delitos confesados. www.fiscalia.gov.co

símbolos y el lenguaje, esta vez en el escenario político y público de los medios de comunicación. Esto implica reconocer el poder de la palabra para transformar modelos de pensamiento y comportamiento adquiridos a través de las representaciones sociales que del conflicto proyectan los medios de comunicación. El resultado será la construcción de una base social sólida que presionaría la culminación de la violencia física y psicológica, pues en la medida en que la sociedad no reproduce las lógicas de la guerra se reducen las posibilidades de legitimación del conflicto.

Existen dos guerras y para ello debe haber dos frentes que combatan su lucha. La guerra que se materializa en población desplazada, viviendas destruidas, muertes, secuestros y extorsiones, cuenta con reparaciones materiales. Mientras tanto, la guerra que se libra en el campo psicológico y que infunde sentimientos de terror, inseguridad y rencor avanza. Para detenerla es prioritario modificar las representaciones sociales de lo que supone el fin del conflicto y de lo que significa ser víctima del mismo. En este sentido, dice Murray Edelman que “el lenguaje político tiene la facultad tanto de reconstruir el pasado como de proyectar escenarios futuros.”⁸

La tarea de los medios de comunicación consiste, entonces, en descomponer la artillería de la guerra psicológica que ha convertido en actos naturales prácticas contra la humanidad, como la muerte y el terror. Si las representaciones sociales promovidas a través de los medios permiten hacer una lectura de la violencia y de la guerra psicológica, también será posible desde allí ver cómo la sociedad construye significados de reconciliación, aún en medio del conflicto. No es necesario el fin de la violencia física para luchar contra la violencia simbólica. En palabras de Foucault, se trata de “politización, que consiste en volver a dar significado a los símbolos que lo han perdido, y dar símbolo a los significados que no lo tienen. La lucha desde lo simbólico adquiere de esta forma cada vez más importancia, pues implica desarrollar la capacidad de invención, de crítica, de

⁸ MURRAY, Edelman. *La construcción del Espectáculo político*. Ediciones Manantial, 1991.

creación. No es fácil, por supuesto, inventar frente al poder de lo instituido”⁹ –el poder de la guerra– pero uno de los caminos parte de la “acción reflexiva” a la que invita el lenguaje.

De esta argumentación nace el objetivo del presente trabajo de grado. Analizar el discurso editorial del periódico El Tiempo permitirá dilucidar el tratamiento que le confiere el diario más leído de Colombia a la construcción social de conocimiento fundado en la paz, el perdón y la reconciliación. Se tomará como periodo de estudio el último año de gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (agosto de 2009 y julio de 2010) porque recoge el balance que deja en el imaginario colectivo y en la agenda pública su gestión de gobierno durante ocho años. El 2010 fue un año definitivo en la medida en que se frustraron las posibilidades de un tercer periodo presidencial para uno de los ex mandatarios de mayor popularidad en la historia de Colombia¹⁰. Se trató de un periodo en el que predominó un clima de polarización entre el gobierno y la oposición política y entre las pretensiones de la política de Seguridad Democrática y las guerrillas, particularmente las Farc. Adicional a esto, se percibía un halo de optimismo y triunfalismo por parte de las Fuerzas Militares, el Gobierno y la Sociedad Civil por considerar como cercano el fin de los “terroristas” de las Farc¹¹.

El análisis propuesto trascenderá el papel del discurso como producción de información para dilucidar las representaciones sociales que potencialmente podrían construir una predisposición social hacia el perdón y la reconciliación en el marco del actual conflicto armado.

⁹ BARRERO, Edgar. *De Macondo a mancuso. Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Una aproximación desde la psicología social crítica*. Ediciones Cátedra Libre. Bogotá, 2008. Segunda edición. Pag.104.

¹⁰ Según el diario El Espectador, Uribe dejó el poder con un poco más de la tercera parte del país respaldando su gestión. www.elespectador.com 29 julio de 2010.

¹¹ Entre los hechos que contribuyeron al clima de positivismo vale resaltar la muerte natural de Manuel Marulanda Vélez, alias tirofijo, el éxito de la Operación Fénix en la que murió el canciller de las Farc Raúl Reyes, la Operación Jaque que logró la libertad de 15 secuestrados y la Operación Camaleón con la que se alcanzó la libertad del General Mendieta luego de 12 años de cautiverio.

Se realiza este análisis bajo el paradigma de que la reconciliación en el actual conflicto en Colombia sería resultado de la construcción de un conocimiento social que permita interiorizar nuevas ideas y cuestionar aquellas ya existentes. La búsqueda del perdón y la reconciliación a través de los usos del lenguaje de los medios de comunicación brindaría otra lectura de esa etapa posconflicto en la que la víctima recrea sentimientos que propician la continuación de la violencia.

Teniendo en cuenta que el contenido editorial y noticioso de un medio de comunicación modela modos de ver y pensar un hecho social, es preciso analizar las formas del lenguaje, explícitas e implícitas, que adquieren las editoriales del periódico El Tiempo y a través de las cuales le confieren más o menos protagonismo al conflicto y la violencia, o al perdón y la reconciliación en Colombia. Esto resulta definitivo teniendo en cuenta que del estilo lingüístico y narrativo depende la representación social del conflicto que creen o confirmen los lectores.

En este punto es necesario aclarar que no se pretende analizar el efecto que el discurso tiene en los lectores, sino la mayor o menor prioridad que se concede a la construcción social de la violencia y la reconciliación. Según Jorge Iván Bonilla las representaciones sociales “configuran maneras de darle sentido a la existencia”¹², de tal modo que resulta significativo observar de qué forma el periódico El Tiempo configura maneras de darle sentido a escenarios de reconciliación y perdón. En otras palabras, cuáles son los referentes de los que se vale para, si es el caso, promover la paz en el país.

Las editoriales constituyen una sección idónea para el análisis, teniendo en cuenta que es el espacio a través del cual el medio trasciende la mera tarea de informar para analizar y asimismo asumir la responsabilidad de construir y perfilar la realidad, además de convertirse en mediador según su inclinación política e ideológica. De modo que el propósito, finalmente, será dilucidar la línea discursiva

¹² BONILLA, Jorge, GARCIA, María. *Los Discursos del Conflicto. Espacio Público, Paros Cívicos y Prensa en Colombia*. Pontificia Universidad Javeriana, 1998. Primera Edición.

que maneja el diario en lo que tiene que ver con la conformación de un consenso social basado en conceptos como el perdón y la reconciliación. Se pondrá en evidencia el perfil del medio de comunicación como mediador en el conflicto o multiplicador de discursos que lo perpetúan.

Hay que decir que el perdón y la reconciliación con su base ética y religiosa no diferencian actores ni ubican en un escalafón actos violentos de menor a mayor impacto para conocer la medida de la justicia. Órdenes de ese tipo son adecuados para la justicia que define beneficios jurídicos como la reducción de la pena, la amnistía o el indulto. El perdón lo defino desde este punto como “un elemento fundamental que, al liberarnos de la irreversibilidad de las acciones pasadas, nos permite recuperar lo originario de la condición humana, esto es, la libertad, y por ello, resulta primordial para la política. Es la única acción que no determina una reacción que alimente el pasado y lo perpetúe.”¹³ De acciones de este tipo surge la posibilidad de asumir nuevos comportamientos y pensamientos frente al otro “diferente”. Es precisamente ésta la apertura a escenarios de reconciliación, entendida como “atraer o acordar los ánimos desunidos.”¹⁴

Este trabajo de análisis del discurso editorial del periódico El Tiempo es relevante en el campo de las ciencias políticas teniendo en cuenta que los medios –como constructores de realidad– son agentes definitivos en el cambio o continuismo del tejido social. Según Max Weber, la política representa “el esfuerzo para participar en el poder, bien sea entre Estados, bien sea dentro de un Estado o entre los grupos humanos que este abarca.”¹⁵ Lo que traduce que no sólo se hace política desde los escenarios propios del Estado, sino desde todo grupo que manifieste sus esfuerzos por ejercer poder en el entramado social. Es así como los medios de comunicación cumplen un papel definitivo: a través del lenguaje y los símbolos,

¹³ ARENDT, Hanna, mencionada en POLO, Joaquín. *El perdón como posibilidad para vivir juntos*. Tesis de Maestría en Filosofía. Universidad Javeriana, 2006.

¹⁴ Real Academia Española. www.rae.es

¹⁵ PASQUINO, Gianfranco. *Manual de la Ciencia Política*. Editorial Alianza, 1993. Cita tomada de la Tesis de Laura Franco (2001). *Lo que el periódico El Tiempo construyó de los actores del conflicto interno colombiano*. Bogotá, D.C. Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política.

hechos discurso, construyen representaciones sociales de la realidad con potencial de cambiar el rumbo de una nación, a través del impacto en los imaginarios sociales vigentes. Los medios de comunicación son actores políticos en la medida en que se valen de su poder para legitimar o destruir escenarios y personajes de la vida pública nacional. El juego político cobra protagonismo en el momento mismo en que los medios, a través de los usos del lenguaje, dejan ver lo visible y lo oculto, lo reverente e irreverente, lo que es digno de aval y aquello que merece críticas sostenidas.

1.2 Pregunta de Investigación

¿Las representaciones sociales proyectadas por las editoriales del periódico El Tiempo están más asociadas al perdón y la reconciliación o al conflicto y la violencia?

1.3 Objetivo General

Analizar el discurso editorial del periódico El Tiempo con el fin de establecer su contribución a la construcción de representaciones sociales asociadas al perdón y la reconciliación, y al conflicto y la violencia durante el periodo comprendido entre agosto 2009 y julio 2010. Este análisis cubre menciones implícitas y explícitas.

1.4 Objetivos Específicos

- Realizar un análisis cuantitativo que permita la clasificación de las editoriales de El Tiempo durante el periodo agosto 2009- julio 2010, según el tratamiento del lenguaje dado al perdón y la reconciliación y sus antítesis, guerra, conflicto, violencia y similares.
- Identificar los usos del lenguaje que relacionan a determinados actores sociales como responsables de la prolongación de la violencia o la búsqueda de la reconciliación.

- Construir los programas narrativos para cada uno de los ejes de estudio; reconciliación y perdón, y conflicto y violencia, con la inclusión en cada eje de otros tratamientos del lenguaje similares.
- Construcción del programa narrativo editorial de El Tiempo para el periodo de estudio agosto 2009- julio 2010.
- Comparar la construcción social del perdón y la reconciliación con aquella de la violencia y el conflicto que revela el periódico El Tiempo a través de sus editoriales.

1.5 Hipótesis

La hipótesis principal desde la que parte este análisis considera que el discurso editorial del periódico El Tiempo sí aporta a la construcción de representaciones sociales asociadas a la reconciliación y el perdón, y la violencia y el conflicto.

1.6 Justificación

La construcción simbólica del perdón desde los medios de comunicación es una fuente de reconciliación, en tanto tiene la facultad para inhibir la transformación de víctima a victimario. El lenguaje es la piedra angular; a través de él se evidencia el problema social de la venganza y se construye, mediante representaciones sociales, la predisposición para la paz. Se trata de una acción política y comunicativa capaz de racionalizar el aún abstracto concepto de la reconciliación en Colombia.

En ambos escenarios, el académico y el profesional, es extraño contemplar la posibilidad de una búsqueda de la reconciliación a través de los símbolos y el lenguaje. Primero porque resulta incoherente soñar con la construcción social de la reconciliación en medio de la prolongación de la guerra; segundo, porque materializarlo a través de la palabra –para muchos- es un imposible. Sin embargo, “hacer mundo”, concepto acotado por Nelson Goodman¹⁶, sí es posible a través

¹⁶ MURRAY, Edelman. *La construcción del Espectáculo político*. Ediciones Manantial, 1991, p. 11

del lenguaje y su difusión masiva. Esto es precisamente lo que pretende este trabajo con el análisis del discurso del periódico El Tiempo: encontrar las representaciones sociales del perdón y la reconciliación, y de violencia y conflicto, que construye el periódico durante el último año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez sólo a través de sus editoriales. Definir cuál es el mundo, con relación al perdón y la reconciliación, que construye y proyecta El Tiempo a través de su posición institucional.

La necesidad de realizar esta investigación nace de afirmaciones como que “El espectáculo constituido por las noticias continuamente construye y reconstruye los problemas sociales.”¹⁷ En este sentido, los medios de comunicación igualmente tienen las competencias para construir soluciones a las problemáticas que tiene y padece la sociedad. Esto es, su facultad no se ciñe solamente a la construcción de lo negativo, también a la recuperación, proyección y exaltación de lo positivo. Así las cosas, lograr la construcción social del perdón y la reconciliación exige a los medios de comunicación implementar usos del lenguaje que permitan luchar contra las barreras simbólicas fortalecidas por la guerra, que a través del lenguaje han exacerbado el miedo y el odio en el conjunto de la población.

En esta línea no hay que pasar por alto que los medios son un filtro de noticias y a partir de sus inclinaciones crean significaciones para aprehender la realidad. La propuesta de este estudio está basada en la responsabilidad de los medios masivos por tres razones prioritarias: a) tienen la capacidad de trascender límites locales, nacionales e internacionales, b) su punta de lanza es la construcción de discursos, la misma herramienta utilizada en el campo de la guerra psicológica, c) a través del lenguaje y los símbolos, los medios dan a conocer representaciones sociales que revelan el sentido de la realidad y lo que significa ser y hacer parte del entramado social.

¹⁷ Ibid. p. 7

En un análisis del discurso editorial del periódico más leído en Colombia no debe sorprender el tratamiento frecuente de temas relacionados con el conflicto armado, en tanto es la realidad en la que se circunscribe. En cambio, destacar el papel de mediador de un periódico en medio del conflicto, a través de tratamientos del lenguaje que consientan implícita o explícita la búsqueda de la paz, es un hallazgo. Por eso la pregunta: ¿la línea editorial de este medio da cabida a representaciones sociales que permiten la construcción de escenarios de paz? ¿Puede el periódico El Tiempo potenciar la construcción de una base social basada en la reconciliación a través del lenguaje que utiliza? ¿Su discurso editorial es promotor de consenso o disputa frente a la solución del conflicto armado colombiano?

Este estudio trascenderá de la labor informativa que cumple el periódico a su accionar comunicativo. Esto es, cómo utiliza la información con que cuenta para ser un agente político en la medida en que construye representaciones sociales de la reconciliación y el perdón, o el conflicto y la violencia. Son esas representaciones los lineamientos que modelan formas de ver y aprehender en medio de la guerra, lo que en otras palabras implica intervenir en imaginarios arraigados en el tejido social y que son compartidos por otras plataformas mediáticas.

Claramente, alcanzar escenarios de reconciliación en el país es una responsabilidad del Estado, sin embargo, los medios de comunicación tienen la facultad para contribuir porque cuentan con las competencias necesarias para guiar la opinión pública. La capacidad está dada por su principal característica, la de difundir mensajes masivamente que alteran y modifican puntos de vista y comportamientos. Lo anterior es posible por las numerosas posibilidades que tiene el lenguaje para crear o destruir: actores, ideales, conceptos e imágenes previamente adquiridas. De ahí que sea pertinente la reflexión sobre el potencial del lenguaje y los símbolos como posibilidad de construcción de escenarios de reconciliación y perdón.

1.6.1 El Tiempo, un “todo poderoso”¹⁸ del lenguaje

La importancia de realizar esta investigación a partir del discurso editorial de El Tiempo radica en el posicionamiento del periódico como un medio de comunicación capaz de determinar temas de debate y legitimar actores, escenarios y acciones políticas en el entramado social. No obstante, más allá de esta descripción, hacemos referencia a un periódico que por su trayectoria se ha convertido en un actor más en la escena política colombiana, por esto se erige como punto de referencia en la construcción de sentido en temas tan álgidos como el conflicto armado en el país. El Tiempo construye poder a través del lenguaje, lo que le permite hoy intervenir de una manera u otra en la realidad que se teje desde todas las aristas, política, económica, social, cultural y del conflicto armado.

Se trata de “una institución de mediación cultural y profesional, que no sólo juega un papel estratégico en la constitución del discurso social y en la (re) elaboración de representaciones sobre los actores, las temáticas y conflictos que disputan su derecho a la expresión pública, sino que además participa en las luchas simbólicas por la construcción del consenso colectivo y las definiciones de lo social”¹⁹. El conocimiento de esas “luchas simbólicas” mencionadas por Jorge Iván Bonilla es lo que, finalmente, busca el análisis de sus editoriales. Se trata de luchas del lenguaje por “(re)elaborar” las representaciones de lo que significa hacer parte del conflicto. Una batalla de símbolos frente a lo instituido desde la guerra psicológica que permita no solamente adoptar marcos de interpretación de la violencia, sino también asumir escenarios de reconciliación. Es un giro de 180 grados frente a la concepción plana y superficial de los medios de comunicación hoy, pues no se trata sólo de informar de la guerra, sino de formar sobre el fin de la guerra.

¹⁸ La calificación “todopoderoso” busca hacer alusión al gran potencial con que cuentan los medios de comunicación para contribuir a la “construcción de mundos” previamente concebidos.

¹⁹ BONILLA, Jorge, GARCIA, María. *Los Discursos del Conflicto. Espacio Público, Paros Cívicos y Prensa en Colombia*. Pontificia Universidad Javeriana, 1998. Primera Edición. p. 12

En la escogencia de El Tiempo como el medio de comunicación a analizar tienen que ver varios argumentos: se trata de un periódico de circulación nacional testigo de un siglo de historia en nuestro país. Fundado en enero de 1911, a través de 10 décadas este diario se ha convertido en un ícono de la información y referente clave para comprender los grandes sucesos en la historia de Colombia. El Tiempo “ha sido el reflejo de los defectos y virtudes de la nación colombiana y el mejor testigo de su esplendor y de sus altibajos dramáticos”²⁰. Su cercanía con el poder político²¹ marcó sus inicios, lo que le permitió convertirse desde muy temprano y hasta hoy en un preceptor para diferentes nichos. No obstante, vale aclarar que en sus principios el diario El Tiempo manifiesta que “como diario liberal y demócrata, es independiente de cualquier directiva política y de todo grupo.”²²

El Tiempo ha logrado consolidar su experticia periodística con crecimiento y liderazgo constantes. Según los resultados de la tercera medición del Estudio General de Medios (EGM), El Tiempo encabeza la lista de diarios de información general con 1'179.040 lectores diarios y 5'725.523 lectores mensuales²³. En el número de lectores diarios, la ventaja frente a El Espectador, periódico que se ubicó en el segundo puesto de la medición, es cuatro veces mayor. Ahora bien, los domingos, día de mayor circulación del periódico, El Tiempo sigue liderando con 2'014.623 lectores, muy cerca de duplicar su número de lectores diarios.

²⁰ Introducción de Hernando Santos Castillo al Manual de Redacción de El Tiempo. *Manual de Redacción*, Bogotá, 2000.

²¹ “El Tiempo fue fundado en 1911 por Alfonso Villegas, un inspirador del Republicanismo, enésimo proyecto de gobierno conjunto y de conciliación entre liberales y conservadores, El Tiempo pasó dos años después a manos de Eduardo Santos, quien sería más adelante Presidente de la República.” Ibid. Desde el año 2007 El Tiempo pertenece al grupo español Planeta con un 55% de sus acciones, no obstante, en el imaginario de los colombianos este diario continúa siendo identificado con el poder. Aún más hoy con Juan Manuel Santos como Presidente de la República.

²² Ibid.

²³ La cifra por día representa un crecimiento del 3.5% frente a la medición anterior, cuando sumaron 1'139.052 lectores. La medición por mes igualmente representa un incremento, esta vez del 3%, al pasar de 5'554.474 a 5.725.523 lectores mensuales. EL TIEMPO, “*El Tiempo crece y sigue liderando*”. 28 de noviembre de 2010.

Ciertamente, El Tiempo juega un papel crucial para los colombianos en materia de opinión. Según un estudio realizado por Cifras & Conceptos S.A.²⁴, que revela las percepciones de los líderes de opinión del país sobre temas políticos, económicos, sociales y ambientales a nivel nacional, El Tiempo es el medio impreso más consultado y leído para mantenerse informado. Ocupa el primer lugar con un 32%, en un segundo lugar se encuentra la revista Semana con un 20%. Según el mismo estudio, la plataforma de El Tiempo ocupa el primer lugar en consultas en la web con un 26% frente a un 15% del periódico El Espectador. La relevancia del estudio radica en que se trata del medio de comunicación escrito más consultado por líderes de opinión, lo que en el escenario de los medios cobra mayor importancia, siendo estos líderes un referente social no sólo en temas de conflicto, sino en cualquier tipo de contenidos.

Los resultados del estudio demuestran que El Tiempo “no solamente se ha convertido hoy en una próspera y diversificada empresa de comunicaciones, sino que ha fortalecido una presencia y autoridad que pueden ser controvertidas pero que nadie se atrevería a negarle.”²⁵ “El Tiempo se ha constituido en un escenario fundamental de la construcción de la vida pública nacional, en tanto sus producciones informativas participan en la organización de la agenda pública ciudadana y en la legitimación de los actores, los temas y los espacios que son objetivo del interés público. De ahí la capacidad de referencialidad social que lo caracteriza respecto a los sectores políticos y sociales con posibilidad de deliberación y decisión en el país.”²⁶ El aprovechamiento de esa “referencialidad social” para la promoción de un consenso social de reconciliación será develada a través del análisis de su discurso editorial.

²⁴ CIFRAS Y CONCEPTOS, *II Panel de Opinión 2010*. Medición realizada entre julio 15 y octubre 8 de 2010. Primera edición, Noviembre de 2010.

²⁵ Introducción de Hernando Santos Castillo al Manual de Redacción de El Tiempo. *Manual de Redacción*, Bogotá, 2000.

²⁶ BONILLA, Jorge, GARCIA, María. *Los Discursos del Conflicto. Espacio Público, Paros Cívicos y Prensa en Colombia*. Pontificia Universidad Javeriana, 1998. Primera Edición, p.13

El Tiempo se reconoce como “un periódico de carácter liberal, independiente, cuya misión consiste en informar a los colombianos sobre lo que acontece en la ciudad, en el país y en el mundo, de manera oportuna, objetiva, imparcial y veraz. También tiene la obligación de orientar a la opinión pública, dentro del marco previsto en la Constitución y las leyes.”²⁷ Es decir, coincide con la idea central planteada en esta tesis y a través de varios autores: los medios de comunicación tienen la capacidad de formar a través de nuevas, transformadas o ya conocidas representaciones sociales.

En el marco del conflicto armado que vive Colombia El Tiempo “favorece todos los esfuerzos que se realicen en pro de la paz nacional e internacional y rechaza cualquier movimiento que invoque o ejercite la violencia o las vías de hecho para la consecución de sus fines.”²⁸ Este es uno de los principios que bien puede verse reflejado en la construcción del programa narrativo de sus editoriales. Vale la pena acotar que el estudio podría demostrar la aplicación de dicha proposición aún cuando la promoción de actos pacíficos no sea evidente de manera explícita a través del lenguaje, en tanto “favorecer los esfuerzos que se realicen en pro de la paz” puede ser verdad cuando no se apoyan actos que “ejercitan la violencia”.

Ahora bien, El Tiempo es “un órgano formador de opinión, por medio de las informaciones y los hechos comprobados que publica, y es también un diario formado por la opinión pública que lo influye y lo presiona a través del plebiscito diario que constituye la lectura de sus páginas.”²⁹ En este análisis, el diario de manera independiente podrá no reflejar una mirada hacia la reconciliación en el país, a menos de que se trate de una temática planteada por la agenda pública. En otras palabras, es conocido que la opinión pública lo influye y presiona a través de ese plebiscito diario que reconoce en su auto-descripción. No obstante esa posibilidad, el periódico también puede ser autoregulador de sus contenidos

²⁷ EL TIEMPO. *Manual de Redacción*. Bogotá, 2000.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

editoriales y dar cabida a tratamientos que representen la apertura hacia otras instancias del conflicto, como el perdón, la búsqueda de la paz y la reconciliación.

1.6.2 ¿Por qué las editoriales?

La editorial es el espacio institucional en el que se evidencia la posición ideológica del medio de comunicación. Es el lugar donde los límites de expresión desbordan los intentos de objetividad, estableciendo marcos de pensamiento, acción y reacción frente a los hechos sociales que son noticia.

Opositores a este tipo de análisis de contenido plantean que la editorial es una sección de lectura mínima cuyas representaciones sociales no trascienden al mismo número de lectores que bien puede tener la primera plana del medio impreso; la razón es que las editoriales son espacios más bien frecuentados por intelectuales que prefieren trascender la noticia rasa y conocer la interpretación particular del medio. No obstante, las editoriales suponen el único escenario en el que no cabe duda sobre la subjetividad del discurso y plena autonomía de su producción, lo que no sucede en el resto del proceso porque “un periodista es un relator de los hechos y no su protagonista, de manera que en sus textos tiene la obligación de abstenerse de emitir opiniones personales sobre los sucesos o sobre las fuentes y protagonistas de los mismos.”³⁰

La editorial, entonces, pone en escena la clara posición del medio de comunicación sobre la realidad que afronta “de acuerdo con un marco de representación que es el marco ideológico, ético y político desde el cual el periódico socializa sus propuestas.”³¹ Con base en su propio esquema de acción las editoriales “representan ideologías, valores o posturas morales y se convierten en modelos de rol, puntos de referencia o símbolos de amenaza o maldad.”³²

³⁰ Ibid.

³¹ BONILLA, Jorge, GARCIA, María. *Los Discursos del Conflicto. Espacio Público, Paros Cívicos y Prensa en Colombia*. Pontificia Universidad Javeriana, 1998. Primera Edición. p. 14.

³² MURRAY, Edelman. *La construcción del Espectáculo político*. Ediciones Manantial, 1991, p. 8

No se trata de una subvaloración de la labor informativa de los medios, sino una exaltación del poder de la editorial como espacio para construir significado, desarrollar subjetividad, transformar y crear imaginarios sociales. Así como las columnas de opinión descubren el punto de vista de un analista, la editorial dilucida la posición institucional del medio de comunicación. “Es un espacio clave para conocer políticas informativas así como posturas ideológicas y formas de conocimiento que constituyen el pensamiento rector del medio periodístico en su consecuente tratamiento noticioso”³³.

Si bien es cierto que las representaciones que adoptan los grupos sociales son producto de la información y opinión proveniente de varios frentes institucionales y líderes de opinión, El Tiempo como una de las más importantes guías consultadas por los colombianos cobra protagonismo. Referente a nuestro objetivo, es un espacio idóneo para la construcción de representaciones sociales de la violencia y la reconciliación, y en esa tarea es autónomo de decidir su *agenda setting* y definir por qué caminos guiar la opinión pública. El Tiempo contribuye en “el modo en que una sociedad piensa el conflicto y actúa con respecto a él”³⁴. Por eso, la meta es el hallazgo de esos “sentidos” de perdón y reconciliación, y conflicto y violencia, proyectados en un discurso que se elabora sin restricciones. Por eso la escogencia de la editorial, un espacio reconocido por su paso del relato noticioso a la opinión capaz de transformar conductas y pensamientos en el entramado social.

1.7 Metodología

La búsqueda de la representación social de la reconciliación que construyen las editoriales del periódico El Tiempo comprendidas entre agosto 2009 – julio 2010 demanda en primer lugar la elaboración de un marco teórico que presente una disertación sobre los conceptos clave que sirven de fundamento para el análisis del discurso editorial. El marco teórico plantea conceptualmente el alcance del

³³ Bonilla, Jorge Iván. *Violencia, medios y comunicación. Otras pistas en la investigación*. Editorial Trillas, 1995, p. 15.

³⁴ BONILLA, Jorge, GARCIA, María. *Los Discursos del Conflicto. Espacio Público, Paros Cívicos y Prensa en Colombia*. Pontificia Universidad Javeriana, 1998. Primera Edición. p. 35.

análisis, por eso se abarca: a) La guerra psicosocial como fenómeno de escenarios violentos, su razón de ser, sus principios, características y consecuencias en la sociedad para lograr un mayor acercamiento al contexto. b) La violencia simbólica como una de las causas de la generación del sentimiento de rencor y venganza en un individuo víctima del conflicto. c) El tratamiento del concepto de resistencia planteado por Michel Foucault que traduce las posibilidades que tiene la sociedad para resistir ante fenómenos violentos. d) El significado e impacto que tiene en la sociedad la construcción de representaciones sociales.

Una vez terminada la construcción del fundamento teórico, continúa un trabajo riguroso y detallado. Cada día El Tiempo publica dos editoriales que corresponden a la edición nacional y local, esta última circula sólo para Bogotá y municipios aledaños. Esto exige la lectura y clasificación de aproximadamente 700 editoriales; un número importante de discursos útiles para definir la inclinación periodística del medio de comunicación en lo que es nuestro objetivo general: hallar qué tipo de representaciones sociales del perdón y la reconciliación, y de la violencia y el conflicto, construye el periódico El Tiempo a través de sus editoriales. Una vez realizada la lectura fueron seleccionadas 63 editoriales por la relación –explícita o implícita– de su discurso con temáticas alusivas a la reconciliación y otras relativas a la exaltación de imaginarios violentos. Para facilitar la comprensión de los análisis a realizar, desde este punto llamaré mensajes Tipo 1 a aquellos que incluyan tratamientos del lenguaje, giros lingüísticos, metáforas y adjetivación referente a la reconciliación y el perdón. Por su parte, aquellos usos del lenguaje, metáforas y adjetivación que aluda a la violencia, la guerra o el conflicto se denominarán mensajes Tipo 2. En este cuadro se presenta una muestra de posibles configuraciones del lenguaje según tipo de mensaje.

Mensajes Tipo 1: perdón y reconciliación	Mensajes Tipo 2: conflicto y violencia
Reparación	Mano dura
Acuerdos de paz	Brutalidad
Reconciliación	“no puede temblar la mano”
Desmovilización	Medidas de choque
Diálogo	“Repeler a los violentos”
Intercambio Humanitario	“El más severo de los castigos”
“Superación de la vía armada”	Salvajismo
Desarme	Rescates militares
Respeto	“no negociar acuerdo humanitario”

Cuadro 1. Configuraciones del Language Tipo 1 y Tipo 2

Con el fin de establecer la representación social de la reconciliación y la violencia que construye El Tiempo a través de su sección editorial se realizarán tres análisis centrales:

- 1. Análisis Cuantitativo:** se contará el número de editoriales que relacionan los mensajes tipo 1 y tipo 2 con cada uno de los actores del conflicto armado mencionados en las editoriales objeto de estudio. De este modo, se podrá identificar la proporción de mensajes tipo 1 frente a los mensajes tipo 2 en las editoriales y su preponderancia por actor. Se concluirá cuantitativamente si el discurso editorial del periódico El Tiempo tiende a la construcción de mensajes de perdón y reconciliación, o de violencia y conflicto, y con relación a qué tipo de actores realiza dicha construcción.
- 2. El Análisis Predicativo** (propuesto por A.J. Greimas): organizará el contenido de las editoriales de El Tiempo previamente seleccionadas para segmentarlas a partir de los componentes: actores, funciones, calificaciones y símbolos. Los actores son “los protagonistas de los hechos y de las acciones relatadas”. Las funciones son “las actividades o roles que desempeñan los actores del discurso”, las calificaciones son “las

propiedades o atributos que definen a los actores del discurso.”³⁵ Una cuarta división (que no es propuesta por A.J. Greimas) son los símbolos: todas aquellas funciones y calificaciones que implícitamente construyen un mensaje de reconciliación o de violencia. Grosso modo, el objetivo del análisis predicativo es “clasificar las relaciones entre los actores discursivos, sus funciones y cualidades”³⁶ en torno a los dos posibles mensajes: tipo 1 (de reconciliación y perdón) y tipo 2 (de violencia y conflicto). El análisis predicativo supone la base de cada uno de los programas narrativos.

3. **Programa narrativo** Tipo 1 y Tipo 2: Con base en los análisis predicativos (Tipo 1 y Tipo 2) se procederá a la construcción de los programas narrativos correspondientes a cada uno de los mensajes, tipo 1 y tipo 2. Entiéndase por “programa narrativo” el discurso que construyó e identifica al periódico El Tiempo respecto a cada una de las temáticas de estudio.

-

4. **Análisis Crítico:** Es la última parte analítica y en la cual se confrontan ambos discursos, Tipo 1 y Tipo 2, para establecer la preponderancia de uno u otro en las editoriales comprendidas durante el periodo de estudio. Se dilucidará a quiénes, bajo qué situaciones y con qué propósito se delega la responsabilidad de la búsqueda de la paz o la culpabilidad de la ola de violencia.

³⁵ BONILLA, Jorge, GARCIA, María. *Los Discursos del Conflicto. Espacio Público, Paros Cívicos y Prensa en Colombia*. Pontificia Universidad Javeriana, 1998. Primera Edición. p. 66.

³⁶ Ibid.

2 MARCO TEÓRICO

El marco teórico de este trabajo está dividido en cuatro apartados. En una primera fase se aborda la definición de la guerra psicosocial, sus características y efectos, para lo cual son pertinentes los planteamientos de Édgar Barrero en “De Macondo a mancusu. Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Una aproximación desde la psicología social crítica.” Una segunda fase argumentativa está relacionada con los orígenes de la venganza a partir de la violencia simbólica. El soporte teórico se toma de María Victoria Uribe y sus planteamientos en “Antropología de la inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia.” En este mismo apartado se incluye el tratamiento de “la resistencia”, término acotado por Michel Foucault, útil porque devela el modelo para enfrentar los efectos de la violencia simbólica, elemento central de la guerra psicosocial. La tercera parte incluye la definición, relevancia e impacto de las representaciones sociales como constructoras de realidad, para lo que son definitivos los acercamientos realizados por Jorge Iván Bonilla en “Los Discursos del Conflicto. Espacio público, paros cívicos y prensa Colombia.” Para concluir este acercamiento teórico se hará referencia a la importancia del lenguaje como principal dispositivo de los medios de comunicación para construir “mundos”³⁷. En esta fase se tendrá en cuenta a Edelman Murray y su discurso en “El espectáculo político de los medios de comunicación”.

Así las cosas, el siguiente capítulo presenta al lector el fundamento conceptual del análisis narrativo y crítico que se realizará de las editoriales del periódico El Tiempo comprendidas entre agosto 2009 y julio 2010.

³⁷ MURRAY, Edelman. *La construcción del Espectáculo político*. Ediciones Manantial, 1991, p. 11

2.1 La cara de la guerra psicosocial

“La guerra no se da sólo en el plano de la confrontación armada. Al contrario, gracias al desarrollo de los medios masivos de comunicación, la guerra busca producir un impacto en la estructura psicológica de poblaciones enteras, de tal forma que se apoyen acciones designadas como justas y necesarias y se adhiera pasivamente a ciertos ideales; convirtiendo a la población civil en actor directo y/o indirecto de la confrontación.”³⁸ La guerra psicosocial utiliza “dispositivos de poder mediante los cuales se pretende naturalizar y justificar el uso de la fuerza y los recursos del Estado para eliminar física o simbólicamente a aquellas personas y organizaciones, señaladas como potencialmente enemigas del “desorden” social establecido.”³⁹ El temor como estado natural, la sed de venganza y un halo generalizado de desconfianza son resultado de este tipo de violencia, que cobra mayor fuerza a través del poder de las representaciones sociales que del conflicto construyen los medios de comunicación. Esto es, la acción violenta es degradable por sí sola, pero sus efectos se multiplican en la medida en que son proyectados a todo el conjunto poblacional.

Teniendo en cuenta que el principal instrumento de esta *nueva* violencia es el lenguaje, sobre los medios de comunicación pesa aún más la responsabilidad de compartirla, en la medida en que están en capacidad de conformar “espacios políticos para que el conflicto pueda plantearse y dirimirse, como única alternativa para superar el estado de naturaleza, es decir la guerra.”⁴⁰

³⁸ Ibid. p. 62

³⁹ BARRERO, Edgar. *De Macondo a mancusu. Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Una aproximación desde la psicología social crítica*. Ediciones Cátedra Libre. Bogotá, 2008. Segunda edición. p. 33.

⁴⁰ Ibid.

Según León Rozintchner⁴¹, el control de la subjetividad que permite diferentes estadios de dominación sobre los individuos y grupos sociales se libra en el terreno psicológico a través de tres dispositivos⁴².

Acción persuasiva o persuasión social coercitiva: “Actuará sobre las opiniones, lo intelectual y lo consciente (...) sirve para inducir un cambio de conductas y actitudes, o para crearlas.”⁴³ A través de la persuasión sería posible que el individuo apruebe los móviles de la muerte física o simbólica de una persona que “no resulte funcional al sistema.”⁴⁴

Acción sugestiva o sugestión y manipulación psicoemocional: “Actuará sobre las emociones y sentimientos, lo afectivo y lo subconsciente.”⁴⁵ La sugestión logrará despertar afectos inconscientes y el respaldo tácito hacia actos criminales como vía efectiva para acabar con el “enemigo”. En este dispositivo no hay racionalidad, sino “manipulación emocional”⁴⁶.

Acción compulsiva o la angustia y el miedo paralizante: “Obtener que el hombre se someta acudiendo a las formas «instintivas», sólo atento a la conservación de la vida.”⁴⁷ El objetivo es generar división y fragmentación. Ante escenas de crueldad donde quien despierta la más mínima sospecha de oposición muere o desaparece, nace el terror y el miedo a perder la vida.

La utilización de los tres métodos de acción psicológica hasta hoy han “permitido una actitud tácita de respaldo de la población civil urbana a las atrocidades de la guerra, ampliamente denunciadas por la comunidad internacional, y al silencio y sometimiento de la población rural, intimidada, dando respuestas instintivas para

⁴¹ ROZINTCHNER, León. Efectos psicosociales de la represión. En: BARRERO, Edgar. *De Macondo a mancuso. Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Una aproximación desde la psicología social crítica*. Ediciones Cátedra Libre. Bogotá, 2008. Segunda edición. pp. 78-79

⁴² Los mismos dispositivos mencionados por ROZINTCHNER son nombrados por BARRERO bajo otras denominaciones. En este punto se procedió a la unión de las concepciones de ambos autores.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid. p. 115

⁴⁵ Ibid. p. 79

⁴⁶ Ibid. p. 116

⁴⁷ Ibid. p. 79

salvar la vida.”⁴⁸ Esta es una guerra que a través de la psicología logra que los hechos más aberrantes contra la integridad física y emocional del otro, “enemigo”, sean justificados o silenciados. La guerra psicosocial que libran los violentos y el Estado genera temor, miedo e impotencia, lo que resulta en el inicio de la sumisión del pueblo. El objetivo es persuadir y hacer que prácticas que normalmente serían condenadas, se conviertan en parte de la cotidianidad y la base de nuevas formas de pensar y actuar que terminan por legitimarlas.

Las dinámicas de la guerra ponen en evidencia que para ejercer el poder no basta con la acción militar. Es necesario buscar el favor de la sociedad o someter a aquellos que no favorecen la lucha a través de la violencia simbólica. “El objetivo, por supuesto, sigue siendo ganar la guerra; pero, ya que las raíces del conflicto radican en la misma población, una condición esencial para el triunfo estriba en ganar “las mentes y los corazones” de esa población”.⁴⁹ “No es en vano que instituciones como el Ejército y la Policía tengan sus propios programas de radio y televisión, a través de los cuales ponen a circular representaciones sociales, cargadas de valoraciones emocionales en la que se odia al “conflictivo” y se ama el “orden” y la “disciplina social””.⁵⁰

El objetivo de quienes ejercen este tipo de violencia es penetrar las mentes de los individuos y hasta de aquellos que no aprueban sus acciones contar con un respaldo tácito, en tanto el silencio no refuta sino consiente. Es lo que Edgar Barrero denomina “ambivalencia deseante”. La complicidad es evidente a través de la aceptación implícita de “aquellos programas que buscan la anulación de los enemigos no mediante su eliminación física, sino mediante su conquista psíquica”. Los desafectos existen, pero enmascarados por “sentimientos de inseguridad” que nacen de la “ejecución visible de actos crueles que desencadenan en la población

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ MARTIN – BARÓ, Ignacio. *Psicología social de la guerra*. Uca Editores. San Salvador, 1992. P. 17

⁵⁰ BARRERO, Edgar. *De Macondo a mancucho. Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Una aproximación desde la psicología social crítica*. Ediciones Cátedra Libre. Bogotá, 2008. Segunda edición. p. 55.

un miedo masivo e incontenible.”⁵¹ “No de otra forma se puede explicar la razón por la cual personas, en condiciones de extrema pobreza y víctimas directas de la guerra política, apoyan y defienden proyectos políticos que no mejoran su condición de vida, a largo plazo. Su subjetividad ha sido colonizada y su conciencia política confiscada por medio de sentimientos de miedo, angustia, impotencia y terror estatal.”⁵² Con esto se logra la naturalización de la guerra y su adopción como único camino para hacer prevalecer ideales de vida.

Las estrategias psicológicas hacen de esta una guerra premeditada en donde cobra protagonismo lo que Barrero denomina “montajes pulsionales. El riesgo es que a partir de las representaciones sociales creadas se originan nuevas (quizás violentas) maneras de comportamiento social. El “montaje pulsional” es posiblemente la principal arma utilizada en la guerra psicosocial porque permite que otros acepten como propia la realidad del *enemigo*. Es decir, quienes se valen de este tipo de violencia controlan pensamientos y comportamientos a través de mensajes intencionalmente contruidos con un único fin: ganar partidarios y callar a adversarios. “No es otra cosa que la instalación en los sujetos de una serie de dispositivos de manipulación mental para la aceptación pasiva de la realidad, previamente designada y codificada con el apoyo de mecanismos simbólicos ideologizados, trayendo como resultado la naturalización de hechos y discursos excluyentes y marginalizadores, en cualquier ámbito de interacción social.”⁵³

Quienes tienen el poder, político o de las armas, son “quienes delimitan los espacios, no sólo físicos, sino psicológicos, donde el sujeto puede pensar y movilizarse.”⁵⁴ La guerra, entonces, fabrica una nueva sociedad, donde las acciones y pensamientos están condicionados por los imaginarios rectores de la represión.

⁵¹ Ibid. p. 114

⁵² Ibid. p. 114

⁵³ Ibid. p. 59

⁵⁴ Ibid. p. 60

Para Joaquín Samayoa⁵⁵ este tipo de guerra lleva a la deshumanización, se alteran la veracidad de la comunicación, la sensibilidad frente al dolor y la esperanza de un mejor mañana. La desesperanza que menciona Samayoa “es una de las consecuencias más dramáticas de la guerra psicosocial, pues de tanto soportar la violencia física y el bombardeo ideológico, la persona y los grupos humanos terminan cayendo en estados de resignación y postración alienantes, en los que se llega inclusive a justificar que unos actúen con violencia sobre otros.”⁵⁶ Frases como “esto no lo cambia nadie”, “de algo nos tenemos que morir” o “se lo buscó”⁵⁷ son construcciones sociales de la justificación del mal que vivimos. La naturalización de “la máquina de guerra” psicológica como la denomina Barrero, es cada vez más común, teniendo en cuenta que el dominio y el control se ejercen a través de la palabra. No sería descabellado hablar de una guerra informativa, en tanto verbal y no verbalmente, se trata de comunicaciones que van y vienen dejando huella en la mente, en el vulnerable terreno psicológico del ser humano. El efecto es devastador, teniendo en cuenta que las consecuencias en la mentalidad de la víctima se magnifican en su contacto con el otro, por eso se referencia a una guerra psico-social.

2.1.1 Elementos constitutivos de la Guerra Psicosocial

Edgar Barrero, autor que interpreta la violencia simbólica como producto de las representaciones sociales, hace una clara descripción desde los elementos constitutivos centrales de esta guerra psicológica.⁵⁸

Selección de información: “El sujeto colombiano actúa, piensa e interactúa, con los referentes simbólicos que imponen los grupos protagonistas del conflicto armado.” Dependiendo de su posición social, cada individuo incorpora la información necesaria para su desarrollo.

⁵⁵ SAMAYOA, Joaquín. *Guerra y deshumanización: una perspectiva psicosocial*. En: BARRERO, Edgar. *De Macondo a mancuso. Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Una aproximación desde la psicología social crítica*. Segunda edición, abril de 2008. p. 70.

⁵⁶ Ibid. p. 71-72

⁵⁷ Ibid. p. 72

⁵⁸ Ibid. p. 82-83

Esquematación cognoscitiva: “En medio de condiciones de conflicto armado, el sujeto estructura unos esquemas de pensamiento para la guerra.” Aquí cabe la mentira, los mecanismos de ataque, defensa y protección.

Naturalización: “La violencia se instala (materializa) en nuestro cuerpo y en nuestro lenguaje, a través de la internalización progresiva de pautas de comportamiento generadas por distintas formas de guerra psicológica.” Este tipo de violencia permea formas de pensar y actuar a través de la imposición (insospechada) de discursos que finalmente irrumpen en el imaginario social.

Enraizamiento social: “La guerra psicológica penetra todos los espacios de la realidad social cotidiana.” El “enraizamiento social” de formas de ver, pensar y adoptar el mundo se multiplican a través de la interacción social.

La justificación moral: “Es buena o mala, dependiendo de dónde se ubique el sujeto en el plano de las relaciones de poder”. La guerra psicológica es un arma de doble filo; puede ser utilizada con fines violentos o pacíficos.

La estructuración cognoscitiva: “Determina las formas de pensar, actuar e interrelacionarse, a través de múltiples lenguajes.” Este punto está relacionado con las pautas de comportamiento que impone la guerra psicosocial.

Lo simbólico ideologizado: “Red de significaciones e imaginarios sociales designados y valorados por relaciones de poder.” Es el efecto de la guerra psicosocial en la mentalidad de los individuos y en los imaginarios que se validan en el tejido social. Los “límites simbólicos” propios son alterados para adoptar – parcial o totalmente– aquellos de los violentos (o de los pacíficos). Es así como cambia la concepción de lo que significa la guerra y de las acciones que deben emprenderse frente a ella.

2.1.2 Consecuencias de la guerra psicosocial

Edgar Barrero⁵⁹, además de plantear los elementos constitutivos, da a conocer los principales efectos de la guerra psicológica; una guerra cuyas consecuencias, en su mayoría, sólo son remediabiles a través de las representaciones sociales que evoquen la reconciliación.

Exacerbación del prejuicio: “En el proceso de la vida cotidiana el sujeto incorpora unos esquemas de significación que regulan sus formas de pensar respecto a los otros.” Se trata de “esquemas de poder” que sin la experiencia apropiada se inclinan por versiones distorsionadas de la realidad.

Esquemmatización y polarización ideológica: “Incapacidad de aceptación de opiniones contrarias a la propia.” Se prefiere la desaparición física o simbólica del otro y no la confrontación de argumentaciones.

Anomia naturalizada y justificada: “Las personas deciden aislarse voluntariamente de todo lo que sucede a su alrededor.” Lo grave de este tipo de actitudes es la “indiferencia cómplice” que fortalece las relaciones de poder.

Quiebre y fragmentación de la memoria colectiva: “Con la institucionalización de la mentira u ocultamiento sistemático de la realidad, se va tejiendo un manto de olvido en nuestro aparato cognoscitivo que no nos permite encontrarnos en la diferencia.” En las relaciones de poder es común que para ganar la guerra se prioricen construcciones discursivas que oculten el verdadero acontecer, es decir, se opta por discursos salpicados de mentira que aun así, cobran fuerza como representaciones sociales.

La deshumanización y la degradación de la condición humana: “La deshumanización empieza cuando naturalizamos la violencia política, cuando la incorporamos a nuestros procesos psicosociales y, lo que es peor, cuando gastamos toda una vida tratando de justificar el daño que hemos realizado contra

⁵⁹ Ibid. p. 84-85

los otros.” Es una de las consecuencias más nefastas no sólo en la escena militar, también en el campo psicosocial. En el conflicto militar tiene que ver con la subvaloración del cuerpo, en el campo psicosocial está relacionado con la adopción de nuevas concepciones sobre la condición humana.

Sentimiento de angustia y pesimismo permanente: “La violencia política y la guerra psicológica van instalando en las personas y colectivos humanos un sentimiento permanente de angustia que los coloca en situación de vulnerabilidad por la fragilidad ideoafectiva en que se encuentran.” Ante escenarios colmados de violencia es cada vez más común encontrar manifestaciones de pesimismo y resignación, estados de ánimo que fácilmente conducen a la sumisión.

Destrucción de la subjetividad: “La guerra psicológica está dejando nuestra subjetividad totalmente fragmentada, a partir de la instalación de un sentimiento permanente de soledad e instantaneidad en las relaciones sociales.” Es decir, en medio de la guerra la autonomía del individuo está minada por los efectos y mensajes subliminales de la violencia, referentes a la muerte, el sufrimiento, el terror, la culpabilidad y otros similares.

Impotencia desestructurante: “Cuando se nace y crece en medio de condiciones de guerra, se genera un efecto devastador sobre la subjetividad, toda vez que los referentes de significación que le permiten al sujeto trazar itinerarios existenciales se ven alterados.” En el punto anterior se habló de la destrucción de la subjetividad, pues bien, el resultado es la sumisión y el silencio ante el poder aplastante de quienes llevan las riendas de la guerra.

Aislamiento extremo de lo social comunitario: “El sentimiento de miedo y desconfianza permanente hacen que el sujeto se refugie en espacios cada vez más reducidos y restringidos. Esto opera para lo psicológico y lo social.” Bajo estas condiciones la renovación del tejido social, que se supone es continua, en algunos grupos sociales puede detenerse o hacerse lenta, en tanto sus miembros temen interactuar socialmente por miedo a represalias.

2.2 La venganza como consecuencia de la guerra psicosocial

“Convertir al otro en menos que humano”⁶⁰ parece ser el objetivo de la violencia simbólica que se libra en Colombia. Esta no es una radiografía actual sino el común denominador de la obra que tanto el Estado como las guerrillas han construido con mayor furor desde el nacimiento de la violencia política entre liberales y conservadores en los años 50. Esa “carnicería física y simbólica”⁶¹ aún es evidente y logra su cometido sobre todo en áreas rurales del país en donde apenas se percibe la protección del Estado. “En el ámbito social local, las masacres son eventos devastadores que afectan profundamente tanto a las personas directamente afectadas como a las comunidades a las cuales pertenecen. Paradójicamente, estos eventos no trascienden el nivel local, por lo cual apenas cuentan o cuentan a medias en las narrativas nacionales. En el ámbito subjetivo, las masacres tienen un efecto devastador.”⁶² Esta afirmación ilustra claramente los efectos dañinos de la violencia simbólica a nivel individual y de grupo. Son devastadoras sus consecuencias en la medida en que “afectan profundamente” a la víctima y a quienes la rodean (se trata de heridas psicológicas), un hecho que conduce al pesimismo frente al mejoramiento de la situación o a la venganza como medio para “recuperar” lo propio.

El sentimiento de venganza, alimentado por el rencor, es propio de la naturaleza del ser humano. Durante los inicios de la violencia en Colombia más allá de ser una decisión, la venganza respondía a una lógica de acción de la víctima. En el orden social que imperaba se asumía como cuestión de honor la defensa y la reivindicación de agravios, no importaba si la vida del ofensor y hasta la propia vida estaban de por medio. “Cuando se quería eliminar a alguien era frecuente el exterminio de toda su familia. Matar al enemigo suponía necesariamente matar a la mujer y a los hijos ya que dejar algún miembro de la familia vivo era exponerse

⁶⁰ URIBE, María. *Antropología de la inhumanidad un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia*. Editorial Norma, 2004. p. 14

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid. p.15

a que este, con el tiempo, se encargara de vengar a los suyos. Y esto último irremediablemente ocurría a menos que se formalizara verbalmente la voluntad de que no sucediera.”⁶³ La necesidad de pagar con la misma moneda las afrentas entre liberales y conservadores cobraba vida a medida que la contienda bipartidista se iba expandiendo. “Al calor de las afrentas, las muertes y las mutilaciones que se inflingían unos a otros, fue aumentando la acumulación del odio y la necesidad de venganza.”⁶⁴ Según Maria Victoria Uribe, a medida que las ofensas crecían en afectación la sed de venganza era mayor, cumpliendo así con la lógica que imperaba en el contexto social de la época: “ojo por ojo, diente por diente”.

Hoy, el panorama no es diferente. El círculo vicioso de la violencia es impulsado por un sentimiento igual que obliga a la víctima a impartir su propia justicia. La frase “estaban atrapados por un lenguaje de confrontación cimentado en códigos como la venganza y la defensa del honor”⁶⁵, utilizada por Maria Victoria Uribe para describir la dinámica de la guerra en los años 50’, encaja idóneamente seis décadas después, a pesar de la evolución propia de la cultura.

La venganza responde a la dinámica de una cadena reproductiva. Según Maria Victoria Uribe, durante La Violencia los bandoleros proyectaban sus sentimientos destructivos, de modo que “el otro se convertía en depositario de sentimientos de odio, agresión y rabia que lo transformaban en perseguidor.”⁶⁶ Así es como la violencia adquiere poder, a través de un juego de “odios heredados” que se manifiesta en la perpetuación de acciones hostiles. La opción para detener este fenómeno, similar a la caída de un dominó, estaría en la decantación de lo que significa ser parte de él, además de la puesta en marcha de iniciativas encaminadas a la reconstrucción del tejido social. Parafraseando a María Victoria Uribe, aunque las masacres han producido un gran impacto psicológico y moral,

⁶³ Ibid. p. 37

⁶⁴ Ibid. p. 46

⁶⁵ Ibid. p. 60

⁶⁶ Ibid.

diferentes grupos sociales aún se muestran indiferentes, mientras otros lidian con nefastas consecuencias. Esa falta de asimilación de la realidad y de sus soluciones posibles es uno de los factores que contribuye a que la violencia continúe.⁶⁷

La apelación a la violencia contribuye a la polarización social, y esto se suma a la división causada por la propagación del terror. Por eso la importancia de la irrupción de los medios de comunicación: a través del lenguaje y la simbología con que los violentos y hasta el Estado exaltan patologías de terror, miedo y venganza, sería posible presentar al colectivo social formas diferentes de asumir la guerra, su dinámica y sus consecuencias.

Con referencia a las víctimas directas e indirectas de la ola de violencia que sacude al país desde hace 60 años, sus formas de relacionarse han sido permeadas por las lógicas de la guerra, por lo que ya es natural la concepción social del engaño, el miedo, la muerte, la venganza y similares tratamientos. Esto es, lo que se ha tejido en Colombia es un consenso social de violencia en el que la construcción de alteridad está trazada por la desconfianza y/o la venganza. Ante escenarios de este tipo, el lenguaje tiene las competencias para alterar y transformar las secuelas del fenómeno cruel, intimidante y opresor de la violencia. El discurso es constructor de mundos, los medios son agentes de divulgación de discursos y el individuo es consumidor y multiplicador de ellos. Este es el ejercicio que permitiría evolucionar de un consenso social de la violencia a un consenso social de reconciliación. No hay que olvidar que sería así porque “ni las grandes movilizaciones de la sociedad civil, ni la inclusión política de nuevos grupos sociales, ni los proyectos de reforma institucional que introdujo la Constitución de 1991, han logrado revertir las dinámicas de la violencia.”⁶⁸

⁶⁷ Ibid. p. 133

⁶⁸ Ibid. p. 109

2.2.1 Resistir: una salida

La “ética de la resistencia”, término acotado por Edgar Barrero, pero inspirado en la “resistencia” frente al poder de Michel Foucault, es un planteamiento que aún no ha sido aprehendido en todo su potencial. Se trata de formas de resistir las diferentes manifestaciones de poder en el entramado social. Esto es, el empoderamiento y la potencialización de la sociedad civil para transformarse. “La resistencia como categoría de análisis propuesta por Foucault supone las siguientes características: 1) su sentido de transversalidad, por medio del cual adquiere un significado de universalidad, 2) se dirige contra los efectos del poder, 3) tiene un carácter de inmediatez, 4) reivindica el derecho a la diferencia, pero reclama el sentido de lo colectivo, 5) ataca los privilegios del conocimiento, y 6) es un rechazo a las tecnologías de poder que pasan por encima de la condición humana.”⁶⁹

Durante años, expertos han coincidido en que “una de las causas esenciales de nuestra guerra es la negación del conflicto y de los espacios legítimos para que este se plantee, se argumente y se resuelva.”⁷⁰ Ahí se ubicaría el objetivo de los medios de comunicación hoy, en un contexto social en el que la guerra logra su objetivo de amedrentar y la labor del Estado se queda corta. La violencia con sus claras expresiones en el conflicto militar cobra cada vez más muertes, y en su expresión psicológica se apodera de más mentes infundiendo terror, invitando al odio y haciendo callar ante la barbarie. Por eso la necesidad de crear una “resistencia” que permita encarar construcciones sociales ya establecidas que fomentan los sentimientos de odio y venganza en el tejido social. “En la actualidad el objetivo quizá no sea el descubrir qué somos, sino el rechazar lo que somos. Tenemos que imaginar y crear lo que podríamos ser para librarnos de esta especie de “doble atadura” política que consiste en la simultanea

⁶⁹ BARRERO, Edgar. *De Macondo a mancusu. Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Una aproximación desde la psicología social crítica*. Ediciones Cátedra Libre. Bogotá, 2008. Segunda edición. p. 90.

⁷⁰ Ibid.

individualización y totalización de las estructuras modernas del poder.”⁷¹ Foucault denomina a esto “el arte de existir”, que precisamente ha desaparecido por las múltiples limitaciones que inventa la guerra psicológica en la que Colombia está inmersa.

La resistencia que contribuyen a crear los medios a través de las representaciones sociales que proyectan debe ser la de descubrir maneras de “existir”, esto es, formas de crear y recrear continuamente pensamientos y posiciones diferenciales frente a la crueldad de la guerra, que le sirvan de punto de partida a individuos para dar rienda suelta a nuevas construcciones e interpretaciones sociales. En otras palabras, esto es la recuperación de las libertades y en esa misma vía la posibilidad de creación de nuevas formas de interacción social, esta vez basadas en la reconciliación.

2.3 Las representaciones sociales: imagen de la realidad

La de las representaciones sociales es una de las más importantes definiciones en este trabajo de grado por tratarse de uno de sus conceptos clave. La representación social tiene que ver con esa imagen de la realidad dada a conocer y puesta a circular en el entramado social. Es la idea de mundo y el “real” acontecimiento de los hechos lo que se traduce a millones de personas, que aunque cuentan con representaciones sociales ya adquiridas, siempre son factibles de transformar a través de nuevas construcciones sociales traducidas por el discurso. Se trata de “formaciones discursivas que interactúan socialmente y configuran maneras de darle sentido a la existencia, universos de significación, referentes de identidad, pautas de reconocimiento sobre lo común y lo diverso, lo igual y lo diferente, consolidadas en el tiempo a través de intercambios sociales y órdenes institucionales.”⁷² Esto es lo que hacen los medios de comunicación, aún más evidente en sus espacios editoriales: plantean y legitiman nuevos esquemas

⁷¹ Foucault, Michel. *El sujeto y el poder*. Carpe diem ediciones, 1991. p .56

⁷² BONILLA, Jorge, GARCIA, María. *Los Discursos del Conflicto. Espacio Público, Paros Cívicos y Prensa en Colombia*. Pontificia Universidad Javeriana, 1998. Primera Edición. p. 20

y parámetros para entender el acontecer social y moldear, sino es cambiar, referentes antes establecidos, teniendo en cuenta que la estructura social está en continuo movimiento.

Parafraseando a Jorge Iván Bonilla⁷³, el nuestro es un conflicto representado mediante el uso social del lenguaje, es decir, es identificado, verbalizado, codificado, narrado e interiorizado por múltiples actores sociales. La nuestra no es sólo una guerra experimentada en zonas rurales y por unos pocos; ha trascendido límites y ha afectado a millones de personas, pues se trata de un conflicto presente en lo contable de las muertes, masacres y secuestros, pero también vigente a través de la simbología y la representación social del terror, la venganza y la necesidad de callar. Esas representaciones son resultado de la construcción social de agentes violentos, institucionales o mediáticos, en este último grupo se encuentra la prensa, la radio, la televisión y la internet.

“La representación social posee una función inmanente a su propia condición de pensamiento socialmente elaborado: integrar e institucionalizar, a través de un proceso figurativo, que instituye formas de pensamiento e interacción, paulatinamente convertidas por el sujeto en hábitos y costumbres. El problema se presenta cuando desconocemos que esa formación de hábitos está designada y valorada desde dispositivos de poder que hacen que se naturalicen ciertas prácticas humanas como la exclusión y la muerte de aquello que se considere diferente y potencialmente perturbador del orden social establecido.”⁷⁴ No hay que dejar de lado que esta guerra psicológica tiene como objetivo la mente, la psiquis del individuo, con el fin de que apruebe, a la fuerza o a través de afectos, la causa de la violencia y la eliminación física y simbólica del *enemigo*.

⁷³ Ibid. p. 12

⁷⁴ BARRERO, Edgar. *De Macondo a manuscrito. Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Una aproximación desde la psicología social crítica*. Ediciones Cátedra Libre. Bogotá, 2008. Segunda edición. p.81.

La producción de representaciones sociales excluyentes o incluyentes del tejido social se da en tres importantes ejes: “dimensiones *cognitivas* (traen a la mente conceptos e interpretaciones), *normativas* (dan un orden a la realidad) y *simbólico-semióticas* (significan lo que acontece) que al ir más allá del ámbito individual y psicológico de las personas, se inscriben en procesos de larga duración, relacionados con saberes socialmente construidos.”⁷⁵ Las representaciones sociales son creación del mismo tejido social y se legitiman por y a través de él. Se trata de esquemas de pensamiento y acción que según Josetxo Beriain⁷⁶ cumplen varias funciones: a) demarcan los límites cognoscitivos y simbólicos dentro de los que se mueve la sociedad; b) crean consensos dentro de los límites demarcados; y c) movilizan política e ideológicamente “a través de valores y símbolos con los que se responde a la amenaza, a lo desconocido, al miedo, al extraño.”

Es aquí donde el lenguaje cobra vida, a través de su verbalización o de los símbolos. A través del lenguaje el mundo es dado a conocer en toda su expresión: lo conocido y lo desconocido, los límites y las licencias, lo bueno y lo malo, la guerra y la paz; de modo que el todo se transforma en lenguaje y a través del discurso se convierte en representación social. El discurso “constituye un objeto de significación que no sólo es un reflejo de los modos en que se representa la sociedad sino un espacio donde tienen lugar las disputas por lograr la hegemonía (institucionalización) de unas representaciones y no de otras.”⁷⁷ La relevancia del lenguaje como formador de discursos, es su potencial para implantar nuevas ideas, transformar viejas maneras de ver y adoptar el mundo y crear consenso o disenso sobre nuevos paradigmas.

⁷⁵ BONILLA, Jorge, GARCIA, María. *Los Discursos del Conflicto. Espacio Público, Paros Cívicos y Prensa en Colombia*. Pontificia Universidad Javeriana, 1998. Primera Edición. p. 20

⁷⁶ Ibid. p. 21

⁷⁷ Ibid. p. 22

Así las cosas, como afirma Josetxo Beriain, “las representaciones cumplen con las funciones de interiorizar quiénes somos como sociedad, crear consensos dentro de límites socialmente demarcados y movilizar política e ideológicamente a la sociedad a través de valores con los que se responde a la realidad que se presenta inaprensible.”⁷⁸ Con esto es claro que la labor informativa y gestora de opinión es definitiva, en tanto es capaz de modificar formas de interacción y motivos para la movilización social. Así es como los medios, de manera particular, funcionarían como “cajas de resonancia” que a través de representaciones sociales destruirían o construirían tejido social.

2.4 El poder del lenguaje

Las representaciones sociales que el lenguaje construye es la realidad que la sociedad consume. Lo que el discurso transmite es lo que se ingiere, se digiere y se refleja en los marcos de acción de individuos y grupos sociales. De tal forma que de la misma manera en que el lenguaje construye escenarios de guerra, de intimidación y subyugación, crea mundos donde invita y permite adoptar como propia la necesidad de contextos pacíficos. Es aquí donde las representaciones sociales cumplen su cometido: dan a conocer nuevos y transformados modelos de pensamiento que, una vez interiorizados, se traducen en esquemas de acción que funcionan como resonadores y multiplicadores de una causa específica en el entramado social. Esto es posible porque el lenguaje, los pensamientos y las acciones forman una cadena indestructible.

El lenguaje es un arma de dotación que construye realidades, *pseudo* realidades y ficción. Esta es una verdad en medio del juego político del que hacen parte los medios de comunicación como legitimadores o destronadores de poderíos e ideales. “El elemento crítico en la maniobra política para sacar ventaja es la creación de significado: la construcción de creencias sobre los acontecimientos, las políticas, los líderes, los problemas y las crisis, creencias estas que

⁷⁸ Ibid. p. 28

racionalizan o cuestionan las desigualdades existentes”⁷⁹ Esto lo han sabido interiorizar y ejecutar quienes lideran la guerra psicológica en el país; han promovido el terror, el miedo, el silencio y la desconfianza hacia el otro, al tiempo que lo han convertido en la estrategia idónea para no matar físicamente (generando complacencias), pero sí destruir simbólicamente. La fortaleza del lenguaje radica en que representa el origen de mundos que pueden o no coincidir con los imaginarios sociales presentes, no obstante son interiorizados y adoptados como verdad.

Según Murray Edelman, “lo que la gente experimenta es el lenguaje sobre los acontecimientos políticos, no los acontecimientos en cualquier otro sentido: incluso desarrollos cercanos a nosotros toman su significado del lenguaje que los describe. De modo que el lenguaje político es la realidad política. No hay ninguna otra en lo que concierne al significado de los acontecimientos para los actores y espectadores.”⁸⁰ En esta medida, la guerra psicológica goza de condiciones a su favor y toma pasos agigantados ante la imposibilidad de experimentar una realidad diferente; habrá grupos sociales a los que sólo les resta quedarse con la *verdad* que los violentos construyen.

El lenguaje, entonces, es un arma generadora de beneplácitos tanto en escenarios violentos como de paz. A través del discurso puede lograr el convencimiento hasta de los hechos más atroces. Se trata de un juego de palabras, de condiciones y estados de ánimo utilizados para dar rienda suelta a la manipulación. Bien dice Edelman que “el lenguaje de la política suele servir para racionalizar acciones que violan los códigos morales de la comunidad y de los actores mismos.”⁸¹ El lenguaje en tanto es capaz de transformar situaciones sociales, formas de pensamiento y acción, es artífice de la creación de un nuevo sujeto. Un individuo que en la medida en que se acoge al mensaje de quienes gobiernan, es un agente multiplicador de las significaciones que en un principio él mismo legitimó. En esta

⁷⁹ MURRAY, Edelman. *La construcción del Espectáculo político*. Ediciones Manantial, 1991, p. 120

⁸⁰ Ibid. p. 121

⁸¹ Ibid. p. 128

línea, María Victoria Uribe resalta el papel de la radio como el medio que ayudó a multiplicar los motivos para hacer aún más fuerte esa brecha entre liberales y conservadores a mediados del siglo XX, teniendo en cuenta su capacidad de llegar hasta los lugares más escondidos. Se trató de un medio de comunicación que difundió las razones de la enemistad para reforzar la separación entre unos y otros. “Estos programas eran seguidos al pie de la letra por miles de familias colombianas, contribuyendo a impregnar de odios políticos los espacios de sociabilidad campesina.”⁸²

Por lo anterior, los medios de comunicación adquieren el perfil de un actor político: el lenguaje, hecho discurso, crea opinión y es motor de grandes transformaciones sociales que en el campo de la política son definitivas, en la medida en que modifican formas de adoptar y reaccionar a realidades como la nuestra, en la que el conflicto se ha convertido en una guerra perpetua. Según José Joaquín Brunner los medios hacen parte de la escena política “porque entran en el campo de la significatividad y la negociación de sentidos sobre lo social. Sentidos que aspiran no sólo a legitimarse como modos de ver institucionales, sino a convertirse en normas sociales y culturales válidas.”⁸³ Quizás por esto los medios de comunicación no pocas veces han sido tildados como ‘el cuarto poder’; su injerencia y capacidad de legitimar y deslegitimar personajes o temáticas trascendentales en materia política, económica, social y cultural es cada vez más evidente. La razón: “las noticias reconstruyen los mundos, las historias y las escatologías sociales, evocando bases para la preocupación y la esperanza, y supuestos sobre lo que debe advertirse o ignorarse, sobre quiénes son respetables o heroicos y quiénes no lo son.”⁸⁴

⁸² URIBE, María. *Antropología de la inhumanidad un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia*. Editorial Norma, 2004. p. 32

⁸³ BRUNNER, José. *Un espejo trizado. Ensayos sobre cultura y políticas culturales*. Flacso, 198. Mencionado por BONILLA, Jorge, GARCIA, María. *Los Discursos del Conflicto. Espacio Público, Paros Cívicos y Prensa en Colombia*. Pontificia Universidad Javeriana, 1998. Primera Edición. p. 31

⁸⁴ MURRAY, Edelman. *La construcción del Espectáculo político*. Ediciones Manantial, 1991, p. 37

3 PROGRAMAS NARRATIVOS

Este capítulo aborda el análisis de las editoriales seleccionadas y la construcción del programa narrativo editorial de El Tiempo para cada una de las temáticas de estudio: perdón y reconciliación, y violencia y conflicto. Defino “programa narrativo” como el discurso editorial que construyó El Tiempo durante el periodo agosto 2009- julio 2010. Esto implica ver la editorial más allá de una unidad de texto para adoptarla como parte de un conjunto de disertaciones que construyó socialmente sentidos alineados o antagónicos a la reconciliación. Con este fin, en primera instancia tendrá lugar la realización de un análisis cuantitativo que permita expresar numéricamente las editoriales teniendo en cuenta su relación con los tipos de mensaje (1 y 2) y los actores del conflicto hallados en las publicaciones. Para la construcción del programa narrativo por tipos de mensaje será necesario definir el análisis predicativo para cada uno de ellos. Este análisis (el predicativo) tiene como objetivo la segmentación de las editoriales según los actores, las funciones, las calificaciones y la simbología utilizadas en las configuraciones discursivas de las 63 editoriales. Para facilitar la comprensión de cada programa narrativo, estos estarán anteceditos por sus respectivos análisis predicativos.

3.1 Análisis Cuantitativo

Esta fase del trabajo tiene como fin realizar un análisis cuantitativo del total de las editoriales del periódico El Tiempo previamente seleccionadas teniendo en cuenta su referencia al conflicto armado colombiano, en el periodo comprendido entre el 1 de agosto del 2009 y el 31 de julio de 2010. Así las cosas, se identificarán: 1. El número de editoriales que relacionan de manera explícita las temáticas de estudio, perdón y reconciliación, y violencia y conflicto. 2. El número de mensajes cuyos usos del lenguaje relacionan explícitamente a cada uno de los actores del conflicto con las temáticas de estudio (tipo 1 y tipo 2) 3. El número total de editoriales que menciona explícitamente a cada uno de los actores del conflicto. 4. El número de

veces que son mencionados los actores del conflicto en el conjunto de las 63 editoriales seleccionadas.

Tipo de mensaje	# de Editoriales	% Porcentaje
Perdón y reconciliación	44	57%
Violencia y conflicto	33	43%
Total	77	100%

Cuadro 2. Número de editoriales con mensajes tipo 1 y tipo 2

El Cuadro 2 presenta el número de editoriales que contienen mensajes explícitos tipo 1 y tipo 2. Debe quedar claro que en una editorial puede hallarse más de una referencia al perdón y a la reconciliación, o a la violencia y el conflicto. En este caso fueron encontradas 44 referencias al perdón y reconciliación, lo que equivale a un 57%. La temática de violencia y conflicto tuvo 33 menciones explícitas, correspondiente a un 43% respecto al número total de referencias que fue de 77.

Actor	# Mensajes Tipo 1	% Tipo 1	# Mensajes Tipo 2	% Tipo 2	Total Mensajes tipo 1 y 2	% Total
Gobierno	11	25%	14	42%	25	32%
Guerrilla	7	16%	3	9%	10	13%
Víctimas	11	25%	1	3%	12	16%
Paramilitares	2	5%	0	0%	2	3%
FFMM	4	9%	5	15%	9	12%
Comunidad Internacional	7	16%	6	18%	13	17%
Bacrim	0	0%	4	12%	4	5%
Corte Suprema	2	5%	0	0%	2	3%
Total	44	100%	33	100%	77	100%

Cuadro 3. Mensajes tipo 1 y tipo 2 respecto a los actores del conflicto

El Cuadro 3 presenta la relación entre los mensajes explícitos tipo 1 y tipo 2 y los actores del conflicto. Se demuestra que los mensajes tipo 1 se concentran principalmente en el Gobierno y en las víctimas, ambos actores con un 25%. Las Farc ocupan un segundo lugar con 7 mensajes que representan un 16%. En contraste, referente a los mensajes tipo 2, el actor Gobierno tiene 14 menciones que equivalen a un 42%, muy lejos le sigue la Comunidad Internacional con 6 menciones equivalentes a un 18%. Para la comprensión de este cuadro hay que tener en cuenta que puede encontrarse más de un mensaje, tipo 1 o tipo 2, en tan sólo una editorial.

Actores	Editoriales	% de Editoriales
Gobierno	59	94%
Guerrilla	30	48%
Víctimas	17	27%
Paramilitares	14	22%
FFMM	14	22%
Comunidad Internacional	13	21%
Bacrim	11	17%
CorteSuprema	2	3%
Total	63	

Cuadro 4. Número de editoriales que mencionan a cada actor del conflicto

En el Cuadro 4 se expone el número de editoriales que hicieron referencia a cada actor del conflicto, independiente de su relación con los tipos de mensaje. Así las cosas, el Gobierno es el actor que más menciones tuvo por editorial. El Tiempo lo menciona explícitamente en 59 editoriales, esto equivale a un 94% de menciones. La Guerrilla ocupa un segundo lugar con una aparición en el 48% de las editoriales, seguida por las víctimas del conflicto en un tercer lugar con menciones en el 27% de las editoriales, por encima de los Paramilitares y las Fuerzas Militares, cada actor con menciones en el 22% de las editoriales.

Actores	Menciones totales	Porcentaje de Menciones
Guerrilla/Farc / ELN	148	29%
Gobierno	121	23%
Víctimas	78	15%
Comunidad Internacional /Venezuela /EEUU	57	11%
Autodefensas/Paramilitares	53	10%
Fuerzas Militares /Ejército / Policía	39	8%
Bandas Criminales /Bacrím	13	3%
Corte Suprema de Justicia	9	2%
Total Menciones Autores	518	100%

Cuadro 5. Menciones explícitas de los actores del conflicto

El Cuadro 5 demuestra la preponderancia de cada actor en el contenido editorial del periódico El Tiempo durante el periodo agosto 2009- julio 2010. El actor guerrilla, que incluye las Farc y el ELN, es el actor con mayor número de menciones con un 29% del total de referencias. El actor Gobierno concentró el 23% de las menciones ocupando el segundo lugar. En un tercer lugar están las víctimas con un 15%. El actor Comunidad Internacional, que incluye Venezuela y Estados Unidos, obtuvo el 11% de las menciones, mientras que las Autodefensas aparecen de manera explícita en un 10 % del total de las referencias. Hay que tener presente que en cada una de las 63 editoriales objeto de estudio puede haber más de una mención por actor.

3.2 Programa Narrativo Mensajes Tipo 1

3.2.1 Análisis predicativo Mensajes Tipo 1

3.2.1.1 El Gobierno: El Gobierno Central, Presidente, Gobiernos Locales.

A) Funciones:

- Impulsar
 - Proceso de desmovilización con las autodefensas por medio de la Ley de Justicia y Paz.
 - Proceso de paz con las Farc.
 - Estrategia más balanceada en la lucha antidrogas, despenalizando su consumo, tratándolo como un problema de salud y dando educación y atención a los adictos.
 - Ratificación del Tratado de Roma que faculte a la Corte Penal Internacional para investigar crímenes de lesa humanidad.
 - Convención Internacional para protección de personas contra la desaparición forzada.
 - La reducción de la desigualdad en el país.
 - Ratificación de los acuerdos de paz como un camino, difícil pero exitoso, en la reducción de la violencia y en la reconciliación de los colombianos.

- Proteger
 - A los colombianos en general
 - Las víctimas de conflicto armado para que no exista re-victimización
 - Los testigos
 - Los pueblos Indígenas en medio del conflicto

- Prevenir
 - Los delitos de lesa humanidad
 - Desapariciones Forzadas
 - Víctimas de campos minados en zonas alrededor de las bases militares, destruyendo estos campos.

- Asistir
 - Hospitalariamente a las víctimas civiles de los campos minados.
- Mejorar
 - Las condiciones de vida de los pueblos indígenas que se encuentran en medio del conflicto.
- Investigar
 - Delitos de lesa humanidad
- Encontrar
 - La verdad en los procesos de la Ley de Justicia y Paz.
 - Desaparecidos y/o los restos de las víctimas de la violencia.
- Reparar
 - A las víctimas y sus familias con los recursos del fondo de reparación de víctimas o con recursos propios.
- Diseñar
 - Un programa de restitución de tierras para las víctimas del conflicto.
- Evitar
 - Impunidad de los delitos más atroces contra la humanidad

B) Calificaciones

- Tiene
 - Una obligación económica con las víctimas de la guerra
- Debe
 - Acelerar los procesos de justicia y reparación a las víctimas
 - Responder a la Comunidad Internacional con prontitud y mostrarle su avance en Derechos Humanos.
 - Agilizar la restitución activa de tierras

- Está
 - En mora de diseñar una estrategia integral

C) Símbolos

- Vergüenza de los mal llamados “falsos positivos”
- Estrategia que integre la “mano dura” de la ley con educación, prevención y tratamiento para reducir el consumo.
- El Gobierno enfrentó el dilema de la justicia transicional: la delicada combinación de dosis de paz que implicaba el desmonte de las autodefensas, y de justicia, consistente en penas reducidas por crímenes de lesa humanidad.
- Pero una tarea incompleta, por más huecos que tenga, no es sinónimo de una tarea fallida (acerca de la Ley de Justicia y Paz)

3.2.1.2 La Guerrilla: Las Farc, ELN.

A) Funciones:

- Entender
 - Que sus armas no pueden dañar más futuros ni los deseos de querer vivir en paz.
 - La pérdida del sentido histórico de la lucha armada y su imposibilidad de éxito.
 - La paz negociada es el mejor camino
 - La estrategia de secuestrar líderes políticos como chantaje al Gobierno está agotada.

- Saber
 - Que los tiempos en que las masacres y atentados se confundían con las luchas de liberación nacional ya pasaron. Tanto como aquellos en que

las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se hacían pasar por “legítimas” acciones revolucionarias.

- La democracia en América Latina ha dado plenas muestras de que en paz y de acuerdo con la ley, los militantes de izquierda, aún la más radical no sólo ganan elecciones sino que cambian Constituciones de la mano de las mayorías.
- Deben
 - Dejar por fuera de su brutalidad a niños y población civil.
 - Respetar el valor y la tenacidad de la comunidad.
 - Iniciar un proceso de paz con el gobierno que los lleve a la desmovilización.
 - Ser más congruente, dado que actualmente habla de un canje humanitario, mientras sigue secuestrando.
- Liberar
 - A todos los secuestrados, sin necesidad de un Intercambio Humanitario.

B) Calificaciones

- Son
 - Grupos al margen de la ley
- Debe
 - Respetar
 - Darse cuenta
 - Ser responsable
- No debe
 - Dañar

C) Símbolos

- Pérdida del sentido histórico de la lucha armada y su imposibilidad de éxito está en mora de darse entre los cabecillas de las Farc y del Eln.
- La paz negociada es el mejor camino.
- El sacrificio de niños por parte de las Farc es tan cruel como viejo.

3.2.1.3 Autodefensas: Comandantes AUC, Bases combatientes.

A) Funciones:

- Desmovilizar
 - Las estructuras paramilitares.
- Reparar
 - A las víctimas
- Decir
 - La verdad acerca de los crímenes y horrores cometidos.
- Garantizar
 - La no repetición de las atrocidades.
 - No continuar delinquiendo.
 - No repetición ni asesinatos a líderes de asociaciones de víctimas del conflicto.
- Entregar
 - Bienes y dinero a un fondo estatal si pretenden penas benevolentes.
- Pagar
 - Condenas reducidas en Colombia por crímenes de lesa humanidad cometidos.
 - Condenas mayores en EEUU por narcotráfico.
- Denunciar
 - Vínculos con otros sectores de la sociedad (parapolítica y paraeconomía).

B) Calificaciones

- Tienen
 - Decir la verdad
 - Entregar dinero y bienes
 - Desmovilizarse
 - Reparar a las víctimas
- No Deben
 - Repetir atrocidades

C) Símbolos

- Los procesos de la 'paraeconomía' no pueden detenerse y las autoridades deben contar con el total apoyo de la sociedad, para que esta olla se destape.
- Lunares del proceso de desmovilización.

3.2.1.4 BACRIM : Bandas Emergentes, Águilas Negras.

A) Funciones:

- Ninguna

B) Calificaciones

- No son
 - Paramilitares

C) Símbolos

- Ninguno

3.2.1.5 Fuerzas Armadas: Policía, Ejército, FF.MM. Ministerio de Defensa.

A) Funciones:

- Garantizar
 - El respeto por los Derechos Humanos.
- Permitir
 - Jornadas electorales tranquilas.
- Evitar
 - Atentados
- Acatar
 - Las decisiones de la Fiscalía
- Respetar
 - Las instituciones
- Preservar
 - El apoyo de los habitantes
- Proteger
 - A civiles inocentes del secuestro por parte de grupos armados ilegales.

B) Calificaciones

- Tienen
 - Compromiso
 - Control
 - Apoyo de los habitantes

C) Símbolos

- Ninguno

3.2.1.6 Víctimas: Secuestrados, Desplazados, Familiares, Víctimas

A) Funciones:

- Aguardar
 - Ayuda, para mejorar la situación de las comunidades en medio del conflicto.
 - Respuestas estatales urgentes frente al deterioro de las condiciones de vida de los pueblos indígenas.
- Conocer
 - La verdad
- Recibir
 - Administración de justicia y reparación
- Demandar
 - El intercambio humanitario
- Rechazar
 - Rescate militar de secuestrados
- No ser
 - Revictimizados al ser asesinados los líderes de los desplazados.
- Recuperar
 - Sus tierras
- Deben ser
 - Liberados unilateralmente por la guerrilla.

B) Calificaciones

- Son
 - Tenaces
 - Valientes
 - Admirables

- No son
 - Animales
 - Mercancías para intercambiar

- Deben ser
 - Reparadas
 - Protegidas

- Deben tener
 - Verdad
 - Justicia
 - Reparación

3.2.1.7 Corte Suprema de Justicia

A) Funciones:

- Proteger
 - los derechos de las víctimas evitando la extradición de comandantes paramilitares.

B) Calificaciones

- Están
 - Defendiendo a las víctimas del conflicto

3.2.1.8 Comunidad Internacional: Venezuela, Países Vecinos, OEA, EEUU

A) Funciones:

- Despenalizar
 - El consumo de droga y darle una perspectiva de salud pública.

- Asegurar
 - Respeto a las víctimas y mantenimiento de la extradición con mecanismos de cooperación judicial más integrales.

- Garantizar
 - Un proceso de intercambio humanitario, siendo garantes, dando credibilidad al proceso y recibiendo guerrilleros liberados para garantizar que no vuelven a delinquir.

B) Calificaciones

- Están
 - Cambiando política antidrogas
- Deben
 - Respaldo al Gobierno
 - Ser garantes en el Intercambio Humanitario
 - Cooperar con Colombia
- No deben
 - Financiar a las Farc
 - Ser retaguardia de la guerrilla

C) Símbolos

- La mediación de un tercero, en este caso Brasil, genera las garantías y confianza suficientes para destrabar los *nudos gordianos*.

3.2.2 Programa narrativo alusivo a los mensajes tipo 1

El discurso de reconciliación de las editoriales del periódico El Tiempo sostiene que la discusión acerca de “la pérdida del sentido histórico de la lucha armada y su imposibilidad de éxito está en mora de darse entre los cabecillas de las Farc y del Eln.”⁸⁵, por ejemplo, “hace 20 años, los guerrilleros del movimiento 19 de Abril (M-19) (...) firmaron en Santo Domingo (Cauca) el acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco.”⁸⁶ Dicha desmovilización abriría “el camino a otros procesos similares con organizaciones subversivas, como el EPL, el PRT, el Quintín Lame, un sector de las autodefensas y, unos años más tarde, una disidencia del Eln: la Corriente de Renovación Socialista.”⁸⁷ “A pesar del tiempo transcurrido, las lecciones y reflexiones surgidas en ese momento histórico mantienen su validez en la Colombia del 2010. La más importante es la ratificación de los acuerdos de paz como un camino, difícil pero exitoso, en la reducción de la violencia y en la reconciliación de los colombianos.”⁸⁸ “El éxito del acuerdo de paz es contundente: el M-19 como organización subversiva desapareció, sus miembros se reincorporaron a la sociedad y sus líderes han sido actores del debate político por 20 años.”⁸⁹ “El camino de reconciliación que se abrió hace dos décadas entre los guerrilleros y la sociedad colombiana no se ha cerrado y ha permitido que los líderes del desaparecido movimiento gocen del respaldo electoral de regiones enteras.”⁹⁰

Según el periódico El Tiempo, en América Latina se presenta un contexto de “innegable progreso electoral, validez continental de las reglas democráticas y superación de la vía armada para llegar al poder”⁹¹, dado que “en la última década, la democracia en América Latina ha dado plenas muestras de que, en paz y de acuerdo con la ley, los militantes de izquierda, aún la más radical, no sólo

⁸⁵ Editorial El Tiempo, 9 Marzo 2010

⁸⁶ Ibid. 9 Marzo 2010

⁸⁷ Ibid. 9 Marzo 2010

⁸⁸ Ibid. 9 Marzo 2010

⁸⁹ Ibid. 9 Marzo 2010

⁹⁰ Ibid. 9 Marzo 2010

⁹¹ Ibid. 11 Diciembre 2009

ganan elecciones, sino que cambian las constituciones, de la mano de las mayorías. Una buena parte de la región –ya sea a nivel nacional, regional o municipal– está gobernada hoy por líderes que se autodenominan socialistas o tienen afinidad con el comunismo.”⁹²

A pesar de la “pérdida del sentido histórico de la lucha armada”⁹³ los grupos guerrilleros aún no han entrado “en ningún tipo de desmovilización, entrega de armas o proceso de diálogo”⁹⁴ con el Gobierno. De esta manera, aún mantienen en su poder “19 soldados”⁹⁵ “como herramienta de presión para exigir la liberación de sus mandos medios presos en las cárceles.”⁹⁶ En esta discusión “tanto el Gobierno como la guerrilla han suavizado sus posiciones en tiempos recientes – por ejemplo, las Farc no piden despeje y el presidente Uribe no le cerró la puerta al intercambio.”⁹⁷ Por el lado de los familiares, su “desesperada invitación”⁹⁸ a que “la voluntad humanitaria se imponga sobre la política”⁹⁹ es “una petición poco probable de hacerse realidad”¹⁰⁰. Sin embargo, según el periódico El Tiempo, “una importante lección de las más recientes operaciones humanitarias gestionadas”¹⁰¹ “es cómo la mediación de un tercero, en este caso Brasil, genera las garantías y confianza suficientes para destrabar los nudos gordianos. Este país podría recibir en su territorio a los guerrilleros canjeados y asegurarle a Colombia que no continuarán delinquiendo.”¹⁰²

Para El Tiempo, “el negativo ambiente político parece cerrarle la puerta a cualquier posibilidad de acuerdo (humanitario)”¹⁰³, mientras tanto, “los días de cautiverio de los soldados y policías siguen aumentando en medio de la desesperanza y la

⁹² Ibid. 11 Diciembre 2009

⁹³ Ibid. 9 Marzo 2010

⁹⁴ Ibid. 5 Agosto 2009

⁹⁵ Ibid. 15 Junio 2010

⁹⁶ Ibid. 23 Diciembre 2009

⁹⁷ Ibid. 31 Marzo 2010

⁹⁸ Ibid. 31 Marzo 2010

⁹⁹ Ibid. 31 Marzo 2010

¹⁰⁰ Ibid. 31 Marzo 2010

¹⁰¹ Ibid. 31 Marzo 2010

¹⁰² Ibid. 31 Marzo 2010

¹⁰³ Ibid. 1 Septiembre 2009

impotencia”¹⁰⁴, “es indudable (...) que la tragedia humanitaria de los secuestrados en poder de las Farc sigue viva y que sobre los hombros de la guerrilla está la responsabilidad ineludible de su bienestar y de su pronta liberación.”¹⁰⁵

Adicional a este, el país sufre otro problema. “Los campos de Colombia están sembrados de un asesino silencioso, responsable de miles de víctimas y que amenaza permanentemente la vida y la integridad física de cientos de miles de campesinos y de la fuerza pública (...). Son las incontables minas antipersonas y las municiones sin explotar que los grupos armados ilegales han venido plantando indiscriminadamente en áreas donde habitan y transitan civiles inocentes.”¹⁰⁶ “El Ejército colombiano está desarrollando programas de desminado dentro de un ambicioso plan gubernamental a diez años”¹⁰⁷, “sin embargo, estos esfuerzos estatales por cumplir con los compromisos de la Convención contrastan con el creciente sembrado indiscriminado de minas ‘hechizas’ que las Farc y el Eln han desplegado por 31 de los 32 departamentos del país.”¹⁰⁸ “El liderazgo que Colombia está asumiendo en la erradicación de las minas merece ser acompañado por la Comunidad Internacional: con respaldo diplomático (...) y con ayuda económica para asumir las pesadas cargas.”¹⁰⁹ Mientras tanto, el gobierno podría acelerar la “asistencia hospitalaria a las víctimas civiles y la destrucción del resto de zonas minadas en los alrededores de varias bases militares.”¹¹⁰

Ahora bien, en cuanto al proceso con las autodefensas, la “ley de Justicia y Paz” concentró “el esfuerzo de la administración Uribe en desmovilizar las estructuras paramilitares a cambio de conocer la verdad de sus horrores, reparar a sus cientos de miles de víctimas y garantizar la no repetición de las atrocidades.”¹¹¹ Así, “el Gobierno enfrentó el dilema de la justicia transicional: la delicada combinación de

¹⁰⁴ Ibid. 1 Septiembre 2009

¹⁰⁵ Ibid. 1 Septiembre 2009

¹⁰⁶ Ibid. 29 Noviembre 2009.

¹⁰⁷ Ibid. 29 Noviembre 2009.

¹⁰⁸ Ibid. 29 Noviembre 2009.

¹⁰⁹ Ibid. 29 Noviembre 2009.

¹¹⁰ Ibid. 29 Noviembre 2009.

¹¹¹ Ibid. 25 Julio 2010

dosis de paz que implicaba el desmonte de las autodefensas, y de justicia, consistente en penas reducidas por crímenes de lesa humanidad.”¹¹²

“La tarea impuesta por esta ambiciosa normatividad ha sido tanto titánica como abrumadora (....) La inmensa extensión de la violencia y las intrincadas redes del fenómeno paramilitar han desbordado, sin duda, los recursos gubernamentales.”¹¹³ “En materia de sentencias judiciales, verdades reconstruidas, bienes recuperados para la reparación y garantías de no repetición, la Ley 975 ratificó muchos de los temores que surgieron en estos cinco años de aplicación.”¹¹⁴

Con relación a las condenas de jefes paramilitares “la norma no tuvo los dientes suficientes para arrebatarnos los bienes a los desmovilizados y así robustecer financieramente la reparación.”¹¹⁵ “En cuanto a la reconstrucción de la verdad, la extradición de los máximos líderes de las autodefensas a Estados Unidos por narcotráfico sirvió para imponerles penas más altas, pero truncó en buena medida la oportunidad de conocer en Colombia la profundidad de sus lazos con otros sectores de la sociedad, más allá de los políticos regionales.”¹¹⁶ “Además, frente a la no repetición, el país presencia impotente cómo medio centenar de líderes de asociaciones de víctimas del conflicto han sido asesinados en los últimos años. Esta revictimización no sólo atenta contra el espíritu de la ley, sino enfrenta al Estado a la responsabilidad de proteger a las personas y garantizarles el derecho a la vida.”¹¹⁷ A pesar de este panorama, no se deberían “medir los logros de Justicia y Paz únicamente por sus máximos estándares, aquellos que la mayoría de países en conflicto han sido incapaces de igualar.”¹¹⁸ “Ha habido cerca de 4.346 confesiones de más de 25.000 hechos y se han exhumado 2.719 fosas

¹¹² Ibid. 25 Julio 2010

¹¹³ Ibid. 25 Julio 2010

¹¹⁴ Ibid. 25 Julio 2010

¹¹⁵ Ibid. 25 Julio 2010

¹¹⁶ Ibid. 25 Julio 2010

¹¹⁷ Ibid. 25 Julio 2010

¹¹⁸ Ibid. 25 Julio 2010

comunes.”¹¹⁹ “El número de colombianos registrados como víctimas alcanzó los 300.000 en todo el país”¹²⁰, “miles de compatriotas conocieron el destino de sus seres queridos gracias a esta ley.”¹²¹ “La condición de víctimas es hoy reconocida y los derechos que esta implica cuentan con instrumentos, algunos no tan bien diseñados, para ejercerse.”¹²² En la reparación por vía administrativa, “los insuficientes recursos están saliendo de las arcas públicas y no de los patrimonios”¹²³ “de los paramilitares.”¹²⁴ Es por eso que el Gobierno debe emprender ajustes a la ley y “agilizar el impulso que traen estos procesos de justicia, verdad y reparación.”¹²⁵ “La presión sobre los jefes desmovilizados para que profundicen la verdad del fenómeno paramilitar debe ir acompañada de mayor celeridad en los procesos judiciales y en la captura de los bienes. Aunque con escasas condenas, poca reparación y sin la completa verdad, la experiencia de justicia transicional debe continuar.”¹²⁶

“En Colombia existe creciente conciencia sobre el respeto de los derechos humanos, al igual que mecanismos para castigar a quienes cometen abusos.”¹²⁷ En este contexto también hay que mencionar que “como consecuencia del gravísimo caso de los ‘falsos positivos’ tuvo lugar una importante purga en las Fuerzas militares y están en marcha procesos judiciales.”¹²⁸ Sin embargo, en el último año, “Colombia en general y el Ministerio en particular tienen mucho que mostrar con respecto al tema de los derechos humanos. Los manuales expedidos, las visitas de funcionarios internacionales recibidas, las rendiciones de cuentas hechas y las explicaciones ofrecidas dan fe de un compromiso serio y constante

¹¹⁹ Ibid. 25 Julio 2010

¹²⁰ Ibid. 25 Julio 2010

¹²¹ Ibid. 25 Julio 2010

¹²² Ibid. 25 Julio 2010

¹²³ Ibid. 25 Julio 2010

¹²⁴ Ibid. 25 Julio 2010

¹²⁵ Ibid. 25 Julio 2010

¹²⁶ Ibid. 25 Julio 2010

¹²⁷ Ibid. 8 Enero 2010

¹²⁸ Ibid. 8 Enero 2010

con el tema. Pero dichos progresos hay que hacerlos conocer, incluso mientras se reciben críticas que pueden parecer injustas.”¹²⁹

3.3 Programa Narrativo Mensajes tipo 2

3.3.1 Análisis Predicativo Tipo II

3.3.1.1 Gobierno: El Gobierno Central, Presidente, Gobiernos Locales.

A) Funciones:

- Impulsar
 - Continuidad en la política de Seguridad Democrática que permita mantener las conquistas de los últimos 8 años.
- Impedir
 - A los desplazados la proliferación de tomas de parques y plazas públicas así sea con medidas de choque.
 - La salida de prisión a mandos medios guerrilleros sin mecanismos fuertes de verificación de sus comportamientos para evitar que vuelvan a delinquir.
 - Un retroceso en la situación de seguridad en Colombia de los últimos 8 años.
- Derrotar
 - A los grupos violentos, en especial la guerrilla y las nuevas bandas criminales surgidas después del proceso de desmovilización de las Autodefensas (Bacrim).
- Desarticular
 - La Guerrilla y organizaciones del narcotráfico.
- Rescatar Militarmente
 - A todos los secuestrados.

¹²⁹ Ibid. 5 Febrero 2010.

- Repeler
 - Los violentos a través de las Fuerzas Militares.
- No Debe
 - Negociar ningún acuerdo humanitario con las Farc.
- Conseguir
 - Recursos para combatir delincuencia urbana (Bacrim).
 - Recursos del plan Colombia para combatir la guerrilla y narcotráfico.
- Castigar
 - Severamente los actos de barbarie de la guerrilla.

B) Calificaciones

- No Debe
 - Temblar la mano
 - Dejar salir a mandos guerrilleros
- Debe
 - Mantener conquistas
 - Derrotar
 - Castigar
- No puede
 - Dar marcha atrás
- Es
 - Exitoso
- Requiere
 - Nueva Estrategia
- Ha dejado
 - Un legado transformador (Seguridad Democrática)

C) Símbolos

- No le puede “temblar la mano” a las autoridades.
- Así sea con “medidas de choque”.
- La seguridad democrática –“el indiscutible legado transformador de la era Uribe”-.
- Cerrar con “broche de oro” un legado que, desde ya, puede ser considerado como histórico.
- “Delicado y frágil balance” entre los sacrificios que demanda la desmovilización y los castigos para los criminales de guerra que la sociedad exige.
- La violencia en las capitales se ha venido convirtiendo en un “talón de Aquiles” para el programa “estrella” del Gobierno.
- La decisión del Gobierno de ordenar el rescate militar de todos los secuestrados es la respuesta “obvia”.
- Trascendencia de “repeler” a los violentos.
- “La culebra” sigue poniendo huevos malditos. Hay que quitarle el veneno, pero el solo camino de la represión no es suficiente.
- Los tiempos en los que los grupos armados ilegales apresaban civiles inocentes al borde de una carretera para financiarse y despertar terror son, afortunadamente, “una pesadilla del pasado”.
- “Legado” que es popular.
- Los votantes aspiran a mantener “las conquistas” de los últimos 8 años.

3.3.1.2 La Guerrilla: Las Farc, ELN.

A) Funciones:

- Desata
 - Fuerzas asimétricas igualmente brutales en la orilla opuesta (paramilitarismo).

B) Calificaciones

- Son
 - Las únicas responsables del bienestar, la libertad y la seguridad de los policías y soldados en su poder.
 - Anacrónicas
 - Brutales
 - Peligrosas
 - Repudiables
 - Descaradas
- Están
 - Mermadas por muertes, capturas y golpes a su estructura
 - Al borde de la liquidación
 - Golpeando de nuevo
- No es
 - Fuerte
- Buscan
 - Ser protagonistas
- Ignoran
 - El contexto en que viven
- Atacan
 - Con ventaja y a mansalva
- Creen
 - En la violencia como solución de todo problema
- Sacrifican
 - Por igual al enemigo y a gente inocente
- Concitan
 - Antipatía por el 98% de los colombianos

- Generan
 - Temor en la población civil

C) Símbolos

- Su “ceguera es patética”
- Responde al síndrome general de las bandas terroristas, que se caracterizan por el “ensimismamiento y la enajenación” de la realidad
- “Intoxicadas” por una ideología indiscutible
- Grupos armados irregulares, “como las Farc o Al Qaeda”
- “Horrores” cometidos por las Farc
- Actos de barbarie dignos del “más severo de los castigos”
- Protagonistas de actos terroristas propios de los conflictos más “degradados” del planeta.
- Acciones “canallas”.
- Continúan “acechando”.
- “Atroces” crímenes y “brutales” actos.
- “Repudiable” acción.
- “Chantaje” contra el Gobierno.
- Se comportan como “un cartel más”, donde abundan los capos.
- “Cachetada” de las Farc contra quienes, desde la sociedad civil y la actividad política, creyeron en sus intenciones de terminar con el secuestro de civiles.
- Para la guerrilla los rehenes no son más que “mercancía” con la que juegan a su antojo.
- “Diezmada” en su liderazgo, desmotivada en sus filas y desorientada en su cúpula.
- “Garras” de las Farc.
- “Macabro” botín.
- “Brutal horror” del cautiverio

3.3.1.3 Autodefensas: Comandantes AUC, Bases combatientes.

A) Funciones:

- Ninguna

B) Calificaciones:

Ninguna

3.3.1.4 BACRIM : Bandas Emergentes, Aguilas Negras.

A) Funciones:

- Ninguna

B) Calificaciones

- Son
 - Bandas narcoparamilitares de nueva generación
 - Delincuentes
 - Narcotraficantes
 - Extorsionistas
- No cuentan
 - Motivación política
- Tienen
 - Redes de prostitución
 - Redes de juegos ilegales
- No tienen
 - Vínculo con los paramilitares
- Están
 - Expandiéndose

- No pueden
 - Recibir negociación del Gobierno

C) Símbolos

- “La culebra”, representada por los ‘narcoparas’, aunque bastante golpeada, sigue viva.
- El país enfrenta enemigos.
- Estas negociaciones tienen “problemas en su espíritu”, pues no se dan con organizaciones políticas, y en sus mecanismos, al ser pactos de no agresión entre delincuentes. Son la fórmula perfecta para una paz de papel.

3.3.1.5 Fuerzas Armadas: Policía, Ejército, FF.MM. Ministerio de Defensa.

A) Funciones

- Golpear
 - Contundentemente a la Guerrilla.
 - A las Bacrim (Bandas Criminales).
- Matar
 - Cabecillas guerrilleros.
- Responder
 - Rápida y contundentemente las salvajadas de la guerrilla.
- Perseguir
 - Sistemáticamente a los culpables de violaciones de derechos civiles.
- Ofrecer
 - Recompensas por información que permita la captura de autores de crímenes

- Tener
 - Las mejores herramientas policivas y de combate contra los delincuentes.
- Rescatar Militarmente
 - A los secuestrados.

B) Calificaciones

- Deben ser
 - Rápidos
 - Contundentes

C) Símbolos

- Gravísimo caso de los ‘falsos positivos’
- Importante “purga” en las Fuerzas Militares
- El 2009, en materia de balance militar contra las Farc, ha sido “menos espectacular” que el año anterior.
- Tanto ejército como policía están haciendo una labor “titánica”.
- Exitoso despliegue de “audaces operativos militares”.

3.3.1.6 Víctimas: Secuestrados, Desplazados, Familiares, Víctimas.

A. Funciones

- Repudiar
 - La violación sistemática de derechos humanos que practican los grupos guerrilleros y las bandas criminales.
- Deben ser
 - Rescatados militarmente por el Gobierno.

B) Calificaciones

- Son
 - Muertos en Vida en la Selva

C) Símbolos

- “Muertos en vida”
- “Peones en el ajedrez” entre Gobierno y guerrilla.
- ¿Acaso son “animales”?
- “Pudriéndose” en la selva

3.3.1.7 Corte Suprema de Justicia

A) Funciones

- Amenazar
 - Con descarrilar uno de los instrumentos jurídicos más poderosos con los que cuenta el Estado Colombiano en la lucha contra el narcotráfico.

B) Calificaciones

- Se han
 - Endurecido
- No deben
 - Descarrilar la extradición

3.3.1.8 Comunidad Internacional: Venezuela, Países Vecinos, OEA, EEUU

A) Funciones

- Respaldar
 - Diplomáticamente a Colombia condenando duramente a las FARC y con ayuda Económica.
- Cooperar
 - Con operativos conjuntos en fronteras

- Permitir
 - Presencia en Venezuela de cabecillas de grupos guerrilleros.
- Tomar
 - Medidas judiciales y políticas contra dirigentes del MCB en Venezuela que apoya a las FARC abiertamente y ha nombrado a Manuel Marulanda Vélez y a Alfonso Cano como presidentes honorarios del movimiento.

B) Calificaciones

- Deben
 - Ayudar económicamente al Gobierno
 - Condenar duramente a las Farc

C) Símbolos

- Venezuela lleva años de carrera armamentista y de “gestos amistosos” hacia las Farc y el Eln.
- El fanatismo del nuevo movimiento bolivariano por los jefes de las Farc es no sólo “anacrónico, sino francamente peligroso”.
- Venezuela se ha convertido en la “sede de la retaguardia” de los jefes guerrilleros.

3.3.2 Programa narrativo mensajes tipo II

Para el periódico El Tiempo, “los inmensos avances que ha tenido la política de seguridad democrática son innegables. Los colombianos hoy viven unas circunstancias de paz y tranquilidad que no se conocían desde hace muchas décadas. Esta mejoría se ha dado principalmente por los logros en desarticular la guerrilla y las organizaciones del narcotráfico.”¹³⁰ Sin embargo, “el 2009, en materia de balance militar contra las Farc, ha sido menos espectacular que el año

¹³⁰ Ibid. 5 Octubre 2009

anterior. Para comenzar, no ha habido golpes únicos como la ‘Operación Jaque’ o la caída de miembros del secretariado. Además, es notorio el incremento del accionar guerrillero en zonas como Cauca y Nariño.”¹³¹ Sin embargo, “que la guerrilla aumente su actividad de minado o que use francotiradores son acciones que para diversos especialistas son una evidencia de un forzado repliegue y no una muestra de fortaleza. También es necesario introducir en el análisis las deserciones, capturas y demás golpes a su estructura de mandos medios.”¹³² Lo cierto es que la situación actualmente no llega a los “niveles de 2002, cuando comenzó la marcha de la política de Seguridad Democrática. Las estadísticas al respecto son irrefutables, tanto desde el punto de vista de homicidios y secuestros, como del de tomas de poblaciones o ataques a la infraestructura.”¹³³ Un ejemplo es que “a pesar de que las Farc habían mantenido durante décadas una presencia histórica en la región –del Sumapaz-, las Fuerzas Militares (...) recuperaron este corredor estratégico y asestaron duros reveses a los subversivos, incluyendo, por ejemplo, la muerte del Negro Antonio.”¹³⁴ Es así como en la región del Sumapaz fue posible volver a celebrar elecciones locales “en el 2007, tras siete años sin comicios.”¹³⁵ “Esa actividad política y social, propia de la paz y la democracia, es la que los guerrilleros intentan acallar en los más de ocho departamentos –como el Caquetá y el Huila– donde asesinan, amenazan y destierran a cientos de ediles, concejales y demás representantes de las comunidades.”¹³⁶

A pesar de “los inmensos avances de la seguridad democrática”¹³⁷ “-el indiscutible legado transformador de la era Uribe–, el Gobierno tiene asuntos por finiquitar. Mientras las bandas de narcoparamilitares de nueva generación siguen su accionar, las Farc, recientemente, han empezado a golpear de nuevo.”¹³⁸ “El

¹³¹ Ibid. 2 Diciembre 2009

¹³² Ibid. 2 Diciembre 2009

¹³³ Ibid. 2 Diciembre 2009

¹³⁴ Ibid. 21 Octubre 2009

¹³⁵ Ibid. 21 Octubre 2009

¹³⁶ Ibid. 21 Octubre 2009

¹³⁷ Ibid. 5 Octubre 2009

¹³⁸ Ibid. 3 Agosto 2009

microtráfico y la violencia asociada a este –también- son retos de la política de seguridad democrática en la capital y en el resto de ciudades de Colombia”.¹³⁹ “Tras un 2008 catalogado como de los peores períodos de dicha organización subversiva en su historia, la guerrilla ha incrementado recientemente sus atentados con explosivos, sus hostigamientos a cabeceras municipales y el despliegue de campos minados.”¹⁴⁰ Pero “además del objetivo de retomar vitales corredores estratégicos desde el Sumapaz hasta la Costa Pacífica para el transporte de tropa, droga y suministros, la guerrilla está detrás de consolidar un mensaje político: el de que, después de siete años de gobierno de Álvaro Uribe, no está derrotada militarmente.”¹⁴¹ Este recrudecimiento deberá contar con “una respuesta firme de las instituciones y no debería generar un nuevo balance de fuerzas, ni tampoco un retroceso en los logros del Gobierno. Pero sí implica una reactivación, que pone a prueba la consolidación regional de la política de seguridad democrática y la capacidad de reacción del Estado.”¹⁴²

A las Farc “les ha dado por castigar a (la) comunidad (...) seguramente porque son un estorbo para sus propósitos de narcotráfico”¹⁴³, en esa línea han cometido “acto(s) de barbarie, digno(s) del más severo de los castigos. (...) Es un macabro recordatorio de los niveles de degradación a los que pueden llegar las acciones de la guerrilla”.¹⁴⁴ Ante esto, El Tiempo exige una “respuesta de la Fuerza Pública a esta salvajada (...) rápida y contundente.”¹⁴⁵ Habrá entonces que sumar “recompensas por información de los autores”¹⁴⁶ a los “operativos de persecución sistemática de los culpables de esta violación flagrante de los derechos humanos de civiles inocentes.”¹⁴⁷

¹³⁹ Ibid. 11 Noviembre 2009

¹⁴⁰ Ibid. 21 Octubre 2009

¹⁴¹ Ibid. 21 Octubre 2009

¹⁴² Ibid. 21 Octubre 2009

¹⁴³ Ibid. 16 Noviembre 2009

¹⁴⁴ Ibid. 16 Noviembre 2009

¹⁴⁵ Ibid. 23 Diciembre 2009

¹⁴⁶ Ibid. 23 Diciembre 2009

¹⁴⁷ Ibid. 23 Diciembre 2009

El *modus operandi* de la guerrilla además de desaparecer la garantía de los derechos humanos de civiles inocentes, tiene una “clara falta de congruencia y descaro”¹⁴⁸, dado que “no se explica de otra manera que, al tiempo que las Farc negocian con el Ejecutivo términos para las liberaciones unilaterales de dos de los múltiples uniformados,”¹⁴⁹ despliegan operativos para el “plagio de un mandatario local en ejercicio.”¹⁵⁰ Este hecho “es una cachetada de las Farc contra quienes, desde la sociedad civil y la actividad política, creyeron en sus intenciones de terminar con el secuestro de civiles como herramienta de presión para exigir la liberación de sus mandos medios presos en las cárceles.”¹⁵¹ “La decisión del Gobierno de ordenar el rescate militar de todos los secuestrados es la respuesta obvia.”¹⁵²

Los rescates militares han sido un “rotundo éxito” del gobierno. El último rescate militar, la operación Camaleón, cerró “con broche de oro la decisión política del presidente Álvaro Uribe de no negociar ningún acuerdo humanitario con las Farc. Duramente criticada hace unos años, la opción del Gobierno por los rescates militares ha dejado, sin duda, un balance de libertad con muy poco costo en vidas. A pesar del entendible rechazo de los familiares de los secuestrados a estas operaciones tipo comando, el compromiso de Uribe de buscar a los militares secuestrados ha rendido frutos y hoy la opinión pública comparte el rechazo gubernamental a cualquier iniciativa de canje.”¹⁵³ Sin embargo, “aún quedan 19 uniformados en la selva, y las opciones para liberarlos están reducidas al rescate militar, o a las entregas unilaterales y voluntarias de la guerrilla.”¹⁵⁴

Ahora bien, “el deterioro de los indicadores de seguridad urbana en Colombia es inocultable. De hecho, en varias capitales, tanto la actividad delincinencial como

¹⁴⁸ Ibid. 23 Diciembre 2009

¹⁴⁹ Ibid. 23 Diciembre 2009

¹⁵⁰ Ibid. 23 Diciembre 2009

¹⁵¹ Ibid. 23 Diciembre 2009

¹⁵² Ibid. 23 Diciembre 2009

¹⁵³ Ibid. 15 Junio 2010

¹⁵⁴ Ibid. 15 Junio 2010

las tasas de homicidio se han disparado.”¹⁵⁵ “Además, desde el punto de vista político, el tema de la violencia en las capitales se ha venido convirtiendo en un talón de Aquiles para el programa estrella del Gobierno.”¹⁵⁶ “A pesar de que las autoridades han dado duros golpes a las ‘bacrim’, su imparable expansión muestra que la lucha contra ellas necesita refuerzos.”¹⁵⁷ El Tiempo llama la atención sobre las negociaciones que ha autorizado el Gobierno a la llamada “Comisión por la vida” y a la “Iglesia Católica” para que realice acercamientos a las bandas criminales surgidas del proceso con los paramilitares en Córdoba, Norte de Santander y Chocó.”¹⁵⁸ La preocupación de El Tiempo es que “a diferencia de las antiguas autodefensas, estas bandas emergentes no cuentan con ninguna motivación política, ni siquiera con la excusa de la lucha contra la subversión.”¹⁵⁹ Adicional a esto, el Gobierno tiene una “dualidad de mensajes (hacia las Bacrim).”¹⁶⁰ “La confusión surge del intento del Gobierno de ganar por ambas puntas: mantiene la mano dura y avala contactos que temporalmente bajan la violencia urbana. No obstante, el costo de la estrategia es una ambigüedad peligrosa, que eleva las expectativas de los criminales y desestimula al aparato policial y judicial, que lucha diariamente contra los delincuentes. Ni hablar de que se genera un espacio de desinstitucionalización, que termina premiando al bandido por disparar la criminalidad.”¹⁶¹ En resumen, “estas negociaciones tienen problemas en su espíritu, pues no se dan con organizaciones políticas, y en sus mecanismos, al ser pactos de no agresión entre delincuentes.”¹⁶²

Una de las claras consecuencias de la expansión de las bandas emergentes es un incremento en el microtráfico de estupefacientes en las ciudades, en donde “el

¹⁵⁵ Ibid. 5 Octubre 2009

¹⁵⁶ Ibid. 5 Octubre 2009

¹⁵⁷ Ibid. 19 Agosto 2009

¹⁵⁸ Ibid. 12 Febrero 2010

¹⁵⁹ Ibid. 12 Febrero 2010

¹⁶⁰ Ibid. 12 Febrero 2010

¹⁶¹ Ibid. 12 Febrero 2010

¹⁶² Ibid. 12 Febrero 2010

mercado al menudeo (...) alcanza unos 300.000 millones de pesos al año.”¹⁶³
“Estas redes han estimulado el consumo interno de droga mediante subsidios de precios, promoción de los ‘jíbaros’ e instalación de las ‘ollas’. Vender estupefacientes en cantidades que no sobrepasen la dosis mínima se ha vuelto, la caja menor de cuatro capos que se pelean las zonas.”¹⁶⁴ La preocupación “ya figura en los planes del presidente Álvaro Uribe, quien en el pasado consejo comunal habló de la importancia de capturar a los distribuidores de las pequeñas dosis. (En casos como estos,) Inteligencia, valor civil y denuncia ciudadana son fundamentales, con las debidas garantías de las autoridades.”¹⁶⁵

¹⁶³ Ibid. 11 Noviembre 2009

¹⁶⁴ Ibid. 11 Noviembre 2009

¹⁶⁵ Ibid. 11 Noviembre 2009

4 Análisis Crítico

En el marco del conflicto armado que vive Colombia El Tiempo “favorece todos los esfuerzos que se realicen en pro de la paz nacional e internacional y rechaza cualquier movimiento que invoque o ejercite la violencia o las vías de hecho para la consecución de sus fines.”¹⁶⁶ No obstante el principio rector del diario, sus editoriales aprueban el ejercicio de la fuerza si se trata de la consecución de políticas de gobierno como aquella de la Seguridad Democrática. El Tiempo justifica la fuerza en construcciones del lenguaje como “no puede temblar la mano” “así sea con medidas de choque”, la razón es que hay que “repeler a los violentos” porque sus “actos de barbarie (son) dignos del más severo de los castigos”.

Atención a las frases y palabras: “así sea”, “repeler”, “el más severo de los castigos”. Son determinantes en la configuración discursiva del diario El Tiempo: a) “así sea” es una construcción concesiva del lenguaje que avala una acción, aún si las condiciones no son las óptimas. b) “repeler”, cuya connotación es similar a la de usos verbales como rechazar, remite a “arrojar, lanzar o echar de sí algo con impulso o violencia”¹⁶⁷ c) “severo” remite a “riguroso, áspero, duro en el trato o castigo”¹⁶⁸, se trata de un calificativo que difícilmente se aleja de la violencia porque lo “severo” se puede “hacer bruscamente, con ímpetu e intensidad extraordinarias”¹⁶⁹.

Los usos del lenguaje descritos van de la mano con un elogio constante al Gobierno Uribe y a su sucesor a través de frases como “indiscutible legado transformador de la era Uribe” que invita a “cerrar con broche de oro un legado que, desde ya, puede ser considerado como histórico”, un “legado que es popular”, por eso “los votantes aspiran a mantener las conquistas de los últimos 8

¹⁶⁶ EL TIEMPO, Manual de Redacción. 2000

¹⁶⁷ Real Academia Española. Tomado del Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Edición. www.rae.es

¹⁶⁸ Ibid.

¹⁶⁹ Ibid.

años”. La palabra “indiscutible” por sí sola le hace una venia al legado de Uribe por ser evidente y no pasar desapercibido. La alusión “cerrar con broche de oro” es una formación del lenguaje utilizada coloquialmente para hacer referencia al cierre brillante y excepcional de una tarea o gestión¹⁷⁰. De ahí que se convierta en legado, lo que debe ser transmitido a los sucesores.¹⁷¹ Claramente, estas aseveraciones le dan un espaldarazo a las políticas de seguridad del Gobierno Uribe y promueven en el Gobierno nacional y local una posición radical. Tan enfática es la visión de EL Tiempo en sus editoriales que propone a las autoridades locales de Bogotá que “no le puede temblar la mano” aún para evitar que los desplazados tomen plazas públicas “así sea con medidas de choque”. Vuelvo al análisis de esta frase, pero esta vez para destacar la fuerza de “medidas de choque”. La palabra “medidas” tiene que ver con las disposiciones que deben ser adoptadas para poner en marcha una iniciativa, sin embargo, el complemento “de choque” las califica como acciones posiblemente violentas, en la medida en que “choque” remite al “encuentro violento de una cosa con otra” o de una “acción muy enérgica y rápida”¹⁷² Hasta aquí se evidencia una inclinación acentuada de las editoriales de El Tiempo hacia la conservación del *statu quo* y el enfrentamiento militar como caminos posibles hacia una mejor nación.

En el conjunto de editoriales que fueron objeto de estudio hay que destacar construcciones del lenguaje generadoras de polémica. Para el diario El Tiempo las posibilidades de rescate militar constituyen una bandera que debe erigirse en alto: “ordenar el rescate militar de todos los secuestrados” es calificada como una decisión “obvia” que debe ser acompañada de acciones que trasciendan en la lucha por alcanzar un claro objetivo: “repeler a los violentos”. Una acción “obvia” está “delante de los ojos”¹⁷³ y se justifica por sí sola, por tal razón no debe suscitar dudas. El Tiempo, a través de un lenguaje guerrerista, se erige como un actor político que apoya los enfrentamientos armados de los que se vale la Seguridad

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Ibid.

¹⁷² Ibid.

¹⁷³ Ibid.

Democrática para mantener el control y dar un parte de tranquilidad a los colombianos. A través de discursos de este perfil busca la construcción de una base social que sea soporte de una política que con “mano dura” logre los objetivos de control social.

En esta misma línea, la descalificación de la guerrilla de las Farc por parte de las editoriales de El Tiempo no se pone en entredicho. Frases como “su ceguera es patética” o “se caracterizan por el ensimismamiento y la enajenación de la realidad”, demuestran que para el periódico las Farc se han “desentendido del mundo exterior”, razón por la que su lucha resulta ilegítima. Su ignorancia de la realidad nacional es “patética” en la medida en que infunde afectos con “particularidad dolor, tristeza o melancolía.”¹⁷⁴ Los calificativos “bandas terroristas” y comparaciones de “grupos armados irregulares, como las Farc o Al Qaeda” “protagonistas de actos terroristas propios de los conflictos más degradados del planeta”, legitiman la posición del Gobierno desde dos puntos de vista: 1. Confirma la posición oficial de llamar a esta organización “terrorista” y no *grupo alzado en armas, violentos o subversivos*, lo que le adjudica inmediatamente la connotación de agentes del terror. 2. Iguala en el mismo nivel a las Farc y Al Qaeda, la organización terrorista causante de la tragedia del World Trade Center en el 2001, lo que permite asentar en el imaginario social la dimensión de la barbarie causada por las Farc. Es evidente que una de las principales inclinaciones del diario El Tiempo es a dejar constancia de su defensa a ultranza del *statu quo* y de su rechazo tajante ante “actos de barbarie dignos del más severo de los castigos” y “horrores cometidos por las Farc” que no permiten la apertura de caminos hacia la reconciliación. Las acciones perpetradas son “horrores” por su condición: son terribles, espantosas y atroces¹⁷⁵.

¹⁷⁴ Ibid

¹⁷⁵ Ibid.

En esta línea, los lectores adquieren representaciones sociales con un fuerte contenido simbólico que genera repulsión hacia la agrupación armada. La “repudiable acción”, las “acciones canallas”, los “atrocies crímenes y brutales actos” y el “chantaje contra el gobierno” “continúan acechando”. Atención a los usos del lenguaje “repudiable”, “canallas” “brutales”, “chantaje” y “acechando”, son calificaciones reincidentes en la obra editorial que construyó el diario El Tiempo durante el último año de gobierno de Uribe Vélez y que tienen una clara connotación. Una acción “repudiable” remite a un hecho que no se puede admitir o aceptar, la misma acción con el adjetivo “canalla” la ubica como propia de la “gente baja y ruin” de una persona “despreciable y de malos procederes”. La calificación “brutales” permite inferir actos “propios de los animales por su violencia e irracionalidad”¹⁷⁶, animales que “aguardan cautelosamente con algún propósito”¹⁷⁷, que bien puede ser el chantaje, sinónimo de extorsión. De esta manera, se infiere implícitamente una representación social de las Farc como una organización que no es digna de perdón (tal como lo define Hanna Arendt) ni de algún tipo de acercamiento hacia la paz. Este discurso en particular, invita al rechazo absoluto y sin concesiones hacia la agrupación armada.

La posibilidad de intercambio humanitario que bien podría ser determinante en la construcción social de reconciliación está lejos de adoptarse como tal. “Para la guerrilla los rehenes no son más que mercancía con la que juegan a su antojo”, “mercancía” que representa un “macabro botín”. Entiéndase “macabro botín” como “un premio de conquista”¹⁷⁸ “que participa de la fealdad de la muerte y de la repulsión que esta puede causar.”¹⁷⁹ Estas son aseveraciones que generan rechazo en el lector y despiertan el apoyo hacia causas más determinantes como el rescate militar y acciones defensivas “contundentes”. Se divulga, entonces, un discurso impregnado de representaciones sociales de la guerra que justifican

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ Ibid. Definición dada por la Real Academia Española a la unidad verbal “acechar”.

¹⁷⁸ Ibid. Definición dada a “botín” por la Real Academia Española.

¹⁷⁹ Ibid. Definición dada del adjetivo “macabro” por la Real Academia Española.

respuestas bélicas por parte del Gobierno. Esto es, los usos del lenguaje están encaminados a la construcción de un consenso social de la ofensiva armada para mantener el control social.

En este contexto, por lo menos en el periodo comprendido entre agosto de 2009 y julio de 2010, la posición institucional del periódico El Tiempo se encargó de legitimar las acciones del Gobierno orientadas a “desarticular la guerrilla” aún más cuando los logros estaban a la orden del día: “está diezmada en su liderazgo, desmotivada en sus filas y desorientada en su cúpula.” La palabra diezmar definida como “sacar de diez uno”¹⁸⁰ representa la debilidad de las Farc, de ahí su desmotivación y que se encuentren confundidas, extraviadas y ofuscadas.¹⁸¹ La opinión rectora del diario El Tiempo no pone en duda, aún si es de manera implícita, que mientras la guerrilla no deponga las armas el camino seguirá siendo combatirlas militarmente. Se deberá contar con “una respuesta firme de las instituciones”, entiéndase por “firme” una respuesta “que no se mueve ni vacila”, “que no se deja dominar o abatir”, sería una respuesta “con firmeza, con valor, con violencia.”¹⁸² De esta manera, las editoriales de El Tiempo proyectan a sus lectores una representación social positiva de las labores y logros del Gobierno en la lucha armada y de su responsabilidad de garantizar la seguridad a los colombianos, aún por la fuerza. Agrega El Tiempo que preferible es no confiar en la guerrilla, pues los últimos secuestros realizados son una “cachetada de las Farc contra quienes, desde la sociedad civil y la actividad política creyeron en sus intenciones de terminar con el secuestro de civiles.” La palabra “cachetada” apoya la construcción social de las Farc como una organización traicionera de la patria.

Insiste el diario El tiempo en una única vía hacia la reconciliación: que la guerrilla de las Farc adopte una nueva posición frente al conflicto interno porque “sus armas no pueden dañar más futuros ni los deseos de vivir en paz”, porque “la paz negociada es el mejor camino” y porque se reconoce “la pérdida de sentido

¹⁸⁰ Ibid

¹⁸¹ Ibid. Definición dada a “desorientado”.

¹⁸² Ibid.

histórico de la lucha armada y su imposibilidad de éxito”. Así es como El Tiempo le adjudica al *enemigo* la responsabilidad del alcance de la paz en el país y en esa misma línea las posibilidades de reconciliación. No obstante, en la otra orilla, la situación con las autodefensas es diferente. “Ha habido cerca de 4.346 confesiones de más de 25.000 hechos y se han exhumando 2.719 fosas comunes. (...) Miles de compatriotas conocieron el destino de sus seres queridos gracias a esta ley.”¹⁸³ Esta vez el discurso de reconciliación está condicionado al cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz, que en este fragmento implícitamente avala El Tiempo. Nótese las cifras utilizadas y la palabra “miles”, remite a usos del lenguaje estratégicos para construir socialmente una imagen positiva de los alcances de la propuesta jurídica. Así, el Tiempo adquiere un perfil de defensa a ultranza de las instituciones y las leyes, en la medida en que sus editoriales avalan y creen en el *fin* de los grupos de autodefensa a través del cumplimiento de la legislación especial por eso le afirma que “necesita agilizar el impulso que traen estos procesos de justicia, verdad y reparación.”¹⁸⁴

En esta misma línea, El Tiempo no deja de lado a las “Bacrim”, organizaciones armadas con las que demuestra aún más su posición de defensa a ultranza de la institucionalidad. Los usos del lenguaje editorial dejan clara una “línea divisoria entre el paramilitarismo de antes de la desmovilización y este ‘nuevo’ narcotráfico delictivo.” En esta configuración discursiva se presenta una ruptura frente a la situación de las autodefensas. Remitirse a la palabra “desmovilización” es útil para validar de manera implícita los alcances de la Ley de Justicia y Paz y para hacer una división tajante frente a las Bacrim: la “culebra, representada por los narcoparas, (que) aunque bastante golpeada, sigue viva”. El Tiempo no vacila en establecer una comparación entre las “bandas criminales” y un animal que es “sagaz para su provecho”¹⁸⁵, mientras que a las Farc sólo les adjudica actos “brutales” que si bien son “propios de los animales por su violencia e

¹⁸³ Editorial El Tiempo, 25 julio 2010

¹⁸⁴ Ibid. 25 julio, 2010

¹⁸⁵ Real Academia Española. Tomado del Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Edición. www.rae.es

irracionalidad”¹⁸⁶no define a cuáles son semejantes. Las “Bacrim” son “culebras”, animales de la familia de las serpientes, estas últimas consideradas como la representación del “espíritu del mal.”¹⁸⁷ Con adjetivaciones de este tipo El Tiempo justifica la exigencia del “desmantelamiento” urgente de las bandas, al tiempo que descarta todo tipo de negociaciones porque “tienen problemas en su espíritu (las negociaciones), pues no se dan con organizaciones políticas”. Atención a este punto. Lo anterior permite inferir el reconocimiento político de las Farc por parte de El Tiempo, en tanto con esta agrupación “la paz negociada es el mejor camino” y en ese caso “la esencia”¹⁸⁸de las negociaciones no tiene problemas pues el diálogo se da entre actores políticos. Así las cosas, la construcción del lenguaje en el caso de las “Bacrim”, proyecta como representación social una única vía para el control de agrupaciones de su perfil: la fuerza.

El discurso editorial del periódico El Tiempo, comprendido entre agosto de 2009 y julio de 2010, además de hacer claras conexiones con el Gobierno, la guerrilla, los paramilitares y las “Bacrim”, le concede un espacio importante a las víctimas de la violencia ejercida por los actores antes mencionados. El uso del lenguaje editorial de El Tiempo construye una fuerte representación social de las víctimas del secuestro en Colombia. Sin pretensiones o disimulo, el diario las describe como “muertos en vida en la selva” y “peones en el ajedrez entre Gobierno y guerrilla” que están “pudriéndose”. Las metáforas “muertos en vida”, “peones en el ajedrez” y “pudriéndose” dilucidan lo degradante de la condición de las víctimas del “horror” de las Farc y de la barbarie que se comete al mantenerlas en condiciones infrahumanas obligadas a su pudrición, cuyo resultado no es otro que la muerte.

Los usos del lenguaje en este apartado no permiten pasar por alto el señalamiento al Gobierno como un estratégico y frío jugador de ajedrez. Esta es una de las (escasas, si no es la única) ocasiones en que las editoriales de El Tiempo ubican

¹⁸⁶ Ibid.

¹⁸⁷ Ibid. Definición de “serpiente”.

¹⁸⁸ Ibid. Definición de “espíritu”.

en un mismo nivel a la guerrilla y al Gobierno, como dos actores que buscan salirse con la suya en el ajedrez de la guerra. Plantea El Tiempo que el nuestro es un conflicto similar a un juego en el que el pensamiento estratégico es la punta de lanza de quien saldrá victorioso. En esta línea es posible construir socialmente el imaginario de un Gobierno capaz de pensar y actuar en iguales dimensiones a una guerrilla desalmada y sanguinaria. Nótese que aquí no se diferencia la capacidad de los jugadores, por lo que ese grupo armado “debilitado” de las Farc deja de ser representado socialmente.

Ahora bien, El Tiempo plantea las posibles soluciones para poner fin al “calvario” que viven las víctimas de la guerra. a) Que la guerrilla opte por las liberaciones, b) que el gobierno las rescate militarmente o c) que un tercer país “genere las garantías y confianza suficientes para destrabar los nudos gordianos”. Tres opciones, donde además de adjudicar funciones a cada uno de los jugadores en el ajedrez, ubica una especie de arbitro que intermedie en desenredar los “nudos gordianos” del conflicto Colombiano. Con calificativos de este nivel, el periódico reconoce la complejidad de la situación y la necesidad de un tercero que arbitre, presente las condiciones para el logro de la paz y, sobre todo, las haga respetar.

5 CONCLUSIONES

El objetivo general de esta investigación consistió en identificar la orientación del discurso editorial del periódico El Tiempo en la construcción de representaciones sociales asociadas al perdón y la reconciliación (mensaje tipo 1), y a la violencia y el conflicto (mensaje tipo 2). Esto es, identificar si los tratamientos del lenguaje utilizados por el periódico contribuyeron a la construcción de un consenso social del perdón y la reconciliación, o del conflicto y la violencia, durante el periodo agosto 2009- julio 2010.

El marco teórico se construyó utilizando como soporte teórico principalmente los planteamientos de Edgar Barrero en “De Macondo a mancusu. Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia”, María Victoria Uribe en “Antropología de la inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia”, Jorge Iván Bonilla en “Los Discursos del Conflicto. Espacio público, paros cívicos y prensa Colombia” y Edelman Murray y su aporte en “El espectáculo político de los medios de comunicación”. De esta manera, el capítulo correspondiente al marco teórico contribuyó al desarrollo de una primera fase argumentativa en la que se explicó por qué la guerra “no se da sólo en el plano de la confrontación armada”¹⁸⁹ y cómo –valiéndose de los medios de comunicación– produce un “impacto en la estructura psicológica de poblaciones enteras”.

En una segunda fase argumentativa se esclarecieron los orígenes de la venganza y se abordó cómo la violencia manifiesta su crueldad aún más a través de las heridas psicológicas y de qué manera éstas se convierten en el motor para impartir la justicia propia. En una tercera fase se trató el papel y el impacto que tienen las representaciones sociales como constructoras de realidades humanas y cómo el lenguaje constituye la principal herramienta para construir nuevos y

¹⁸⁹ MURRAY, Edelman. *La construcción del Espectáculo político*. Ediciones Manantial, 1991, p. 62

mejorados “mundos”. En este sentido se explicó por qué sobre los medios de comunicación recae con mayor fuerza la responsabilidad de combatir esa *nueva* violencia, que precisamente se vale del lenguaje y los símbolos para reducir y amedrentar al enemigo.

En el capítulo 3 tuvo lugar el desarrollo de los “Programas Narrativos”. Así, en un primer apartado (análisis cuantitativo), se estableció la relación entre la cantidad de menciones alusivas a los mensajes tipo 1 y aquellas relacionadas con los mensajes tipo 2. Sólo teniendo en cuenta las menciones explícitas, se encontró que con 44 alusiones el tratamiento de los mensajes tipo 1 superó el dado a los mensajes tipo 2, que contaron con 33 alusiones. Con esto, la relación fue de 57% por reconciliación frente a un 43% de violencia, con lo que a primera vista pareciera existir un predominio del discurso editorial de El Tiempo hacia la construcción social del perdón y la reconciliación.

En esta misma línea, se procedió a establecer la relación entre los mensajes tipo 1 y tipo 2 con los actores del conflicto. El análisis develó que de acuerdo a los mensajes tipo 1 los actores Gobierno y Víctimas cuentan con mayor número de alusiones. Cada uno tiene 11 menciones que representan un 25%, lo que quiere decir que entre ambos actores representan un 50% del total de alusiones explícitas al perdón y la reconciliación. En un segundo lugar, en el escalafón de los mensajes tipo 1, se encuentran los actores Guerrilla y Comunidad Internacional, cada uno con 7 menciones que representan un 16%, es decir, entre ambos actores suman el 32% del total. Lo anterior nos permite inferir que los mensajes tipo 1 se distribuyen predominantemente entre los actores Gobierno, Víctimas, Guerrilla y Comunidad Internacional, pues sólo entre los cuatro suman el 82% del total de menciones explícitas de mensajes tipo 1. En segundo lugar, llama la atención la igualdad en porcentajes en los actores que ocupan el primer y segundo puesto. Esto es, los actores Gobierno y Víctimas cuentan con el mismo número de menciones; cada uno tiene el 25% y entre los dos suman la mitad de alusiones explícitas de mensajes tipo 1 durante el periodo de estudio. Por su parte,

la Guerrilla y la Comunidad Internacional también tienen por igual 7 menciones que equivalen a que cada uno esté presente con un 16% en la construcción de mensajes tipo 1.

Los mensajes tipo 2 (violencia y conflicto) presentan con mayor preponderancia al actor Gobierno con 14 menciones, que equivalen a un 42% respecto al número total de alusiones. Le siguen la Comunidad Internacional con apenas 6 menciones que representan un 18% y las Fuerzas Militares con 5 menciones, es decir el 15%. Sorprende en un principio que el número de mensajes tipo 2 para la guerrilla sean sólo tres con un 9% y para las Bacrim 4 menciones, esto es un 12%. Sin embargo, la explicación podría residir en que El Tiempo no hace llamados a las Farc y a las Bacrim a la consecución de actos violentos, en la medida en que es su naturaleza. En cambio, le otorga esa responsabilidad al Gobierno con el fin de que prevalezca el orden social, todo dentro de un aire de oficialismo. En esta tarea, por supuesto, el Gobierno se vale de las Fuerzas Militares y de la Comunidad Internacional, por eso suma con ellas el 75% de los mensajes tipo 2. Hay que decir que el actor Víctimas, a diferencia de su relevante presencia en los mensajes tipo 1, en las alusiones a violencia y conflicto obtuvo un 3%, posiblemente por ser ellas quienes tienen que ser resarcidas.

Según la relación numérica establecida entre los tipos de mensaje y los actores, el Gobierno es el actor con mayor número de menciones totales (tipo 1 y tipo 2) con un 32%. Le sigue la Comunidad Internacional con un 17% y muy cerca las Víctimas con un 16%. En esta sumatoria de mensajes tipo 1 y tipo 2 el actor Guerrilla es relacionado en un 13% del total de alusiones, las Bacrim con un 5% y los paramilitares con un 3%, frente a un 17% de las Fuerzas Militares y un 3% de la Corte Suprema, estos últimos actores encargados de combatirlos y ajusticiarlos.

Así las cosas, los actores Gobierno, Comunidad Internacional, Fuerzas Militares y Corte Suprema suman entre ellos el 64% de alusiones frente a un 21% conformado por las alusiones a los actores Guerrilla, Bacrim y paramilitares. Es

posible inferir, entonces, que los mensajes tipo 2 son mayormente relacionados con actores oficiales encargados de velar, desde el *statu quo*, por la seguridad de los ciudadanos.

El análisis predicativo, que fue el paso a seguir en el objetivo de construir los programas narrativos para cada uno de los tipos de mensaje, evidencia el tratamiento dado por las editoriales de El Tiempo a cada uno de los actores según sus funciones, calificaciones y los usos simbólicos¹⁹⁰ del lenguaje que los relacionan. Así las cosas, de acuerdo a los mensajes tipo 1 el Gobierno es presentado como el actor que debe “impulsar la ratificación de los acuerdos de paz”, al tiempo que “protege a las víctimas del conflicto armado” y “previene los delitos de lesa humanidad”. El Gobierno debe “agilizar la restitución activa de tierras” y en ese sentido “está en mora de diseñar una estrategia integral”. En lo simbólico, El Tiempo llama la atención sobre la Ley de Justicia y Paz que debe ser defendida porque “una tarea incompleta, por más huecos que tenga, no es sinónimo de una tarea fallida.”

La Guerrilla debe “respetar” la vida y entender que “sus armas no pueden dañar más futuros ni los deseos de querer vivir en paz” porque “los tiempos en que las masacres y atentados se confundían con las luchas de liberación nacional ya pasaron”. Por eso la necesidad de iniciar “un proceso de paz que los lleve a la desmovilización”.

Las autodefensas, por otro lado, deben “desmovilizar sus estructuras”, “decir la verdad” sobre sus crímenes, garantizar la “no repetición de las atrocidades” y denunciar “vínculos con otros sectores de la sociedad”. Añade El Tiempo que los procesos de la “paraeconomía” no pueden detenerse y “las autoridades deben contar con el total apoyo de la sociedad para que esta olla se destape.”

¹⁹⁰ El aparte referente a la simbología fue incluido en el análisis predicativo porque no hace parte del modelo de análisis del discurso planteado inicialmente por A. J. Greimas. Por ser el lenguaje y los símbolos determinantes en la construcción de representaciones sociales, la simbología con relación a cada uno de los actores cobra validez.

Frente a las Bacrim no se destacan funciones explícitas pero sí deja claro que “no son paramilitares” y que “no cuentan con ninguna motivación política” “ni siquiera con la excusa de la lucha contra la subversión”. Ante este panorama las Fuerzas Armadas deben “garantizar el respeto por los Derechos Humanos”, “apoyar” a los colombianos y protegerlos “del secuestro por parte de grupos armados ilegales”.

De otro lado, las Víctimas “rechazan el rescate militar de secuestrados” y demandan “el intercambio humanitario”. Las víctimas son calificadas como “tenaces”, “valientes” y “admirables”, no son “animales” ni “mercancía para intercambiar”.

Por último, la Corte Suprema de Justicia “protege los derechos de las víctimas evitando la extradición de comandantes militares”. La Comunidad Internacional deben garantizar un proceso de “intercambio humanitario, siendo garantes”. “La mediación de un tercero, en este caso Brasil, genera las garantías y confianza suficientes para destrabar los nudos gordianos.”

A través del análisis predicativo de los mensajes tipo 1 es posible inferir que la mayor relación con el Gobierno, a través de sus calificaciones y funciones, responde a las múltiples responsabilidades que El Tiempo le adjudica por ser, en el conjunto de actores, el garante de la seguridad en un contexto de aguerrida y frontal lucha contra las guerrillas, especialmente hacia los “terroristas” de las Farc. Llama la atención que no existe ni una calificación y función dada a las Bacrim con relación a los mensajes tipo 1. Esto puede ser resultado del rechazo tajante que manifiesta El Tiempo hacia este nuevo “narcoparamilitarismo”.

Ahora bien, el análisis predicativo según los mensajes tipo 2 considera al Gobierno como responsable de dar continuidad a la política de Seguridad Democrática para permitir “mantener las conquistas de los últimos 8 años”. Con este fin enfatiza en “repeler” a los grupos violentos, “rescatar militarmente” a los secuestrados y “castigar” los actos de la Guerrilla. Al Gobierno no debe “temblarle la mano”, no puede “dar marcha atrás” porque la violencia en las capitales se ha convertido en

“un talón de Aquiles”. Hay que “cerrar con broche de oro un legado que, desde ya, puede ser considerado como histórico.”

La Guerrilla, por su parte, son “brutales”, “peligrosas”, “repudiables”, “descaradas”, son las únicas responsables del bienestar, “la libertad y la seguridad de los policías y soldados en su poder”. Para El Tiempo la Guerrilla, aunque “está mermada por muertes, capturas y golpes a su estructura” atacan “con ventaja y a mansalva” y generan “temor en la población civil”. Su “ceguera es patética” por eso comenten actos de barbarie dignos del “más severo de los castigos”.

Las Autodefensas, hay que resaltar, no presentan ninguna calificación o función relacionada a los mensajes tipo 2. Esto fue evidente igualmente en el análisis cuantitativo.

Las Bacrim son “bandas narcoparamilitares de nueva generación”, “delincuentes”, “narcotraficantes” y “extorsionistas”, no cuentan con “motivación política” pero “están expandiéndose”. Según El Tiempo “la culebra” representada por los “narcoparas” “aunque bastante golpeada, sigue viva. Las negociaciones con estas bandas tienen “problemas en su espíritu, pues no se dan con organizaciones políticas”. Las Fuerzas Armadas tienen el objetivo de golpear contundentemente a la Guerrilla y a las Bacrim, dar de baja a cabecillas guerrilleros, responder “rápida y contundentemente a las salvajadas de la Guerrilla”, perseguir “sistemáticamente a los culpables de violaciones de derechos humanos” y “rescatar militarmente a los secuestrados.” Afirma El Tiempo que tanto el Ejército como la Policía realizan una “labor titánica”.

Las Víctimas, por su parte, son “muertos en vida” que deben repudiar “la violación sistemática a los derechos humanos”. Son calificados, además, como “peones en el ajedrez” del Gobierno y la Guerrilla y muchos están “pudriéndose” en la selva.

La Corte Suprema de Justicia se ha “endurecido” y “no debe desacarrilar la extradición”. La Comunidad Internacional, por su parte, debe “condenar duramente a las Farc”, “cooperar con operativos conjuntos en las fronteras”, aunque se manifiesta que “permite la presencia en Venezuela de cabecillas de grupos guerrilleros”, lo que ha hecho que este país se convierta en la “sede de la retaguardia” de los jefes guerrilleros.

En el análisis predicativo para los mensajes tipo 2 (violencia y conflicto) el Gobierno vuelve a ser protagonista por la cantidad de calificaciones y funciones adjudicadas, pero a diferencia del análisis predicativo de los mensajes tipo 1, esta vez su presencia es mayor a través de la simbología, esto es, los mensajes implícitos tipo 2. Esta misma tendencia existe para la Guerrilla, a este actor El Tiempo lo describe –en su mayoría– a través de fuertes calificaciones que tácitamente manifiestan el rechazo del medio de comunicación. Llama la atención que las autodefensas no cuenten con ninguna función o calificación respecto a los mensajes alusivos a la violencia y el conflicto, lo que podría deberse al respaldo evidente de El Tiempo hacia la Ley de Justicia y Paz a través de la cual se desmovilizaron sus combatientes.

El panorama presentado por el análisis cuantitativo, aunque supuso una guía para la construcción de los programas narrativos tipo 1 y tipo 2, no coincidió con lo que se creía era una predicción. Una vez reconstruido el discurso de las editoriales del periódico El Tiempo para cada uno de los tipos de mensaje, se da cuenta de un tratamiento oficialista del lenguaje que revela a un medio de comunicación defensor a ultranza del *statu quo*, y en esa medida capaz de legitimar –a través de sus editoriales– la aplicación de la fuerza si es necesaria en la búsqueda de la paz. Las representaciones sociales que construyó El Tiempo durante el periodo de estudio y que fueron halladas y relacionadas en el programa narrativo, evidencian que el manejo implícito del lenguaje es definitivo para dilucidar la inclinación de un diario hacia una u otra orilla. Esto es, no basta con una interpretación numérica, en tanto el manejo simbólico puede cobrar mayor

importancia en la construcción de sentidos. Ese fue el caso en el estudio de las editoriales del diario El Tiempo.

En uno de sus principios rectores El Tiempo dice que “favorece todos los esfuerzos que se realicen en pro de la paz nacional e internacional y rechaza cualquier movimiento que invoque o ejercite la violencia o las vías de hecho para la consecución de sus fines.”¹⁹¹ Los resultados del análisis cuantitativo y el programa narrativo de uno y otro tipo evidencian que existe una inclinación a respaldar acciones violentas, siempre y cuando conserven su matiz de defensa a las instituciones y de respeto por los derechos humanos. Así se explican configuraciones del lenguaje como “no puede temblar la mano” porque hay que imponer “medidas de choque”, teniendo en cuenta que padecemos “actos de barbarie dignos del más severo de los castigos.” “La culebra sigue poniendo huevos malditos. Hay que quitarle el veneno, pero el sólo camino de la represión no es suficiente.” Hay que “cerrar con broche de oro un legado que, desde ya, puede ser considerado como histórico.” Las anteriores son frases cargadas de la simbología¹⁹² propia de la guerra psicológica que tiene por objetivo reducir al “enemigo” hasta adoptarlo como un animal. Esto refleja el carácter guerrillista de El Tiempo y su inclinación a combatir el mal con la fuerza.

Obsérvense ahora las construcciones del lenguaje de las editoriales de El Tiempo respecto a las Farc. No dan lugar a vacilaciones y permiten inferir el carácter radical del medio de comunicación. Esta Guerrilla “ataca con ventaja y a mansalva”, “cree” en la violencia como solución, “sacrifica” por igual al enemigo y al inocente, todo porque “su ceguera es patética” y se caracteriza por el “ensimismamiento y la enajenación de la realidad”. En el lenguaje utilizado son evidentes usos radicales de las palabras y de las unidades verbales, lo que sirve de punta de lanza para la proyección e inclinación hacia representaciones sociales

¹⁹¹ EL TIEMPO. Manual de Redacción. Bogotá, 2000.

¹⁹² El análisis predicativo, en su sección referente a los símbolos, deja ver una mayor cantidad de este tipo de usos del lenguaje en los actores Gobierno y Guerrilla respecto al análisis de los mensajes tipo 2 (violencia y conflicto)

que justifican un acto violento como medio para la consecución de la paz. Bien dice Jorge Iván Bonilla que el nuestro es un conflicto “representado mediante el uso social del lenguaje, es decir, es identificado, verbalizado, codificado, narrado e interiorizado por múltiples actores sociales.”¹⁹³ La representación social del conflicto y la reconciliación que construye el diario El Tiempo es única, en la medida en que es un discurso “verbalizado” y calificado con fuertes adjetivaciones que legitiman y justifican actuar con ímpetu desde el Estado para el logro de la paz.

Es definitivo que en un ambiente polarizado como el nuestro, la representación social de la violencia que construye El Tiempo no contribuye a la distensión del mismo. Durante el periodo agosto 2009- julio 2010 los usos del lenguaje de El Tiempo propendieron por la construcción de un consenso social de los usos de una violencia que se justifica en el actor Gobierno, y esto no es otra cosa que la justificación moral de la guerra psicológica. “Los rivales se contemplan en un espejo ético, que invierte las mismas características y las mismas valoraciones, hasta el punto de que lo que se les reprocha a ellos (las Farc) como defecto se alaba en nosotros como virtud.”¹⁹⁴ Así las cosas, durante el periodo de estudio las editoriales de El Tiempo legitiman los principios de la guerra psicológica que utiliza “dispositivos de poder mediante los cuales se pretende naturalizar y justificar el uso de la fuerza y los recursos del Estado para eliminar física o simbólicamente a aquellas personas y organizaciones, señaladas como potencialmente enemigas del “desorden” social establecido.”¹⁹⁵

Retomando la pregunta de investigación de este trabajo de grado: ¿Las representaciones sociales proyectadas por las editoriales del periódico El Tiempo están más asociadas al perdón y la reconciliación o al conflicto y la violencia? Es

¹⁹³ BONILLA, Jorge, GARCIA, María. *Los Discursos del Conflicto. Espacio Público, Paros Cívicos y Prensa en Colombia*. Pontificia Universidad Javeriana, 1998. Primera Edición. p. 12

¹⁹⁴ BARRERO, Edgar. *De Macondo a mancuso. Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Una aproximación desde la psicología social crítica*. Ediciones Cátedra Libre. Bogotá, 2008. Segunda edición. p. 83.

¹⁹⁵ Ibid. p. 33.

posible afirmar que el diario más leído de Colombia, aunque reconoce la necesidad de paz¹⁹⁶, legitima el uso de la violencia por parte del Estado, contribuyendo así a la reproducción del círculo vicioso del conflicto y al abandono de las posibilidades de construir el círculo virtuoso de la reconciliación. Ante este “nuevo mundo” que crea El Tiempo la salida más segura será, entonces, la construcción de formas de resistir el fenómeno de la guerra desde la misma sociedad.

¹⁹⁶ El Tiempo deja en manos de las Farc la búsqueda de la paz mediante mensajes tipo 1: “sus armas no pueden dañar mas futuros ni los deseos de querer vivir en paz”, ellos deben reconocer “la pérdida del sentido histórico de la lucha arma y su imposibilidad de éxito” porque “la paz negociada es el mejor camino”. Aún con este tipo de representaciones sociales, ante el accionar violento de las Farc, El Tiempo incrementa los usos del lenguaje encaminados a construir una predisposición social que apruebe la violencia desde el Estado, como fuente de control frente a los “actos atroces” perpetrados por la Guerrilla.

6 REFERENCIAS

BARRERO, Edgar. De Macondo a mancusu. Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Una aproximación desde la psicología social crítica. Ediciones Cátedra Libre. Bogotá, 2008. Segunda edición.

BONILLA, Jorge. Violencia, medios y comunicación. Otras pistas en la investigación. Editorial Trillas, 1995.

BONILLA, Jorge, GARCIA, María. *Los Discursos del Conflicto. Espacio Público, Paros Cívicos y Prensa en Colombia*. Pontificia Universidad Javeriana, 1998. Primera Edición.

EL TIEMPO, Manual de Redacción. Principios de El Tiempo. Bogotá, 2000

FOUCAULT, Michael. *El sujeto y el poder*. Carpe diem ediciones, 1991.

FRANCO, Laura Liliana. *Lo que el periódico El Tiempo construyó de los actores del conflicto interno colombiano*. Bogotá, D.C. Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política, 2001.

MARTIN – BARÓ, Ignacio. *Psicología social de la guerra*. Uca Editores. San Salvador, 1992.

MURRAY, Edelman. *La construcción del Espectáculo político*. Ediciones Manantial, 1991.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Edición. <http://www.rae.es/rae.html>

RIVERA, María Juliana. *Las Representaciones de los Actores del Conflicto Armado Colombiano a través de los Editoriales del Periódico El Tiempo*. Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política, 2007.

7 ANEXOS

7.1 Editoriales

Título: **50 años matando**

Palabras Clave:

EDITORIAL;ETA;TERRORISMO

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-18**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **01/08/2009**

Pagina: **18**

Lead: **La banda terrorista vasca, conocida como Eta (Euskadi Ta Askatasuna o País Vasco y Libertad), acaba de “celebrar” sus bodas de oro de la única manera como sabe hacerlo: matando.**

Texto:

Sus últimas víctimas son dos guardias civiles de Mallorca, isla que reviste especial simbolismo porque allí pasan la temporada de descanso los reyes de España. Un día antes, y como parte de los “festejos”, otro atentado estuvo a punto de provocar una matanza en Burgos.

Al final, se registraron 62 heridos. En comunicado posterior al asesinato, la banda anuncia que seguirá combatiendo y que “la Historia llenará de honor esta lucha”.

El extenso prontuario de esa “lucha” alcanza más de 800 asesinatos, que empezaron en junio de 1968 y no han respetado pocos rincones de la geografía española y el sur de Francia. Cuarteles, supermercados, residencias particulares, universidades, cafeterías, aeropuertos, carreteras, villas despobladas y calles concurridas han sido escenarios donde Eta ha ejercido su terco terrorismo. En 1973, en su más audaz operación, voló en átomos el carro donde viajaba el probable sucesor del dictador Francisco Franco, el almirante Luis Carrero Blanco, y causó la muerte al poderoso militar y dos acompañantes. En otros episodios, varios terroristas de Eta han muerto en estallidos prematuros por explosivos mal manejados por ellos mismos.

Medio siglo después de su sangriento debut, Eta no está, como dice el comunicado, en “la última cuesta” hacia el triunfo, sino todo lo contrario: cada vez más aislada, más repudiada y más cercada por las autoridades, que en los meses recientes han atrapado a varios miembros de su cúpula. Durante este lapso, han hecho la paz o entregado las armas otras agrupaciones nacionalistas, como la catalana Terra Llure y el Ejército Republicano Irlandés (Ira). Mientras tanto, Eta se halla cada vez más sola y ha logrado unir en el País Vasco en contra suya a los dos grandes partidos antagónicos de España, el Socialista y el Popular.

Su ceguera es patética, pero responde al síndrome general de las bandas terroristas, que se caracterizan por el ensimismamiento y la enajenación de la realidad: a fuerza de vivir perseguidas e intoxicadas por una ideología indiscutible, terminan por ignorar el contexto en que viven y se convencen a sí mismas de las más improbables metas. Ni siquiera cuando están al borde de la liquidación dejan de creer en que falta poco para vencer.

Eta también revela los demás cromosomas del grupo terrorista, y en esto se parece a los grupos armados colombianos. Ataca con ventaja y a mansalva; cree en la violencia como solución de todo problema; sacrifica por igual al “enemigo” y a gente inocente, y desata fuerzas simétricas igualmente brutales en la orilla opuesta. Las Farc y el ELN propiciaron el surgimiento de los paramilitares, y Eta, el de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), una agrupación parapolicial que entre 1983 y 1988 llevó a cabo 23 asesinatos.

Lo más paradójico es que pretende representar a los vascos españoles y franceses, que en múltiples ocasiones han expresado con populosas manifestaciones callejeras su rechazo a la violencia. No se diferencia mucho de las Farc –con la cual ha tenido vínculos–, que concita la antipatía del 98 por ciento de los colombianos. Algunos partidos más o menos independentistas han jugado al tire y afloje con Eta, circunstancia por la que acabaron pagando un alto precio político o judicial. Medio siglo después de su nacimiento, la banda terrorista sigue siendo refugio de unos cuantos fanáticos capaces de aumentar la larga cuenta de asesinatos, pero que en ningún caso constituyen la vocería de la sociedad vasca ni expresan en absoluto sus sentimientos democráticos.

La banda terrorista Eta llega al medio siglo como el refugio de unos cuantos fanáticos y sin ninguna vocería de la sociedad vasca.

Titulo: **Soluciones con cuentagotas**

Palabras Clave:

**BOGOTÁ;DESPLAZADOS;EDITORIAL;PARQUE
TERCER MILENIO**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-12**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **03/08/2009**

Pagina: **12**

Lead: Ayer, en medio de serias dificultades, empezó el desalojo voluntario de los 2.000 desplazados que ocuparon por más de cuatro meses el parque Tercer Milenio en el centro de Bogotá. Tras firmar un pacto con el Gobierno Nacional y la Alcaldía capitalina, las 1.152 familias recibirán en promedio un millón de pesos y apoyo para proyectos productivos por cinco millones de pesos.

Texto:

Anoche continuaba el proceso para poner fin a una larga toma en la que una menor fue violada y, ante las precarias condiciones sanitarias, rondó por semanas el temor de una propagación masiva de la gripa AH1N1. Pero, aunque la situación de estos desplazados tuvo una salida temporal pacífica, la ocupación del Tercer Milenio resume los inmensos desafíos, los choques institucionales y las serias limitaciones de la política nacional para enfrentar el desplazamiento.

Por meses, la Alcaldía de Bogotá y Acción Social debatieron públicamente sobre las responsabilidades en la solución de la toma del parque. En medio de la ocupación se llevó a cabo la audiencia en la Corte Constitucional para evaluar el cumplimiento de la sentencia T-025 del 2004, con resultados mediocres para el Gobierno central. Mientras tanto, según datos de la Administración Distrital, llegan a las calles de la capital 52 familias diariamente.

Además, la Secretaría de Gobierno de la ciudad denunció que la única ayuda “humanitaria” que muchos desplazados reciben de alcaldes y gobernadores del resto del país es el pasaje para trasladarse a Bogotá. Este ‘fleteo’ debe ser identificado públicamente y detenido cuanto antes. Por más disposición y recursos que la capital destine para atender a estas víctimas, la responsabilidad debe ser compartida.

No hay gestión eficiente ni tributación suficiente para que la Alcaldía de Bogotá resuelva sola esta problemática. Ante el pacto en el Tercer Milenio, otros grupos de desplazados estarán tentados a seguir invadiendo parques y

plazas bogotanas para presionar soluciones particulares. No le puede temblar la mano a las autoridades distritales para impedir, así sea con medidas de choque, la proliferación de tomas. Por otra parte, el Gobierno Nacional sigue en mora de articular una respuesta integral, y no con cuentagotas, a esta tragedia humanitaria.
editorial@eltiempo.com.co

Titulo: **La casa en orden**

Palabras Clave: **EDITORIAL;CASA DE NARIÑO**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-12**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **03/08/2009**

Pagina: **12**

Lead: Si el sombrío futuro que hoy le vaticinan al referendo reeleccionista se vuelve realidad, dentro de un año el presidente Álvaro Uribe estará empacando maletas para dejar la Casa de Nariño. Este viernes 7 de agosto comienza la cuenta regresiva de los últimos 12 meses del segundo mandato del actual Jefe del Estado. Más allá del destino final de la consulta popular, la administración Uribe tiene poco más de 365 días para atar cabos sueltos y cimentar el legado de la gestión. En otras palabras, dejar la casa en orden.

Texto:

La agenda del último año de Gobierno pasa por el tema económico. Aunque el Banco de la República afirmó la semana pasada que “posiblemente lo peor de la crisis ya pasó”, el crecimiento proyectado para el 2009 es del cero por ciento –el cuarto más bajo en la historia del país–. Ante la caída de los recaudos tributarios, las exportaciones y las remesas, el frente fiscal se cierne como una de las preocupaciones más urgentes. Por tal razón, independientemente de sus limitaciones, el proyecto de reforma tributaria que empezará trámite en el Congreso constituye un pulso imprescindible para el Gobierno.

Pulso que se llevará a cabo en el peor de los escenarios en materia legislativa que la era Uribe haya enfrentado. Las fracturas de la coalición mayoritaria debilitan el margen de manejo del Ejecutivo y la incertidumbre que hoy genera el referendo reeleccionista se extiende inexorablemente a los planes de campaña para el año electoral. Ante el eventual hundimiento del referendo, la Casa de Nariño tendrá que asumir la responsabilidad política tanto de mantener la cohesión del uribismo de cara a las elecciones del 2010 como de determinar las reglas de juego para la escogencia de un sucesor. Todo esto en medio de una gobernabilidad tensionada y de los obvios ataques de una oposición en plena campaña presidencial.

Si la política doméstica es un difícil reto en esta última etapa, la internacional se perfila como otro desafío ante los actuales choques con los países vecinos. Aún resta una gran dosis de energía, diplomacia y manejo

político para superar las más recientes crisis con Hugo Chávez y Rafael Correa, así como el recelo regional que ha generado el acuerdo de las bases militares. A esto se le añaden los desesperados intentos de impulsar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que, si no recibe un salvamento de urgencia, podría convertirse en la frustración más grande de la política exterior del segundo mandato.

El Gobierno, asimismo, está sometido a una carrera contrarreloj para pulir su ejecución en materia social. Consistentemente en sus siete años de mandato, este ha sido un flanco débil en la evaluación de la gestión en las distintas encuestas. Con la tasa de desempleo al alza, los desplazados llegando a las ciudades y revisiones pendientes del sistema de salud, es poco probable que, en un plazo tan corto, se logren grandes avances. La imagen de una administración volcada en la seguridad y en la inversión y con la política social en segundo plano será muy difícil de transformar en un año.

Incluso en la seguridad democrática –el indiscutible legado transformador de la era Uribe–, el Gobierno tiene asuntos por finiquitar. Mientras las bandas de narcoparamilitares de nueva generación siguen su accionar, las Farc, recientemente, han empezado a golpear de nuevo. Estos no son todos los temas de la agenda que el Ejecutivo debe desplegar en su última etapa de mandato. Con mayor razón, la definición del referendo es perentoria, ya que, con la posibilidad de un tercer período abierta, la atención y las energías de la Casa de Nariño no podrán concentrarse en cerrar con broche de oro un legado que, desde ya, puede ser considerado como histórico.

Titulo: **Relevo crucial**

Palabras Clave: **EDITORIAL;FISCAL
GENERAL DE LA NACIÓN**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-12**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **04/08/2009**

Pagina: **12**

Lead: Con más expectativa de la que normalmente tienen los cambios en las altas posiciones, Mario Iguarán acaba de dejar el cargo de Fiscal General de la Nación. En vísperas de retirarse, el ahora ex jefe del ente acusador dictó órdenes de detención contra el antiguo subdirector, directores de inteligencia y otros funcionarios del DAS –diez en total–, mientras culmina la investigación sobre sus supuestas participaciones en el escándalo de ‘chuzadas’ telefónicas ilegales. Un final que da la medida de la complejidad de un cuatrienio en el que han abundado los temas que afectan a miembros del Gobierno.

Texto:

La independencia de los fallos frente al Ejecutivo se convirtió en el principal parámetro de evaluación del trabajo de Mario Iguarán, el ex viceministro de Justicia de la primera administración de Álvaro Uribe que se constituyó en el investigador de la ‘Yidispolítica’, la ‘parapolítica’ y el DAS, que cayeron muy cerca de los predios de la Casa de Nariño. Y la verdad es que el balance fue positivo. Mientras la oposición le señala no haber llegado más lejos en casos emblemáticos, como el del primo del Presidente el ex senador Mario Uribe, en el Gobierno se ganó la imagen de que cedía con facilidad a las presiones de los medios.

La contradictoria insatisfacción en ambos lados significa que el antiguo funcionario de la cartera del Interior no se inclinó hacia alguna causa política y no dio pie para que se confirmara la sospecha de que actuaría como un fiscal de bolsillo del mandatario que había sido su jefe. Bajo la tutela de Iguarán se llevó a cabo el complejo proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Controvertido, por lo que significó como impopular transacción con las Auc, pero defendible porque permitió llevar a la cárcel a los poderosos jefes paramilitares, la mayoría extraditados a Estados Unidos. Y porque dejó en marcha, aunque con demoras excesivas y contraproducentes, la definición de la situación legal de las bases combatientes de los grupos paramilitares. No menos trascendental, en materia

de derechos humanos, fue la detención de cerca de 500 oficiales y suboficiales por denuncias de los 'falsos positivos'.

La Fiscalía de los últimos cuatro años desempolvó importantes archivos que se habían dormido en los anaqueles. En particular, el del asesinato de Luis Carlos Galán y el del Palacio de Justicia. También hubo investigaciones sobre desapariciones acumuladas durante dos décadas de conflicto. La gestión de Iguarán fue polémica, sobre todo, por razones de forma. Una evidente inclinación a quedar bien y el escándalo del 'brujo' Armando Martí, el folclórico personaje que gozó de una inexplicable cercanía con el despacho del jefe del ente investigador.

La sucesión del Fiscal saliente está rodeada ahora de enormes expectativas. Deberá cerrar precisamente los casos donde los colaboradores del Gobierno están involucrados: la 'Yidispolítica', la 'parapolítica' y las 'chuzadas' ilegales del DAS. La selección tiene como telón de fondo la guerra fría inocultable entre el Poder Ejecutivo (que elaboró la terna de candidatos) y la Corte Suprema, que debe escoger a uno de los nominados. Los tres nombres tienen problemas. El de Virginia Uribe, por su bajo perfil. El de Camilo Ospina, por su abierta militancia en el uribismo. El de Juan Ángel Palacio, por incómodas investigaciones y conversaciones telefónicas que son indicios de un posible soborno y maniobras nada apropiadas para un futuro Fiscal General. El Presidente mandó una terna que posee más la intención de acorralar a la Corte que de contribuir a la elección de la mejor opción posible. Y los magistrados tienen la misión imposible de sacar, de una baraja que deja mucho que desear, una persona que garantice rectitud, independencia y eficacia en un cargo fundamental en Colombia.

Mario Iguarán fue más independiente de lo que se esperaba y ahora el problema es la elección de un buen sucesor a partir de una terna mala.

Titulo: **El plazo se venció**

Palabras Clave: **EDITORIAL;TRATADO DE ROMA**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-16**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **05/08/2009**

Pagina: **16**

Lead: Hoy se cumple un aniversario más de la fecha en que Colombia ratificó su adhesión al Tratado de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI). Ese 5 de agosto del 2002 el Gobierno saliente de Andrés Pastrana –en acuerdo con el entrante de Álvaro Uribe– introdujo una salvaguarda de siete años por la cual el tribunal internacional sólo podría investigar crímenes de guerra perpetrados después de ese período.

Texto:

La idea detrás de esta decisión radicaba en que los grupos armados ilegales contaran con la posibilidad de desarrollar un proceso de paz con el Estado colombiano sin el temor de eventuales requerimientos de la justicia penal internacional. Para sus promotores, la salvaguarda constituía un prerequisite indispensable de las conversaciones de paz que se llevaran a cabo durante el primer mandato de Uribe. Sin embargo, ese “período de gracia” –calificado por sus críticos hace siete años como una licencia para la impunidad– ya se venció sin que los grupos guerrilleros entraran en ningún tipo de desmovilización, entrega de armas o proceso de diálogo. Los que sí negociaron durante ese tiempo fueron los líderes y bases combatientes de las Autodefensas bajo la Ley de Justicia y Paz. El vencimiento de este plazo le abre las puertas en el país a la totalidad de los instrumentos de la CPI. El Estatuto de Roma contempla que este tribunal internacional se encargue de determinar las responsabilidades penales de individuos que cometan crímenes graves contra los Derechos Humanos: de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Dentro de ellos se cuentan horrendas actividades que tristemente y desde hace tiempo forman parte de la cotidianidad de nuestro conflicto interno, como el reclutamiento de menores, ataques indiscriminados a la población civil, exterminio, uso de armas prohibidas, como minas; prostitución forzada, privación de la libertad y persecución de un grupo étnico, entre otros. Además, la Corte Penal refuerza la jurisdicción universal: no tendrá limitaciones geográficas ni cronológicas y podrá juzgar a un criminal de guerra en cualquier parte del planeta. No obstante, debe respetar el

principio de subsidiariedad: no remplazará a la justicia nacional, que tendrá primacía al juzgar este tipo de delitos. Solo cuando La Haya considere que los tribunales nacionales se han abstenido de procesar estos casos –es decir, que ha habido impunidad– o sean incapaces, comenzará a operar este mecanismo.

Sin lugar a dudas, la entrada en vigencia de la jurisdicción penal internacional en pleno introduce nuevos retos para las dinámicas del conflicto interno en Colombia. Al tiempo que se abre una herramienta adicional para evitar la impunidad e impartir justicia, podría dificultar el margen de maniobra del Gobierno para negociar la paz con los alzados en armas. La experiencia con los paramilitares le ha demostrado al país el delicado y frágil balance entre los sacrificios que demanda la desmovilización y los castigos para los criminales de guerra que la sociedad exige. En especial, cuando los procesos de paz no se dan como resultado de la superioridad militar de una de las partes. En este escenario, cobra nueva vigencia la discusión sobre el escaso incentivo que para la cúpula guerrillera implica un diálogo de desmovilización que incluya inevitablemente un tiempo en prisión por los graves delitos cometidos. ¿Entenderán las Farc y el ELN las dimensiones y consecuencias de esta oportunidad perdida? La salvaguarda de la CPI fue una puerta para la paz que el Estado dejó abierta estos siete años y que poco les importó a los jefes guerrilleros. Sin la potencial ‘zanahoria’ de unos acuerdos generosos, sin prisión y con reconocimiento político, la vía de la paz por medio del diálogo y la negociación sufre un fuerte golpe.

La salvaguarda de siete años para la Corte Penal Internacional fue una puerta para la paz que los jefes guerrilleros dejaron cerrar.

Titulo: **¿Pobres viejecitas?**

Palabras Clave: **EDITORIAL;CONVENCIONES DE GINEBRA**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-12**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **17/08/2009**

Pagina: **12**

Lead: **¿Cómo celebrar el cumpleaños de cuatro viejecitas irrespetadas y desconocidas por casi todos los que deberían estar a sus pies? ¿Habrá que proclamar su inutilidad ante lo mucho que ha cambiado el mundo desde que nacieron, o celebrar que, pese a todo, hayan alcanzado la tercera edad? Estas son preguntas a raíz de la ceremonia que el pasado miércoles, en la ciudad suiza que lleva su nombre, conmemoró los 60 años de las cuatro Convenciones de Ginebra, que regulan el derecho internacional humanitario (DIH).**

Texto:

Es un hecho que las convenciones (sobre la protección, en situaciones de guerra, de combatientes heridos y enfermos en tierra y en el mar, de prisioneros de guerra y de civiles) se crearon en un mundo en el cual las guerras eran entre Estados y sus Ejércitos. Hoy lo que hay son conflictos internos y la proporción de víctimas civiles, que era de una por cada diez militares en la I Guerra, es exactamente inversa. Y es un hecho que, aunque 194 países las suscriben, pocos las observan. Ni grupos armados irregulares, como las Farc o Al Qaeda; ni Gobiernos, como Israel cuando atacó a Gaza, o Estados Unidos, con Guantánamo, ni la mayor parte de las fuerzas en conflicto que, del Congo a Colombia, ocasionan violaciones masivas y sistemáticas contra el DIH.

Un reciente estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja en ocho naciones en conflicto armado (Colombia entre ellas) mostró que solo la mitad de la gente entrevistada sabe de las Convenciones, y 44 por ciento cree que no ayudan a limitar el sufrimiento de civiles en las guerras (en Colombia solo 38 por ciento conoce los convenios). ¿Son, entonces, inútiles y habría que cambiarlas?

Que la humanidad no se haya podido poner de acuerdo para prohibir la guerra y tienda a incumplir las pocas reglas de juego que ha consensuado para librarla, no significa que el remedio sea tirar por la borda esos acuerdos mínimos. Que desplazar civiles, usar armas prohibidas, cometer genocidio o torturar prisioneros sean crímenes universalmente definidos es un gran

avance. Si bien las Convenciones no han tenido ‘dientes’, los tribunales internacionales de la ex Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona, y la Corte Penal Internacional pueden ser el comienzo de un sistema que, por fin, logre imponer el DIH a quienes lo irrespetan impunemente. En su sexagésimo aniversario, las cuatro Convenciones de Ginebra constituyen un consenso básico a partir del cual solo se debería avanzar hacia prohibiciones y castigos mucho más estrictos.
editorial@eltiempo.com.co

Titulo: **Próxima generación**

Last publication info

Palabras Clave:

COLOMBIA;EDITORIAL;GRUPOS ILEGALES

Publicacion:

EL TIEMPO

Estado: **Finalizado**

Edicion: **NACIONAL-1**

Longitud: **LARGO**

Seccion: **OPINION**

Pagina de Bogota: **1-18**

Fecha Publicacion: **19/08/2009**

Pagina: **18**

Lead: **La amenaza no es nueva. Desde el 2006, distintos informes de organismos de seguridad del Estado, la OEA, la Defensoría del Pueblo, ONG y reportes de prensa han venido alertando sobre el accionar de nuevos grupos ilegales en el territorio nacional. Surgidas del rearme de algunos desmovilizados, de las unidades paramilitares que no entraron al proceso con el Gobierno y de delincuentes comunes, estas bandas siguen extendiéndose y constituyen uno de los mayores retos a la política de seguridad.**

Texto:

Las ‘bacrim’, como las bautizaron las autoridades, son la nueva generación de un fenómeno que podría incluir hasta 10.000 integrantes. En los últimos años, su crecimiento ha sido constante, por lo que ha disparado las alarmas del aparato estatal. Según la Policía, más de 200 operaciones han golpeado las estructuras de ocho bandas reconocidas. Sin embargo, la Defensoría y la Fundación Nuevo Arco Iris reportan 82 de estas agrupaciones, activas en 141 municipios de 25 departamentos. Las ‘Águilas negras’, por ejemplo –una de las primeras cuadrillas conformadas–, están en las más variadas zonas: Córdoba, los Santanderes, el Magdalena medio, Antioquia, Putumayo, el piedemonte llanero, Nariño, Cauca, el Valle y hasta en barrios populares de Bogotá. También están ‘Los rastrojos’; la estructura militar de ‘Comba’, el heredero del cartel del norte del Valle; el ‘Erpac’, aparato militar de ‘Cuchillo’, otro capo narcoparamilitar; ‘Los paisas’; las ‘Autodefensas gaitanistas de Colombia’ y otros grupos más pequeños. Los vacíos regionales que en términos de control territorial y de narcotráfico dejó la desmovilización de más de 30.000 paramilitares está siendo paulatinamente ocupado por estas organizaciones. Así mismo, la presión que esto genera sobre los desmovilizados para que retomen las armas es un peligro tangible que no se puede ignorar. Además de convertirse en protagonistas de las distintas etapas del tráfico de drogas –incluyendo el expendio en las ‘ollas’ urbanas–, estos grupos

ilegales se lucran de extorsiones y robos de tierras y, con sus ‘oficinas de cobro’, están detrás de una buena parte del incremento de los homicidios en las grandes capitales, ya comentado en estas páginas. ¿Estamos, entonces, ante la repetición de la sangrienta historia del surgimiento y la consolidación de las autodefensas? Un vistazo al mapa de las ‘bacrim’ podría sugerir que, por su distribución geográfica en corredores del narcotráfico, el país ha regresado a un escenario de conflicto similar al de principio de los años 90. Sin embargo, estas bandas no giran en torno a la lucha antsubversiva; al contrario, se han reportado casos de alianzas con bloques guerrilleros para mover la droga. Aunque esto priva de sustento al eventual discurso político que aquellas agrupaciones puedan esgrimir en un futuro, el control territorial que hoy ejercen se está traduciendo en la creación de bases de apoyo en esas regiones y en la persecución de líderes comunitarios, de organizaciones de víctimas y de derechos humanos. No sería la primera vez en el conflicto colombiano que delincuentes y narcotraficantes se arropan con pretensiones políticas y activan redes sociales en busca de negociaciones con el Estado.

A pesar de que las autoridades han dado duros golpes a las ‘bacrim’, su imparable expansión muestra que la lucha contra ellas necesita refuerzos. Puede ser que marcar una línea divisoria entre el paramilitarismo de antes de la desmovilización y este ‘nuevo’ narcotráfico delictivo sirva como discurso para sostener la idea del fin de las autodefensas. Pero, como estrategia de combate, no es bueno ignorar unas peligrosas continuidades militares, organizativas y territoriales que alimentan la supervivencia de la delincuencia. En ese sentido, la culebra, representada por los ‘narcoparas’, aunque bastante golpeada, sigue viva.

Titulo: **Siguen en vilo**

Palabras Clave: **EDITORIAL**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-16**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **01/09/2009**

Pagina: **16**

Texto:

Ayer, la senadora liberal Piedad Córdoba reveló en Bogotá las pruebas de supervivencia de nueve integrantes de la Fuerza Pública secuestrados por las Farc. Los videos de los uniformados –siete de la Policía y dos del Ejército– reactivan en el país la indignación y la impotencia frente a la suerte de los rehenes en manos de la guerrilla. Desde que, a mediados de abril, las Farc anunciaron la liberación unilateral del cabo Pablo Emilio Moncayo, los contactos entre el Gobierno y la cúpula subversiva para materializar la entrega prácticamente no han avanzado. Aunque han pasado cuatro meses de ese anuncio, las perspectivas de la libertad de los 23 soldados y Policías, encerrados de manera inhumana en la selva, son muy sombrías. Estas nuevas pruebas de supervivencia –incluida la del general Luis Mendieta, con casi 11 años de cautiverio– llegan en medio de unas gestiones congeladas, a pesar del esfuerzo de la senadora Córdoba. La guerrilla no ha cumplido con el ofrecimiento de liberar al cabo Moncayo y culpa al Gobierno de impedir el proceso. De acuerdo con recientes declaraciones de ‘Alfonso Cano’, líder máximo del grupo subversivo, dadas a la revista Cambio, las Farc mantienen su postura de que los secuestrados “solo serán liberados mediante un canje”. Por otra parte, la posición del Ejecutivo ante el intercambio tampoco se ha modificado un ápice: solo la liberación sin contraprestación sería aceptable. En la mitad de estos dos discursos se encuentra este contingente de uniformados que están, en palabras del general Mendieta, “muertos en vida en la selva”. La gran mayoría ya han pasado más de una década como rehenes y siguen alejados a la fuerza de sus seres queridos. ¿Hasta cuándo las Farc piensan alargar una de las tragedias humanitarias más indignantes del conflicto colombiano? Es inocultable el tratamiento de peones en el ajedrez entre Gobierno y guerrilla que están sufriendo los secuestrados y sus familias. Su deshumanización es trágica, ya que para las Farc son una mercancía para intercambiar por un ‘canje’, cuya viabilidad política cada día es más lejana. “¿Qué pasa con nosotros? ¿Acaso somos animales?”, le reclama el sargento Arbey Delgado al Estado en su video. Sin embargo, por más impacto que las nuevas pruebas de supervivencia generen en la opinión, no es

factible que se presenten giros en la posición oficial. A pesar de los llamados a que la Casa de Nariño aproveche la oportunidad y tienda puentes con la guerrilla para gestionar futuras liberaciones, el negativo ambiente político parece cerrarle la puerta a cualquier posibilidad de acuerdo. El verdadero drama detrás de este escepticismo es que, mientras las Farc esperan, los días de cautiverio de los soldados y Policías siguen aumentando en medio de la desesperanza y la impotencia. Otro distractor del debate es la propuesta de la senadora Córdoba de una “papeleta por la paz” que se depositaría en los próximos comicios parlamentarios de marzo. Una mayoría de votos por esta papeleta forzaría al Gobierno a sentarse a negociar con todos los grupos al margen de la ley. Ante esta idea de la congresista –de difícil materialización– es necesario diferenciar entre sus loables gestiones por la libertad de los secuestrados y el impulso de su agenda personal. Hay una inmensa brecha política e ideológica entre el deseo colectivo de los colombianos por el fin de la guerra –que se expresaría en las urnas– y la flexibilidad que un Gobierno necesita para impulsar tanto las políticas de paz como las de seguridad. Pero, más allá de ese asunto, es indudable que los videos recibidos le recuerdan al país que la tragedia humanitaria de los secuestrados en poder de las Farc sigue viva y que sobre los hombros de la guerrilla está la responsabilidad ineludible de su bienestar y de su pronta liberación.

Las pruebas de supervivencia de nueve uniformados secuestrados por las Farc le recuerdan al país que esa tragedia humanitaria aún no termina.

Titulo: **Deuda con las víctimas**

Palabras Clave: **EDITORIAL;REPARACIÓN DE VÍCTIMAS**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-16**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **16/09/2009**

Pagina: **16**

Lead: **Se cumplirán dos años, este 27 de septiembre, de la suscripción por parte de Colombia ante la ONU de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada. Sin embargo, no entra en vigor aún, pues el Gobierno colombiano debe presentar un proyecto de ley ante el Congreso para aprobar su plena ratificación.**

Texto:

A pesar de estar presente en más de 80 países del mundo y tener antecedentes en el régimen nazi, la desaparición forzosa ha tenido que soportar un largo y complicado camino para ser considerada un crimen autónomo de lesa humanidad. Camino que parece reproducirse en la realidad colombiana desde que en 1977 se registró el primer caso de este drama. Hoy no se conoce el número exacto de desaparecidos en el país, aunque algunas organizaciones de derechos humanos calculan el total de víctimas entre 15.000 y 50.000. Este atroz crimen no se detiene y ya trasciende generaciones. En sus marchas, los familiares combinan imágenes antiguas de desaparecidos con fotos recientes. Espanta saber que solamente los paramilitares que se han sometido a la Ley de Justicia y paz han confesado 21.000 asesinatos. De ellos se han comprobado 5.808 y la Fiscalía, con todas las dificultades del caso, en julio, solo había podido exhumar e identificar a 2.494. Pero se habla de 26.000. Sin contar los horrores cometidos por las Farc, que tienen en su negro prontuario varias de las más escalofriantes masacres, además de las que siguen cometiendo. O de las víctimas del ELN. A ello, desde luego, hay que agregarles crímenes de Estado, como la vergüenza de los mal llamados 'falsos positivos': las desapariciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, donde se busca esclarecer la muerte de 812 personas, y unos 1.600 militares están siendo investigados, incluidos tres coroneles. Pero ahí no se pueden cerrar las impresionantes cifras. Hay que sumarles las cometidas por bandas de delincuentes comunes. En Bogotá, una tenebrosa manguala venía desapareciendo camioneros, en asocio infame con cuatro Policías activos. Un hecho espeluznante que evidencia hasta dónde han

Ilegado la degradación humana, las ansias de dinero y la sangre fría para quitarles la vida a seres inocentes. Catorce criminales que mataron a 12 trabajadores del volante fueron capturados y se los acusa de 39 asesinatos. Deben recibir la máxima condena.

Todo esto forma parte de un funesto panorama, de una desgracia para cualquier sociedad. Pero no todo está perdido. Tarde, porque la justicia es lenta, pero se despierta la conciencia. Es tiempo de reconocer este drama e impulsar la ratificación del mencionado tratado internacional. Que, en síntesis, exige prevenir las desapariciones, encontrar la verdad, proteger a los testigos, buscar a los desaparecidos, aun sus restos, castigar a los autores y reparar a las víctimas y sus familias. Por esta razón, esta convención se considera una de las que más enérgicamente defienden los derechos humanos.

Septiembre parece traernos buenas voluntades en materia de defensa de las víctimas. Hace pocos días, Chile— nación que sufrió el rigor de la dictadura— aprobó la ratificación. Es de elemental justicia que el Gobierno incluya esta indispensable herramienta en nuestra normatividad.

Es una deuda con los afectados y una luz de esperanza para millares de familias de desaparecidos y un nuevo escudo protector para que nadie sea sometido a tanto dolor. Más que ningún otro país, y más que nunca, Colombia tiene que enviar un mensaje claro de que las víctimas no están olvidadas, de que sus familias podrán hacer el duelo y de que el Estado quiere detener la tragedia y reparar. Más que ningún otro país, Colombia debe ratificar la Convención Internacional para la Protección contra la Desaparición Forzada.

Titulo: **La hora de la diplomacia**

Palabras Clave: **EDITORIAL**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-24**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **20/09/2009**

Pagina: **24**

Texto:

No ha sido fácil el aterrizaje del ministro de Defensa, Gabriel Silva, en su crucial cargo. El primer mes de gestión coincidió con el estallido de la molestia creada por el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos que permitirá, entre otras cosas, el uso de siete instalaciones aéreas por parte de la potencia del norte. Silva no tuvo tiempo de hacer un empalme profundo, ni de examinar la situación en áreas claves para su despacho –el orden público, la ofensiva contra las Farc– y ha debido ponerles el pecho a contrapartes de otros países, a la rebelión de Unasur contra “las bases” y a los medios de comunicación internacionales. Un ejemplo de ello fue la reunión del Consejo de Defensa de Unasur en Quito, el martes pasado, que acabó convirtiéndose en una prueba dura para el país. Se suponía que los presidentes les habían pasado la papa caliente a sus ministros, en su comentado encuentro de Bariloche, para bajarle el tono a la discusión y para facilitar una salida más tranquila. Pero en varios casos los cancilleres y mindefensas estuvieron más beligerantes que sus jefes. En particular los de Brasil –Celso Amorim y Nelson Jobim– elevaron el tono de las críticas al acuerdo colomboestadounidense, incrementaron sus solicitudes de una mayor transparencia y dejaron a un lado la posición centrista y moderada que había llevado Lula da Silva a Argentina. A la dupla colombiana –Gabriel Silva y el canciller Jaime Bermúdez– también le achacaron –lo hizo el canciller argentino, Jorge Taiana– “poca flexibilidad” en la reunión. Lo cierto es que el encuentro sirvió para poco, pues no hubo acuerdo conjunto y todo terminó en punta. A la delegación nacional le quedó un sabor agridulce. Su posición fue minoritaria, hasta el punto de que el propio Ministro de Defensa afirmó que había habido “una gavilla” contra el país y el presidente venezolano, Hugo Chávez, con su conocida tendencia a la exageración, vociferó que “Colombia quedó totalmente aislada”. No obstante, fue positivo haber superado otra

instancia del cuestionamiento al acuerdo colomboestadounidense, que en consecuencia quedó más consolidado, y que se haya iniciado un incipiente debate sobre diversos pactos similares de otros países de la región con poderes extracontinentales. Pero es un hecho que nuestro estatus en el seno suramericano es débil y necesita mucho trabajo estratégico y diplomático . La razón no es otra que el malestar con los miembros de Unasur es insostenible a largo plazo. Fue oportuna, de tal manera, la rápida aclaración que hizo el presidente Uribe en el sentido de que Colombia permanecerá en el nuevo club suramericano. El retiro habría consolidado la situación de aislamiento y habría puesto una talanquera para las cruciales relaciones con Brasil, país que trata a Unasur como su hija mimada. Ese es un frente, por cierto, que requiere mayor atención para enderezar la situación, tanto por motivos estratégicos como de vecindad y de crecientes vínculos económicos. Así, lo que se necesita precisamente es una política exterior para ganar aliados y sacar al país del inconveniente dilema entre Washington y su patio trasero, y asegurar puentes constructivos a la vez con el norte y con el sur. En Quito quedó la sensación de que no está bien afinada la partitura para las intervenciones de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, y del propio Presidente. Superada la peor parte de la tempestad, es indispensable hacer ajustes porque todo indica que los tiempos tormentosos no han pasado. Por el contrario, América Latina vive uno de los momentos más difíciles en muchos años. Más allá del tema colombiano, y del acuerdo de las mal llamadas bases estadounidenses, los últimos días dejaron en claro que se está abriendo una peligrosa carrera armamentista. Venezuela, cuyo Gobierno había logrado pasar más o menos de agache con compras de fusiles y solicitudes de aviones y embarcaciones militares, se descaró con el reciente acuerdo de adquisiciones a crédito a Rusia, por valor de 2.200 millones de dólares, que incluye 92 tanques y sistemas antiaéreos. Y Brasil, que tanto ha criticado la presencia estadounidense en Colombia, destapó un compromiso con Francia para quedarse, entre otras cosas, con 36 aviones de combate, por un monto que ronda los 12.300 millones de dólares.

Y hay más casos. Tal vez lo más grave es que la carrera armamentista se disparó en forma paralela a la intensificación de todo tipo de conflictos. Disputas viejas, como las que enfrentan a Perú, Chile y Bolivia por la salida al mar de este último, han deteriorado sus relaciones. Como telón de fondo, hay una nueva guerra fría de orden ideológico: la que se vio en Bariloche y en Quito entre los países chavistas socios del Alba y los demás. La reunión del Consejo de Defensa del martes pasado, en síntesis, no terminó de amainar las protestas por el acuerdo entre Bogotá y Washington y dejó en claro que hay todavía cabos sueltos y tareas pendientes. El Gobierno de Barack Obama, por ejemplo, parece más preocupado que ocupado, tal vez porque aún no ha fijado sus prioridades en el Continente. Pero tendría un valioso aporte para hacer, por la expectativa positiva que han generado los muy bienvenidos pasos en la política hacia Cuba y los cambios de estilo frente a su antecesor. Lo cierto es que hay muchas preguntas abiertas en el estado de las relaciones hemisféricas, de crucial relevancia para Colombia, y que la

**respuesta del Gobierno Uribe –como hemos dicho tantas veces en esta páginas–
debe tener un peso mayor de la Cancillería.**

editorial@eltiempo.com.co

**El armamentismo y la intensificación de conflictos en América Latina crean
un momento muy difícil para la diplomacia colombiana.**

Titulo: **Estrategia balanceada**

Palabras Clave: **EDITORIAL;GIL
KERLIKOWSKKE;ZAR ANTIDROGAS
ESTADOS UNIDOS**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-28**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **30/09/2009**

Pagina: **24**

Lead: Hoy termina la visita a Colombia de Gil Kerlikowske, nuevo Zar Antidrogas de Estados Unidos. Desde su nominación por la Casa Blanca, el ex jefe de Policía de la ciudad de Seattle generó altas expectativas, dentro y fuera de su país, por sus heterodoxas posturas frente a la guerra contra las drogas. Por su veteranía en seguridad urbana y por la experiencia familiar de un hijastro en la cárcel por posesión de alucinógenos, Kerlikowske representa en materia de lucha antinarcóticos el viraje que la administración Obama ha buscado en relación con sus antecesores.

Texto:

En cuanto a las responsabilidades domésticas que le competen a la oficina contra las drogas de la Casa Blanca, el nuevo Zar ha enviado varios mensajes esperanzadores. En declaraciones a este diario, Kerlikowske ratificó que el Gobierno estadounidense quiere reforzar el énfasis en la reducción de la demanda. A pesar de que la tendencia del consumo de cocaína en Estados Unidos ha sido estable en los últimos años, el informe mundial de drogas de Naciones Unidas calculó que 5,8 millones de estadounidenses consumieron este narcótico al menos una vez durante el 2007. Las autoridades de ese país se gastan 40.000 millones de dólares al año en esta lucha y arrestan a medio millón de personas anualmente por delitos relacionados con estas sustancias. No obstante este esfuerzo, el norteamericano continúa siendo, en términos absolutos, el mayor mercado de cocaína del mundo.

Al igual que otros altos funcionarios de la administración Obama –como la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en visita a México–, el Zar Antidrogas insiste en la “responsabilidad compartida” de su país en esta problemática global. Además, reitera que el camino contra los alucinógenos “no sólo puede ser represión a través del sistema judicial o con militares”. Es, asimismo, reconfortante escuchar que el encargado de la política antidrogas reconoce la necesidad de acompañar el abordaje policial y de seguridad con una perspectiva de “salud pública”. En este punto, Kerlikowske ha prometido la ampliación del acceso a tratamiento para los adictos y el

reforzamiento de una estrategia que integre la “mano dura” de la ley con educación, prevención y tratamiento para reducir su consumo. En otras palabras, una estrategia “balanceada”. Precisamente, el tipo de solución que la comisión integrada por ex presidentes latinoamericanos ha venido impulsando. Sin embargo, la inercia de la política represiva es fuerte e impide cualquier discusión sobre legalización de estas sustancias ilícitas. “La palabra ‘legalización’ no está en el vocabulario de Obama”, dijo Kerlikowske.

Lo más probable es que los cambios positivos de este enfoque sean sentidos más por los adictos en las calles estadounidenses que por los cultivadores de coca en las selvas colombianas. Aunque Kerlikowske no quiso hablar en detalle del futuro del Plan Colombia, no se vislumbran mayores transformaciones en las prioridades ni en los programas antidrogas que Colombia y Estados Unidos desarrollan en conjunto.

El Zar tampoco quiso referirse directamente al hecho de que el Gobierno colombiano esté transitando una vía completamente diferente en materia de prevención y tratamiento de los consumidores. Mientras Estados Unidos –junto a otros países con el mismo problema, como México– marca un giro hacia las soluciones de salud pública, en Colombia el Ejecutivo impulsa una reforma constitucional para penalizar a los drogadictos.

Para los estadounidenses, los mensajes de su nuevo Zar abren la puerta a una política que combine tratamiento y prevención con la represión y las cárceles. No hay claridad sobre cómo la estrategia antinarcóticos se balanceará en el lado que corresponde a Colombia.

Titulo: ¿Humo blanco?

Palabras Clave: **EDITORIAL;CÓNCLAVE DE SEGURIDAD CIUDADANA**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-12**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **05/10/2009**

Pagina: **12**

Lead: Esta semana ocurrió un encuentro algo inusual. Por convocatoria del ministro de Defensa, Gabriel Silva, los alcaldes de las ciudades capitales, incluyendo al de Bogotá, Samuel Moreno, estuvieron encerrados durante ocho horas en el primer Cónclave de Seguridad Ciudadana. El propósito de la reunión fue diagnosticar de manera franca y abierta lo que viene pasando con el crimen y la violencia en el contexto urbano. Igualmente, se buscaba comparar las experiencias y estrategias a nivel local para combatir la delincuencia.

Texto:

La “cumbre” –que contó con la presencia del presidente Álvaro Uribe– analizó en mesas de trabajo ocho temas críticos que tienen que ver con el ascendente fenómeno de inseguridad en las ciudades: deficiencias en el proceso de judicialización, fuentes de financiación para estrategias y programas en temas de convivencia y seguridad ciudadana, menores en conflicto con la ley, políticas de desarme, tráfico y consumo de estupefacientes, comportamiento de la violencia homicida, hurto en todas sus características y modalidades de transporte ilegal en las ciudades capitales.

El momento no podía ser más oportuno. Los inmensos avances que ha tenido la política de seguridad democrática son innegables. Los colombianos hoy viven unas circunstancias de paz y tranquilidad que no se conocían desde hace muchas décadas. Esta mejoría se ha dado principalmente por los logros en desarticular la guerrilla y las organizaciones del narcotráfico. Sin embargo, en el contexto urbano, estos resultados no han tenido similar contundencia.

El deterioro de los indicadores de seguridad urbana en Colombia es inocultable. De hecho, en varias capitales, tanto la actividad delincriminal como las tasas de homicidio se han disparado. En las encuestas de percepción ciudadana, como las de los distintos proyectos ‘Cómo Vamos’, la sensación de inseguridad de los habitantes ha aumentado tanto que se perfila como una de las preocupaciones urbanas más sentidas del país. Casos como el de Medellín –donde el envío de centenares de Policías élite no ha alterado

significativamente la oleada violenta– son indicadores de la complejidad y dificultad del desafío. Además, desde el punto de vista político, el tema de la violencia en las capitales se ha venido convirtiendo en un talón de Aquiles para el programa estrella del Gobierno.

Hay que destacar primero que el Ministro de Defensa tomara el toro por los cuernos. Sus antecesores no se destacaron particularmente por prestar la atención necesaria a las inquietudes de seguridad de los mandatarios locales. Basta recordar las tensiones entre el entonces ministro Juan Manuel Santos y el alcalde bogotano, Samuel Moreno. Que el jefe de la cartera de Defensa asuma un liderazgo en la política de protección ciudadana es un cambio de actitud que la mayoría de los habitantes de las ciudades colombianas estaba añorando. Esto también implica para Silva convencer al presidente Uribe de conseguir los recursos que hoy faltan para combatir la delincuencia urbana. Aunque el Primer Mandatario afirmó en el cónclave que hoy el Gobierno no cuenta con esos dineros, los burgomaestres han insistido en que los necesitan con urgencia.

De allí que la iniciativa del Ministro de Defensa sea oportuna y necesaria. Las conclusiones de esta reunión representan una verdadera estrategia nacional para la seguridad ciudadana. Más de 80 medidas concretas acordaron el Gobierno Nacional y los alcaldes y se le encargó a este Ministerio la supervisión y el acompañamiento de su implementación. Estaremos pendientes de los resultados, pero este es un buen comienzo. ¿Humo blanco en la seguridad ciudadana?

El cónclave de seguridad ciudadana entre Gobierno y alcaldes le dio a la violencia urbana la prioridad que las ciudades demandan.

Titulo: **Campanazo de alerta**

Palabras Clave: **EDILES
SUMAPAZ;EDITORIAL;CRIMEN**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-18**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **21/10/2009**

Pagina: **18**

Lead: El asesinato de dos ediles de la localidad bogotana de Sumapaz, la captura de 40 supuestos guerrilleros y los ataques a la Fuerza Pública en Cauca y Nariño confirman que, a seis meses de las elecciones, las Farc pretenden demostrar que aún cuentan con suficiente capacidad para hacer daño. Tras un 2008 catalogado como de los peores períodos de dicha organización subversiva en su historia, la guerrilla ha incrementado recientemente sus atentados con explosivos, sus hostigamientos a cabeceras municipales y el despliegue de campos minados.

Texto:

El cobarde fusilamiento de los dos políticos locales de Sumapaz por hombres del frente 53 busca reinstalar el miedo en una zona que ha sido un exitoso campo de batalla en la política de seguridad democrática. A pesar de que las Farc habían mantenido durante décadas una presencia histórica en la región, las Fuerzas militares, con tres batallones y una brigada móvil, recuperaron este corredor estratégico y asestaron duros reveses a los subversivos, incluyendo, por ejemplo, la muerte del 'Negro Antonio', cabecilla del bloque oriental.

Una de las muestras del regreso de la tranquilidad al Sumapaz fue la celebración de las elecciones locales en el 2007, tras siete años sin comicios, en las cuales salió escogida una de las víctimas del fin de semana pasado. Esa actividad política y social, propia de la paz y la democracia, es la que los guerrilleros intentan acallar en los más de ocho departamentos –como el Caquetá y el Huila– donde asesinan, amenazan y destierran a cientos de ediles, concejales y demás representantes de las comunidades. La incursión en esta zona rural de Bogotá busca, así mismo, generar un impacto psicológico, dada su cercanía a la capital. Lo sucedido es indicativo de hasta dónde las Farc quieren recuperar su corredor de seguridad perdido. En consecuencia, a la Fuerza Pública le corresponde reafirmar el control que mantiene en el Sumapaz –que se refuerza con la creación de un cuartel de Policía en San Juan–, evitar nuevos atentados o hechos de alta visibilidad y

preservar el apoyo de los habitantes.

Las goteras capitalinas no son el único frente donde la guerrilla está reactivando su accionar militar en los últimos meses. En Caquetá, Guaviare, el bajo Cauca antioqueño, Tolima, Huila y Nariño, las Fuerzas Armadas y la población civil enfrentan ataques y hostigamientos como los de la semana pasada en la región caucana de Toribío y Caloto. Estos municipios, por ejemplo, han sufrido múltiples incursiones, y en el departamento del Cauca se han aumentado las alertas tempranas de desplazamiento forzado. Una buena parte de tales enfrentamientos es el resultado de la presión ejercida sobre las columnas subversivas por las operaciones militares en el cañón de Las Hermosas y las fronteras entre Valle, Tolima y Huila.

Además del objetivo de retomar vitales corredores estratégicos desde el Sumapaz hasta la Costa Pacífica para el transporte de tropa, droga y suministros, la guerrilla está detrás de consolidar un mensaje político: el de que, después de siete años de Gobierno de Álvaro Uribe, no está derrotada militarmente. A medida que se acerque el día de elecciones, los ataques subversivos contra la Fuerza Pública, los civiles y los políticos locales podrían aumentar, con la intención de demostrar capacidad de fuego. Al igual que en las últimas tres campañas presidenciales, las Farc buscarán ser protagonistas y hacer que el debate gire en torno a ellas. Sin embargo, este recrudecimiento encontrará una respuesta firme de las instituciones y no debería generar un nuevo balance de fuerzas, ni tampoco un retroceso en los logros del Gobierno. Pero sí implica una reactivación, que pone a prueba la consolidación regional de la política de seguridad democrática y la capacidad de reacción del Estado.

Titulo: **Entra la Corte Penal**

Palabras Clave: **EDITORIAL**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-24**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Fecha Publicacion: **01/11/2009**

Pagina: **24**

Texto:

Exactamente en el día de hoy se vence la salvaguardia de siete años que aplazó para Colombia la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) para los crímenes de guerra. La reserva, firmada por los presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe en el 2002, impidió que este tribunal conociera de los delitos atroces cometidos dentro del conflicto interno colombiano. Esta decisión se justificó ante el país como un compás de espera para que los grupos armados ilegales pudieran avanzar en negociaciones de paz sin el temor de que sus cabecillas terminaran investigados y juzgados por La Haya. Por esta y otras razones, la expiración de la salvaguardia ha generado toda clase de expectativas sobre los alcances jurídicos de la CPI a partir de hoy y sus impactos sobre eventuales procesos de paz con la guerrilla en el futuro. Para algunos sectores, la vigencia plena del alto tribunal internacional para investigar delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra implica el ingreso de un supersistema de justicia que se superpondrá al aparato judicial nacional y reducirá los niveles de impunidad.

En particular, algunos críticos del ritmo y de los resultados de procesos cruciales, como los 'falsos positivos', las masacres contra los indígenas o los delitos atroces de los jefes paramilitares, confían en el carácter autónomo e internacional de la CPI para sustituir a una justicia local que acusan de dependiente del Ejecutivo y de pocos resultados. Asimismo, existen voces que equiparan el vencimiento de esta reserva con el cierre de cualquier posibilidad de negociación o diálogo con los guerrilleros. Ante la dificultad de que permanezcan impunes o sean indultados los más brutales crímenes de guerra, las cúpulas subversivas rechazarían cualquier proceso de paz que implique cárceles y condenas. La supuesta "zanahoria" de la salvaguardia expiró sin mayores resultados en ese frente.

* * * *

En otras palabras, por confusión o por conveniencia política, la entrada en vigencia plena de la CPI fue convertida en un mito en el cual un todopoderoso tribunal internacional extendería su larga mano justiciera para

castigar todas y cada una de las atrocidades cometidas en el marco del conflicto interno colombiano.

La realidad en esta materia es mucho más compleja y llena de matices. El Estatuto de Roma define la CPI como un tribunal de último recurso; es decir, se activa sólo cuando los aparatos de justicia nacionales colapsan o no cumplen abiertamente con su deber de procesar este tipo de delitos. Una mirada a los cuatro casos activos hoy en día lo confirma: el Congo, Uganda, la República Centroafricana y Sudán, por la región de Darfur. En los dos primeros países, sus propios líderes reconocieron su impotencia y remitieron la situación a la Corte. En el caso de Sudán, donde uno de los acusados con orden de captura es el actual mandatario Omar Al-Bashir, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue el remitente. En palabras del fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, “Si los Estados no investigan, la Corte lo haría”. Este no es el caso del funcionamiento de la justicia colombiana. Aunque para muchos episodios las víctimas y la sociedad en general desearían una aplicación más expedita de la ley, los niveles de operación y de capacidad del aparato judicial nacional están muy lejanos de una situación de colapso, como en algunas naciones africanas. Tampoco existe en el país una justicia de papel o jueces de pantomima o investigadores sin la disposición genuina de procesar estos delitos.

Sin embargo, es innegable que facetas atroces del conflicto colombiano –por ejemplo en materia de reclutamiento de menores y violencia sexual– y los resultados de Justicia y Paz podrían en el futuro mover la atención de la CPI a abrir un caso en Colombia. Ya hoy el país hace parte de un grupo de siete naciones –Afganistán, Kenia, Costa de Marfil, Georgia, Guinea y Palestina– bajo “observación oficial” del tribunal internacional. Es decir, a la fortaleza institucional y la operatividad de la Justicia hay que acompañar esfuerzos más ingentes para reducir los índices de violencia e impunidad ligados a nuestra larga confrontación interna.

* * * *

Por estos aspectos tan polémicos, parece inevitable que la discusión de los alcances de la CPI termine politizándose con miras a las próximas elecciones presidenciales. Sería un craso error no sólo permitir que crezcan visiones distorsionadas del papel de la justicia transnacional con el fin de la salvaguardia, sino también blandir frívolas acusaciones con intereses electoreros para ganar votos o dinamizar la oposición. No se trata de excluir de la campaña el sano debate sobre el fortalecimiento judicial o sobre el manejo de los procesos más polémicos, sino enmarcarlo dentro de las realidades y no de los mitos.

El desafío del Estado colombiano es el mismo de la Corte Penal: evitar la impunidad de los delitos más atroces contra la humanidad. Como afirmó Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, “la CPI representa la esperanza para las víctimas de atrocidades y envía el mensaje de que nadie está por encima de la ley”. Esperanza y mensaje en los que, hoy por hoy, la justicia nacional, a pesar de sus falencias, debe seguir trabajando.

editorial@eltiempo.com.co

Titulo: **En contravía**

Palabras Clave: **DOSIS
PERSONAL;EDITORIAL;DROGAS**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-18**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **06/11/2009**

Pagina: **16**

Lead: Hay varias razones por las cuales se podría concluir que el polémico proyecto que penaliza la ‘dosis personal’ de drogas ilícitas va a ser aprobado en el Congreso. La principal, que el trámite del acto legislativo avanza a toda velocidad. Solo faltan dos debates, en la Comisión Primera y en la plenaria del Senado, pero la manera como ha superado los anteriores obliga a predecir que las mayorías gobiernistas –que rara vez operan en forma disciplinada– están funcionando con agilidad en este tema.

Texto:

Habría que agregar que la versión que está en la puerta del horno es mejor que las que naufragaron en cuatro legislaturas de años anteriores: su principal promotor, el representante Nicolás Uribe –ponente en la Cámara de Representantes–, la defiende con el argumento de que no habrá cárcel para quienes porten la droga, ni tribunales especiales para juzgarlos, y que se limitará a tratar a los drogadictos como infractores leves.

La verdad, sin embargo, es que la idea sigue siendo inconveniente. La comunidad internacional está revaluando la estrategia contra las drogas ilícitas porque, después de más de dos décadas, su relación costo-beneficio no satisface a nadie. No existen condiciones para un giro radical –como la legalización de la producción, que no es viable ni provechosa–, pero en varias instancias significativas se está forjando una nueva manera de tratar a los consumidores.

El informe liderado por los ex presidentes César Gaviria, de Colombia; Ernesto Zedillo, de México, y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, ha sido bien recibido en su aporte más novedoso y sustancial: que a los consumidores se los debe tratar con una política de salud pública y no como criminales.

No sería raro que la comisión que se acaba de crear en Estados Unidos para evaluar la estrategia antidrogas elija el mismo camino. La forma en que se enfrenta el consumo de marihuana en varios países y en un número importante de estados norteamericanos –y su licencia para usos médicos– permite afirmar que aquel, de hecho, ya está despenalizado. El proyecto que el Congreso de

Colombia está a punto de aprobar va en contravía de las nuevas tendencias mundiales.

Pero el Gobierno del presidente Uribe lo ha convertido en punto de honor. En parte, por razones pragmáticas: considera que es incoherente pedirles a los países consumidores políticas más efectivas para reducir la demanda mientras que en Colombia existe un espacio para el porte de estupefacientes. Y, en la misma dirección, cree que la permisividad frente a la 'dosis personal' abre un boquete que aprovechan los traficantes para atomizar las cantidades de drogas en oferta entre cientos de personas, que no pueden ser castigadas por portarlas. No menos importante es el factor ideológico: hay una faceta moralista en el talante del Primer Mandatario que lo alinea con concepciones radicales en materia de castigos contra conductas que algunos credos religiosos consideran reprochables.

No son razones válidas. El punto de fondo es que los consumidores no son delincuentes sino víctimas de los traficantes. Aunque los defensores del proyecto dicen que no buscan castigarlos, en la práctica sí lo hace.

Malgastar los esfuerzos del Estado en su contra es una oportunidad para los verdaderos culpables –que son las mafias–, permitiría que se cometieran graves injusticias con quienes necesitarían más bien una ayuda –jóvenes, en su mayoría– y reforzaría la continuidad de la estrategia fracasada de tantos años: prohibicionista a ultranza y punitiva en extremo.

El mal paso está casi consolidado y en el Congreso hay mayorías suficientes y alineadas para concretarlo. Pero hay tiempo para evitar el error: el Senado, en los dos debates que quedan, podría, con cabeza fría y sensatez, volver a hundir el inconveniente proyecto.

Titulo: **El destape de las ‘ollas’**

Palabras Clave: **EDITORIAL;OLLAS BOGOTÁ**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-24**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **11/11/2009**

Pagina: **20**

Lead: Por más que se sospeche de cómo es el monstruo, no deja de espantar cuando se le ve la cara. Ya se sabía del enorme y sórdido negocio de las drogas ilícitas en las llamadas ‘ollas’ de Bogotá. Pero el completo informe que presentó este diario el domingo pasado, y luego el canal Citytv el lunes, revela un pulpo de mil tentáculos que se ha tomado a la capital del país. No es un flagelo exclusivo de la ciudad. Otras grandes urbes de Colombia y del mundo lo sufren, pero ese es un triste consuelo.

Texto:

Las ‘ollas’ son un negocio criminal bien organizado que, a pesar de llevar el nombre de ‘microtráfico’, involucra sumas enormes. Los cálculos de la Policía indican que las 458 detectadas mueven unos 5.900 millones de pesos en solo una semana, a lo largo y ancho de la ciudad. El mapa no respeta estrato ni localidad. Desde Usaquén hasta Usme; desde las calles de Chapinero hasta las barriadas de Bosa, existen los comercios del crimen. No hay barrio bogotano que no tenga un punto de venta de droga donde la Policía no haya capturado al menos a uno de los 5.581 detenidos durante el 2009. En este mismo período, las autoridades incautaron poco más de 4,1 millones de gramos de las más variadas sustancias: marihuana, bazuco, cocaína, pastillas de éxtasis y hasta base de coca. En cifras gruesas, el mercado al menudeo, una estrategia usada por los grandes capos del narcotráfico para copar la demanda doméstica, alcanza unos 300.000 millones de pesos al año. Estas redes han estimulado el consumo interno de droga mediante subsidios de precios, promoción de los ‘jíbaros’ e instalación de las ‘ollas’. Vender estupefacientes en cantidades que no sobrepasen la dosis mínima se ha vuelto, según la Policía –que ha creado un cuerpo especializado con 266 hombres para luchar contra este delito– la caja menor de cuatro capos que se pelean las zonas. Todo micro, aunque el daño es macro.

Para ser justos, la Policía y, especialmente, la Sijín están haciendo grandes esfuerzos. El número de arrestados a la fecha es de 1.862 más que en todo el año pasado. Sin embargo, el negocio crece, con lo cual el reto es mayor.

La misión, entonces, es evitar que siga aumentando el consumo de droga entre niños, jóvenes y adultos, en un país en el que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Estupefacientes, unas 360.000 personas han manifestado ser adictas. Según la más reciente Encuesta de Consumo del Ministerio de la Protección Social, Bogotá es la tercera región del país con más alta prevalencia de uso de cualquier estupefaciente en el último año.

Además del daño individual que alimentan en cada adicto, las ‘ollas’ constituyen un flagrante deterioro para la calidad de vida de la capital y la del resto del país. En la encuesta del programa ‘Bogotá, cómo vamos’, el 38 por ciento de los capitalinos identificó la venta de droga como el segundo problema más grave de seguridad después del robo callejero. Como un virus letal en expansión, estos expendios ilegales colonizan un área pequeña –una casa, un parque o un lote baldío– y desatan a su alrededor una gama variada de actividades delictivas, como el hurto, el sicariato, el homicidio, la prostitución y el abuso de menores de edad. Y así los habitantes de cientos de barrios de Bogotá quedan presos de esos minirregímenes de crimen y miedo.

La batalla contra las ‘ollas’ no es una tarea fácil, pero es inaplazable. Ya figura en los planes del presidente Álvaro Uribe, quien en el pasado consejo comunal habló de la importancia de capturar a los distribuidores de las pequeñas dosis. Inteligencia, valor civil y denuncia ciudadana son fundamentales, con las debidas garantías de las autoridades. El microtráfico y la violencia asociada a este son retos de la política de seguridad democrática en la capital y en el resto de ciudades de Colombia.

Titulo: **Tambores de guerra**

Palabras Clave: **EDITORIAL**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-26**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **15/11/2009**

Pagina: **26**

Texto:

Ha sido grande la preocupación que han creado en el país las palabras pronunciadas por Hugo Chávez hace una semana. Como es conocido, el mandatario venezolano habló durante su programa Aló, Presidente del acuerdo que permite el uso de bases colombianas por parte de militares estadounidenses, e hizo una admonición que no dejó dudas: “Compañeros militares, no perdamos un día en el cumplimiento de nuestra principal misión: prepararnos para la guerra y ayudar al pueblo a prepararse para la guerra”. Si bien, a los pocos días, el inquilino del Palacio de Miraflores sostuvo que lo que defiende su Gobierno es la paz, el acto del viernes, en el que habló de un posible bombardeo a Caracas desde este lado de la frontera, no dejó dudas.

Ante lo sucedido, Colombia debe tomar con toda seriedad la que constituye la más grave amenaza a su seguridad en más de siete décadas, pues esta proviene de un Presidente que, además, es de formación militar. Sin ánimo de ser alarmistas, es necesario decir que, desde la lejana época del conflicto con el Perú, las trompetas de la confrontación no habían sonado con tanta claridad en esta zona del hemisferio. Quien las sopla no es otro que Hugo Chávez, cuyos gestos inamistosos hacia los colombianos se cuentan por decenas y que hace rato dejó de ser un personaje lenguaraz al que no hay que prestarle atención.

En consecuencia, es indispensable activar las alarmas en el territorio nacional, pero mantener la cabeza fría. La razón es que cada vez son mayores las posibilidades de una provocación, que puede ir desde un incidente fronterizo hasta un ataque contra instalaciones civiles o militares en Colombia. Semejante escenario les suena inconcebible a los habitantes de dos países hermanos, que rechazan en forma ampliamente mayoritaria cualquier tipo de hostilidad mutua. Y aunque hay que hacer votos para que no suceda nada, lo que procede es estar preparados para responder con la cabeza y no con el hígado.

Eso solo será posible si se hace un análisis racional de la situación. Sin desconocer que el mandatario venezolano ha entrado en un periodo de creciente impopularidad debido a los cortes de agua y de luz, al desbordamiento del crimen común y de los homicidios, a la contracción de la economía y a la inflación galopante, su animadversión hacia el Gobierno colombiano viene desde mucho antes. Los dardos de Chávez los recibió en su momento Andrés Pastrana y los ha tenido que soportar con cada vez más frecuencia Álvaro Uribe. Pero, aparte de la incontinencia verbal y las restricciones comerciales, Venezuela lleva años de carrera armamentista y de gestos amistosos hacia las Farc y el ELN, cuyos integrantes transitan por amplias zonas del territorio vecino, como lo documenta periódicamente la prensa caraqueña.

Una mirada detenida al discurso chavista, cada vez más radical y amenazante, denota un patrón que no puede ser ignorado. Por ello, quienes ven en la tensión reciente una cortina de humo para distraer a los ciudadanos venezolanos de sus incomodidades diarias pueden estar equivocados. Si acaso, el descontento de los votantes constituiría una razón adicional para que Hugo Chávez intensifique sus ataques contra los “escuálidos” –remoquete con el que identifica a sus opositores– y trate de sacar del poder municipal o regional a quienes lo contradicen. Ya lo hizo con el alcalde de Caracas, a quien despojó de buena parte de sus funciones, y ahora quiere intentarlo con los gobernadores de los estados fronterizos con Colombia, que rehúsan someterse a su férula.

Es dentro de ese esquema de consolidación interna de poder dentro del cual el tema limítrofe tiene especial importancia. Un choque con fuerzas colombianas o la acusación de que elementos paramilitares planean acciones en territorio venezolano puede ser la excusa que necesita el régimen chavista para suspender las garantías constitucionales, deponer a mandatarios locales y darles un papel formal a las miles de personas que componen las milicias bolivarianas y que han recibido armas del Estado venezolano.

En medio de tal escenario, Colombia necesita hacer oídos sordos a los cantos de sirena de quienes proponen contestar a las eventuales provocaciones con actos de fuerza. Una confrontación, por más corta que sea, causaría profundas heridas que tardarían años en sanar, y no dejaría ganadores. Por tal motivo, la actitud correcta del país es informar semana a semana a la comunidad internacional y tener mesura en declaraciones y respuestas. Todo lo anterior exige recordar que la patria está por encima de los partidos. En ese sentido, hay que esperar que la próxima Comisión Asesora de Relaciones Exteriores sirva para conformar un frente unido, ojalá con la participación como invitados de los líderes de las bancadas que no se encuentran representados en ella. También, los diferentes aspirantes a la Presidencia y al Congreso deberían dar muestras de responsabilidad al tocar un asunto cuyo tratamiento merece el mayor cuidado y cuyo manejo corresponde única y exclusivamente al Presidente de la República. No se trata de ser

alarmistas. Simplemente, de llamar la atención sobre algo que parece imposible, pero que debe ser considerado como una amenaza verdadera, hasta que la sensatez y el ánimo de cooperación con Colombia regresen al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

editorial@eltiempo.com.co

Ante Hugo Chávez, Colombia debe tomar con toda seriedad la que constituye la más grave amenaza a su seguridad en más de siete décadas.

Titulo: **Solidaridad con Nariño**

Palabras Clave: **MASACRES - NARIÑO;EDITORIAL**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-14**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **16/11/2009**

Pagina: **14**

Lead: Por estos días, Nariño volvió a ser noticia. No fue el mundialmente conocido volcán Galeras. Fue esa fumarola oscura de las masacres. Entre el 2 y el 4 de noviembre, en Barbacoas –la dolda Barbacoas– fueron asesinadas ocho personas integrantes de dos familias. Entre ellas, dos adolescentes de 15 y 16 años. Las versiones son confusas. Según la Defensoría del Pueblo, se les atribuyen a las autodefensas ‘Águilas Negras’. La Gobernación tiene informes de que pudo ser por disputas entre familias indígenas. El hecho es que la comunidad barbaçoense tuvo que sepultar a otros ocho de los suyos.

Texto:

La tragedia se repetía. El 23 de marzo pasado los indígenas awás tuvieron que organizar una minga para recuperar 11 cadáveres que dejó una matanza en el resguardo Tortugana-Telembí, cometida por miembros de las Farc, que les ha dado por castigar a esa comunidad y a los nariñenses en general, a los que cínicamente dicen defender. Seguramente porque son un estorbo para sus propósitos de narcotráfico. Porque Nariño ha sido uno de los departamentos que más han padecido el flagelo del tráfico de estupefacientes, que encontró allí la vía al Pacífico. Ese pueblo trabajador y bueno del sur del país, en su mayoría agrícola, ha sufrido lo que implica la plaga que merodea el negocio de la llamada hierba maldita.

Y como si fuera poco, el año pasado también le cayó la ruina de las pirámides, como DRFE, DMG y unas 18 más. Ya es bien conocido el miserable desenlace, donde se estima que en un año el 90 por ciento de las familias de Pasto pasaron de la cultura del banco a la de la engañifa de las pirámides. Y muchos campesinos sacaron sus ahorros para llevarlos a las captadoras, que tenían unas 42 oficinas en el departamento.

La suerte le ha dado la espalda últimamente a Nariño, que no puede seguir en esta racha, que no solo toca a sus gentes en sus vidas y en lo económico, sino en su alma popular. Una norma futbolística algo absurda le quitó tres puntos al Pasto cuando faltaban segundos para ganar un partido, pues un desadaptado le lanzó una botella a un juez de línea, que lo alcanzó a

golpear, pero hirió al equipo, orgullo y pasión nariñense y empujó al descenso.

Los departamentos son hijos de la misma familia, y Nariño no puede parecer tan lejano del Gobierno central, que debe incrementar allí la lucha contra los violentos, mejorar las vías de comunicación, en unión con el gobernador Navarro Wolff, buscarle salidas a la difícil situación de sus gobernados, mediante créditos blandos. Es ahí donde se justifican, realmente, los subsidios agrícolas. Hay que estar con Nariño, que requiere la mano y la solidaridad nacional.

editorial@eltiempo.com.co

Titulo: 'Un acto de salvajes'

Palabras Clave: ATAQUE
TERRORISTA;EDITORIAL;FARC;BUS
TRANSPIALES

Estado: Finalizado

Longitud: LARGO

Pagina de Bogota: 1-18

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: NACIONAL-1

Seccion: OPINION

Fecha Publicacion: 23/11/2009

Pagina: 16

Lead: Así calificó el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, el ataque a un bus de pasajeros el pasado viernes en Barbacoas, que terminó con un trágico saldo de seis pasajeros incinerados, entre ellos dos menores de edad. Las autoridades de la región atribuyeron el brutal acto terrorista a guerrilleros de la columna 'Mariscal Sucre' de las Farc.

Texto:

Disparar contra un bus intermunicipal, rociarle gasolina y prenderle fuego con 18 personas indefensas en su interior sin darles oportunidad de bajarse es un puro acto de barbarie, digno del más severo de los castigos. Asimismo, es un macabro recordatorio de los niveles de degradación a los que pueden llegar las acciones de la guerrilla. Lamentablemente, ya son cuatro los vehículos de transporte intermunicipal quemados por las Farc en esa zona nariñense.

La situación de orden público en el departamento de Nariño –como ya lo había mencionado un reciente editorial– está sufriendo un alarmante deterioro ante la reactivación de los ataques y hostigamientos guerrilleros. La región vecina del Cauca también concentra un buen número de actividades armadas de la subversión, así como tomas de pueblos y enfrentamientos directos con unidades militares.

La respuesta de la Fuerza Pública a esta salvajada debe ser rápida y contundente. A la recompensa por información de los autores que ofrece la Policía habrá que sumar operativos de persecución sistemática de los culpables de esta violación flagrante de los derechos humanos de civiles inocentes. Ni por un momento los comandantes guerrilleros deben poder recolectar los supuestos “réditos” en terror y pánico que pretenden al ejecutar este tipo de acciones canallas .

Asimismo, es pertinente que la información de este atroz hecho en Barbacoas integre el dossier con el que el Estado colombiano busca permanentemente desenmascarar la realidad de las prácticas, intenciones y motivaciones de la cúpula de las Farc en foros y escenarios internacionales. De hecho ayer la

OEA condenó el ataque en duros términos. Incendiar un bus con sus pasajeros adentro está más cercano a la sevicia criminal que a la lucha por el cambio de una sociedad.

Que las Farc sean protagonistas de actos terroristas propios de los conflictos más degradados del planeta no es nuevo. Que entren en el portafolio de sus acciones en esta reciente etapa de reactivación sí despierta preocupación y amerita la mayor de las atenciones.

editorial@eltiempo.com.co

Titulo: **21 crímenes por resolver**

Palabras Clave: **CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD;EDITORIAL**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-20**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **27/11/2009**

Pagina: **18**

Lead: La decisión de la Fiscalía General de la Nación de elevar a delitos de lesa humanidad las más execrables acciones terroristas del cartel de Medellín es acertada e histórica. Se trata de 21 crímenes atroces que, entre mediados de los años 80 y principios de los 90, las huestes de Pablo Escobar cometieron contra unas 15.000 víctimas a lo largo y ancho del país. Hoy, precisamente, se cumplen veinte años del brutal atentado contra un avión de Avianca que les costó la vida a 110 personas.

Texto:

Pero dos décadas no han sido suficientes para que la memoria colectiva de los colombianos haya olvidado esos tiempos de temor, terror y zozobra. Dentro de los crímenes seleccionados por el organismo investigador se cuentan los macabros atentados contra el avión, el DAS y las instalaciones del diario El Espectador; los asesinatos de altos funcionarios, militares, jueces y periodistas como Diana Turbay, y los secuestros del vicepresidente Francisco Santos, del ex presidente de la República Andrés Pastrana y otras personas. Ya había sido elevado a la misma categoría el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Delitos que esta organización narcotraficante ejecutó de manera sistemática contra civiles a fin de atemorizar a una sociedad entera y así remover los obstáculos para una eventual prohibición de la extradición y un tratamiento jurídico más benévolo para sus actividades delictivas. Estas son precisamente las características jurídicas y los requisitos que se deben cumplir según los estándares internacionales. Con la decisión, la Fiscalía no solo busca evitar que estos crímenes prescriban, sino también ponerlos bajo la órbita de tribunales transnacionales, como la Corte Penal Internacional. Además, al catalogarlos de lesa humanidad, se reconoce el derecho de los miles de sobrevivientes y familiares de las víctimas a conocer la verdad, la justicia y la reparación. Esta declaratoria, asimismo, le permite al ente investigador 'ganar' tiempo para reactivar unos procesos cuyos resultados brillan por su ausencia. Son muchas las preguntas por resolver y las responsabilidades materiales e

intelectuales por adjudicar en cada uno de estos 21 crímenes. Tras dos décadas, será, además, una compleja labor seguir las pistas o reconstruir los hechos. Aunque, como estructura armada y narcotraficante, el otrora poderoso cartel de Medellín sea parte del pasado, las heridas que dejó y el daño que generó siguen abiertos y en mora de cerrarse.

Por ese motivo, más que la decisión en sí, el reto de la Fiscalía está en producir avances en las investigaciones. Para ello se destinó una unidad especial de 25 fiscales –que contará con el apoyo de un grupo de la Procuraduría– con el fin de salvar de la inaceptable impunidad estos agonizantes procesos. Nuevos testimonios serán recogidos, como el dado por ‘Rasguño’ a este diario sobre el avión de Avianca, y ya se impartieron instrucciones para la ubicación del ‘Arete’ en España. Igualmente, la Fiscalía, a la luz de la nueva condición de lesa humanidad, revisará los paquetes de beneficios otorgados a una docena de ex narcotraficantes en los años 90.

Sobre los hombros de estos fiscales reposa la inmensa responsabilidad de aprovechar la extensión de tiempo y las nuevas herramientas jurídicas para acabar con la impunidad de la campaña terrorista a la que el cartel de Medellín sometió al país por una década. Sin embargo, tras veinte años de cometidos los delitos se viene una ardua tarea. Y es que, de no avanzarse en las investigaciones, se corre un alto riesgo de frivolar la poderosa figura del delito de lesa humanidad y de enviar nuevamente el mensaje de que el aparato estatal es incapaz de establecer la verdad, impartir justicia y ordenar la reparación de las víctimas de estos crímenes atroces.

Elevar a delitos de lesa humanidad las atrocidades de Pablo Escobar pone sobre los hombros de la Fiscalía el deber de acabar con la impunidad.

Titulo: **Peligro: campo minado**

Palabras Clave: **CAMPOS MINADOS EN COLOMBIA;EDITORIAL**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1 - 28**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Fecha Publicacion: **29/11/2009**

Pagina: **30**

Lead: Los campos de Colombia están sembrados de un asesino silencioso, responsable de miles de víctimas y que amenaza permanentemente la vida y la integridad física de cientos de miles de campesinos y de la fuerza pública en el 46 por ciento de los municipios del país. Son las incontables minas antipersonas y las municiones sin explotar que los grupos armados ilegales han venido plantando indiscriminadamente en áreas donde habitan y transitan civiles inocentes.

Texto:

A partir de hoy y hasta el 4 de noviembre, Cartagena es la sede de la cumbre de los 156 países firmantes de la Convención de Ottawa, el instrumento jurídico internacional para promover la prohibición del uso, fabricación, almacenamiento y tráfico de estas armas. El tratado, que cumple 10 años de vigencia, es respaldado por el 80 por ciento de las naciones del planeta y ha impulsado la destrucción global de más de 42,3 millones de minas por los Estados miembros.

Esto ha llevado a que tanto su comercio como su producción no solo estén estigmatizados, sino a que se hayan reducido dramáticamente en la década de existencia de la Convención. Asimismo, el acuerdo cubre operaciones de erradicación de los campos minados. Este esfuerzo internacional, promovido por Estados y ONG, fue galardonado con el Premio Nobel de Paz en 1997. No obstante, aún existen unos 37 países, entre ellos poderosas potencias, como Estados Unidos, Rusia y China, que, por razones de estrategia militar, se niegan a suscribir el tratado de Ottawa. El caso de Washington es paradójico: mientras apoya con recursos la destrucción de las minas, su responsabilidad en la Zona Desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, sembrada de estos dispositivos para evitar invasiones, lo disuade de convertirse en Estado firmante. * * * *

Cartagena es el escenario propicio para que el Gobierno colombiano, en cabeza del vicepresidente de la República, Francisco Santos, comparta los resultados de su lucha por el desminado. Desde la ratificación del tratado, 19.000 minas de las Fuerzas Armadas han sido destruidas, así como 12 de los

34 campos minados bajo jurisdicción militar. El Ejército colombiano está desarrollando programas de desminado dentro de un ambicioso plan gubernamental a diez años, a un costo de más de 600.000 millones de pesos. Sin embargo, estos esfuerzos estatales por cumplir con los compromisos de la Convención contrastan con el creciente sembrado indiscriminado de minas 'hechizas' que las Farc y el ELN han desplegado por 31 de los 32 departamentos del país. Antioquia, Nariño, Cauca, Arauca, Casanare, Boyacá, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Meta son consideradas regiones críticas, donde los mapas de los campos minados y el del narcotráfico se superponen. Estos grupos guerrilleros han incluido los artefactos explosivos en sus estrategias militares para proteger laboratorios y cultivos de coca, impedir el avance de los operativos militares y generar terror entre la población civil.

Las Farc se han convertido, según el más reciente informe del Monitor de Minas Terrestres, en el grupo armado ilegal que más las usa en el mundo, junto con los Tigres Tamiés, de Sri Lanka, y el Ejército de Liberación Karen, de Myanmar. El gusto macabro de la guerrilla por estos explosivos mantuvo a Colombia por varios años en el primer lugar en mayor número de víctimas de minas antipersonas. En el 2008, 777 colombianos –más de dos por día– sufrieron sus terribles e inhumanas secuelas de muerte y mutilación. Ese año, solo Afganistán, epicentro de la guerra de Estados Unidos contra los talibanes, superó al país en este deshonroso palco de honor. Además, según denuncias del vicepresidente Santos, se han encontrado otros tipos de explosivos improvisados, "microminas", diseñados para mutilar el rostro, así como minados "muertos", para activar a control remoto.

* * * *

El drama de las minas es una profunda herida física y territorial que marca a las sociedades en guerra muchos años después de la firma de la paz. Camboya, por ejemplo, es un recordatorio dramático de esa realidad: entre 4 y 6 millones se calcula que se sembraron en sus 30 años de guerra civil. El abismo entre su bajo costo de instalación y los miles de millones de dólares que vale su identificación y destrucción complica aún más las campañas de desminado. Todo esto sin incluir el largo, difícil y oneroso proceso de rehabilitación física y psicológica de las miles de víctimas que las finanzas públicas se ven obligadas a asumir.

El liderazgo que Colombia está asumiendo en la erradicación de las minas merece ser acompañado por la comunidad internacional: con respaldo diplomático al condenar duramente a las Farc y con ayuda económica para asumir las pesadas cargas. El mejoramiento de la asistencia hospitalaria a las víctimas civiles y la destrucción del resto de zonas minadas en los alrededores de varias bases militares son aspectos que el Gobierno podría acelerar. La cumbre de Cartagena constituye el foro internacional por excelencia para que las problemáticas de los mutilados y heridos por estos artefactos ganen un merecido protagonismo. Y para adoptar un ambicioso plan de acción que refuerce las medidas de protección y asistencia a las víctimas. editorial@eltiempo.com.co

Titulo: **Premios a los esfuerzos de paz**

Last publication info

Palabras Clave: **PREMIO NACIONAL DE PAZ 2009;EDITORIAL**

Publicacion:

EL TIEMPO

Estado: **Finalizado**

Edicion: **NACIONAL-1**

Longitud: **LARGO**

Fecha Publicacion: **01/12/2009**

Pagina de Bogota: **1-16**

Pagina: **16**

Lead: Los premios son reconocimiento y estímulo a los esfuerzos. Sobradamente, uno de los más justos es el Premio Nacional de Paz 2009, que anoche se entregó, en una emotiva ceremonia en el centro cultural del Gimnasio Moderno en Bogotá, a los habitantes de la Unión Peneya, caserío de La Montañita, en Caquetá. Desde luego, lo es también el Premio Honorífico al cantante Juanes por su constante lucha contra la violencia y las minas antipersonas, a través de la Fundación Mi Sangre, que apoya la rehabilitación de quienes han tenido la desgracia de caer en estos terroríficos artefactos. Como él mismo lo interpreta, es un nuevo motivo y compromiso para seguir la benefactora tarea.

Texto:

Aunque en este panorama nacional tan complejo y duro hay muchas muestras de coraje, es de imaginar que no hubo dudas al otorgar el Premio –en el que participan EL TIEMPO, la revista Semana, El Colombiano, Caracol (Radio y Televisión), el PNUD y Fescol– a la Unión Peneya. Allí hay valiosos ejemplos de tenacidad, de resistencia civil ante la violencia, de valor y amor por su terruño. Es admirable lo que sus habitantes han hecho por regresar a su pueblo, después de una noche de terror el 4 de enero del 2004, cuando tuvieron que huir, con sus niños y sus viejos, bajo la presión de las Farc y en medio de combates de estas con el Ejército. Los peneyanos, inicialmente, dieron una sobrecogedora lección de hermandad al no diseminarse y apoyarse con lo que hubiere, en medio de la miseria, bajo su sencilla pero valerosa Unión de Desplazados. Tres años después, en el 2007, a pesar de que las Farc las seguían acechando, 500 familias –unas 2.500 personas– resolvieron retornar. Inclusive, un grupo de líderes se internó en la selva en busca de la guerrilla para informarla de su decisión y exigirle respeto por sus vidas. Y allí volvieron a reconstruir un pueblito que espantaba, saqueado, cubierto por la maleza. Lo que sigue es más de admirar aún. La reconstrucción fue física y social. Durante un año, 150 hombres hicieron jornadas gratuitas para reparar el colegio, donde hoy estudian 400 niños; se han recuperado las viviendas; se ha creado autoridad civil. Y con los 70 millones del premio se

levantará el centro cultural, porque los muchachos están estudiando música, pues no quieren ir a las bandas armadas, sino a las de la trompeta. Esto es digno de todos los aplausos y reconocimientos. Pero, sobre todo, merece que los violentos respeten la tenacidad y el valor de esta comunidad. **Que entiendan que sus armas no pueden dañar más futuros ni los deseos de querer vivir en paz.** Y que el Estado no los deje solos.
editorial@eltiempo.com.co

Titulo: **Timonazo innecesario**

Palabras Clave: **EDITORIAL**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-18**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Fecha Publicacion: **02/12/2009**

Pagina: **18**

Texto:

La reciente publicación del informe anual de la Corporación Nuevo Arco Iris sobre el conflicto armado despertó una aguda polémica sobre el estado de la política clave del presente Gobierno. Desde su título, ‘¿El declive de la seguridad democrática?’, el reporte de la ONG sostiene la tesis de que la actual estrategia llegó a tocar un techo y que, en palabras de su director, León Valencia, “es urgente un cambio que parta de reconocer los nuevos desafíos”.

Dicho argumento se basa en afirmar que, a pesar de los éxitos militares de los últimos años, el país se encuentra ante la reactivación de las Farc; la pérdida de iniciativa de las Fuerzas Armadas; la extensión por todo el país de una nueva generación de paramilitares; las grandes ciudades como campos de batalla (en especial, el deterioro en Medellín y el cerco neoparamilitar a Bogotá), y el renacimiento del ELN en alianza con narcotraficantes. En conclusión, un sombrío panorama que marcaría el agotamiento de un modelo que es apoyado por buena parte de los colombianos.

Inevitablemente, revelar un estudio con estas conclusiones en plena campaña electoral se presta para suspicacias de lado y lado. Sin embargo, esto no justifica calificar de “idiotas útiles” a los medios que abren sus páginas para que la discusión se lleve a cabo o cuestionar a los autores del trabajo mencionado. La razón es que siempre será sano y necesario el debate de las políticas gubernamentales.

Sin lugar a dudas, el 2009, en materia de balance militar contra las Farc, ha sido menos espectacular que el año anterior. Para comenzar, no ha habido golpes únicos como la ‘Operación Jaque’ o la caída de miembros del secretariado. Además, es notorio el incremento del accionar guerrillero en zonas como Cauca y Nariño.

Pero ese criterio puede ser simplista. Que la guerrilla aumente su actividad de minado o que use francotiradores son acciones que para diversos especialistas son una evidencia de un forzado repliegue y no una muestra de fortaleza. También es necesario introducir en el análisis las deserciones, capturas y demás golpes a su estructura de mandos medios.

Derivar de ahí, entonces, que hay que modificar de inmediato la estrategia de los últimos siete años es convertir en contundente conclusión una serie de indicios. Ni sumando los indicadores disponibles la situación llega a los niveles del 2002, cuando comenzó la marcha de la política de seguridad democrática. Las estadísticas al respecto son irrefutables, tanto desde el punto de vista de homicidios y secuestros, como del de tomas de poblaciones o ataques a la infraestructura.

Eso no desconoce que las nuevas bandas y su expansión urbana requieren una estrategia, en la que el Ministerio de Defensa ya empezó a trabajar. Sin estructura nacional unificada ni apuesta antisubversiva, es difícil sostener que estos grupos son las Auc con otro nombre. El país enfrenta enemigos que, si bien tienen nexos con el pasado, manejan otras dinámicas e incentivos y requieren otro enfoque. Así mismo, su accionar en las capitales debe ser abordado como lo que es: una problemática de criminalidad más cercana a la delincuencia común que a la paramilitar. Por otra parte, las preocupaciones militares, financieras y estratégicas que el informe resalta configuran los nuevos desafíos de la política de seguridad para el 2010. No obstante, reconocer los factores de riesgo no significa compartir las recomendaciones. Dicho de otra manera, los análisis hechos por Arco Iris no justifican el timonazo sugerido, aunque son un aporte valioso al debate público. El motivo es que hay que aceptar que los retos son dinámicos y que será necesaria una evolución de los métodos ensayados, sin que ello implique calificar lo sucedido en el pasado como un fracaso, cuando en realidad se trata de una historia exitosa.

A pesar de un 2009 menos espectacular en la lucha contra la guerrilla, la seguridad democrática sigue siendo una política exitosa.

Titulo: **La condena de Salvador Arana**

Palabras Clave: **CONDENA;CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

Estado: **Finalizado**

Pagina de Bogota: **1-26**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **05/12/2009**

Pagina: **26**

Lead: **El jueves pasado, la Corte suprema de Justicia sentenció a 40 años al ex gobernador de Sucre Salvador Arana por el asesinato de Eudaldo Díaz, ex alcalde de El Roble. De acuerdo con la sala penal del alto tribunal, Arana “generó” en ‘Cadena’, el entonces jefe paramilitar en esa región costeña, “la definitiva resolución” de cometer el homicidio del mandatario municipal.**

Texto:

Este particular caso conmocionó al país después de que la víctima, Eudaldo Díaz, alertó públicamente en un consejo comunal televisado, en marzo del 2003, que dirigentes políticos sucreños y los grupos paramilitares querían atentar contra su vida. “A mí me quieren matar”, le dijo al presidente Álvaro Uribe en Corozal. Un mes después, ‘Cadena’ citó al dirigente del Polo en una finca, lo desapareció y lo mató. Este fallo abre un importante precedente en los procesos contra los ‘parapolíticos’ que la Corte viene investigando: los líderes regionales que hicieron pactos con los cabecillas paramilitares tienen corresponsabilidad con los brutales actos que estos últimos cometieron en sus zonas de influencia. La sentencia, además, ordena una nueva investigación contra el ex gobernador Arana acerca de su papel en una serie de asesinatos, desplazamientos y otros crímenes de guerra que se han atribuido a las autodefensas de ‘Cadena’ y ‘Diego Vecino’. A esto se añade la decisión del alto tribunal de enviar copia del fallo a la Corte Penal Internacional. Los ‘parapolíticos’ estarían enfrentando investigaciones sobre delitos de lesa humanidad.

Por ser la primera sentencia que la Corte suprema profiere desde que reasumió los casos de la ‘parapolítica’ que estaban en poder de los jueces, su contenido debe ser leído con atención, ya que podría marcar la dirección que los magistrados tomarán en el resto de los expedientes. La corporación encuentra en el caso de Arana que “quienes fungían como voceros políticos legalmente reconocidos (...) realmente hacían parte de la cúpula de los grupos paramilitares”.

Tal tesis, de aplicarse en otros casos de políticos vinculados a las autodefensas, pondría a estos como miembros activos, dirigentes, planificadores y responsables de la amplia gama de crímenes atroces que los grupos de autodefensa cometieron en sus regiones. Lo que, en consecuencia, les aseguraría durísimas condenas por sus vinculaciones. Por ahora, es urgente proteger la vida de los familiares de Díaz, quienes han venido sufriendo amenazas, así como atender su llamado a que se esclarezca la situación del resto de participantes en el homicidio.

editorial@eltiempo.com.co

Titulo: **Apología del terrorismo**

Palabras Clave: **EDITORIAL;MOVIMIENTO CONTINENTAL BOLIVARIANO**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-24**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **11/12/2009**

Pagina: **20**

Lead: A principios de esta semana se llevó a cabo en Caracas un publicitado evento político, que consistió en el lanzamiento del Movimiento Continental Bolivariano (MCB), con la presencia de grupos de izquierda de 26 países, incluida Colombia. La reunión no habría pasado de ser un legítimo encuentro de militantes radicales si no hubiera sido porque en su acto de clausura la naciente organización no solo expresó su respaldo a la guerrilla de las Farc, sino que incluyó dentro de sus 11 presidentes honorarios a dos jefes subversivos: el desaparecido ‘Manuel Marulanda Vélez’ y su remplazo, ‘Alfonso Cano’.

Texto:

Esta expresión de solidaridad y de exaltación del MCB hacia las Farc –que por cinco años mantuvo su antecesora, la Coordinadora Continental Bolivariana– despertó la justa reacción del Gobierno colombiano que, por intermedio de la Cancillería, le pidió a Venezuela que aclare su posición frente a este partido político. Además, el presidente Álvaro Uribe le solicitó a la Fiscalía la judicialización de los dirigentes de esas organizaciones, que no solo apoyan a la guerrilla, sino que reciben con vítores sus mensajes.

La explicación demandada, además de justificada, es imprescindible. Sin importar las actuales tensiones diplomáticas, el régimen chavista debe definir si permite en su territorio las actividades políticas de grupos que avalan el terrorismo de las Farc. Tanto para el Estado colombiano como para la comunidad internacional, esta guerrilla ejecuta permanentemente en el país atroces crímenes y brutales actos, que han dejado una estela de sangre y muerte. Cualquier respaldo público a la subversión o elogio de sus cabecillas es una apología que merece un rechazo oficial y contundente de Colombia. Los tiempos en que las masacres y atentados –como los que perpetran las Farc contra la población civil– se confundían con las luchas de liberación nacional ya pasaron. Tanto como aquellos en que las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se hacían pasar por

“legítimas” acciones revolucionarias. La línea divisoria entre la militancia ideológica y la apología del terrorismo es hoy tan clara en el ámbito internacional, que el único camino que le debería quedar a Venezuela es tomar acciones judiciales y políticas contra los dirigentes del MCB. La alianza entre España y Francia para combatir a la banda terrorista Eta es un ejemplo de colaboración entre vecinos y de cero tolerancia con la promoción de la violencia en un país desde el territorio de otro. La libertad de expresión y la de asociación política no pueden ser esgrimidas como excusa para que este movimiento opere a sus anchas en Venezuela o en cualquier otro de los 12 países latinoamericanos donde tiene capítulos. No se trata de adelantar una cacería de brujas: Colombia, en su tradición de asilo, ha acogido a líderes perseguidos, ya sea de izquierda o de derecha. Tampoco es cuestión de silenciar las ideas radicales del MCB, sino de responder con las herramientas democráticas al llamado extremista de avalar “todas las formas de lucha”, en clara alusión al uso de las armas. En la última década, la democracia en América Latina ha dado plenas muestras de que, en paz y de acuerdo con la ley, los militantes de izquierda, aun la más radical, no solo ganan elecciones, sino que cambian las constituciones, de la mano de las mayorías. Una buena parte de la región – ya sea a nivel nacional, regional o municipal– está gobernada hoy por líderes que se autodenominan socialistas o tienen afinidad con el comunismo. No hay que ir muy lejos: los votos, y no las armas ni los golpes de Estado, han legitimado a Chávez y sus reformas. Dentro de este contexto de innegable progreso electoral, validez continental de las reglas democráticas y superación de la vía armada para llegar al poder, el fanatismo del nuevo movimiento bolivariano por los jefes de las Farc es no solo anacrónico, sino francamente peligroso.

Sin importar las actuales tensiones, Chávez debe aclarar si avala en su país organizaciones que apoyan a las Farc y sus actos violentos.

Titulo: **Calles inseguras**

Palabras Clave: **EDITORIAL**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-22**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **16/12/2009**

Pagina: **20**

Lead: Para muchos habitantes de las principales ciudades de Colombia, el 2009 ha estado marcado por la zozobra generalizada que produce la inseguridad. Sea cuestión de percepción o, como en algunos casos, de crecimiento real de los delitos, la seguridad saltó a los primeros lugares en las prioridades y preocupaciones de los residentes de las grandes capitales.

Texto:

Preocupación que se transforma en temor cuando se hacen públicos tristes casos como el vil asesinato de Carlos Alberto Rodríguez en días pasados en Cali. Este trabajador abnegado, padre de un joven nadador santandereano, encontró la muerte a manos de un atracador, que lo asaltó en las inmediaciones de las canchas panamericanas en momentos en que su hijo se aprestaba a competir. Lo más grave es que tan trágica historia está lejos de ser única: la Alcaldía de la Sultana del Valle confirmó que 116 personas han sido asesinadas por atracadores solo en el 2009. Que en las calles de las ciudades colombianas la vida valga menos que un celular, un par de tenis o un reloj, como le sucedió a Rodríguez, es suficiente motivo de alarma ciudadana. A estas muertes se suma otro gran porcentaje de víctimas de riñas, venganzas personales, porte de armas y consumo de licor. De acuerdo con el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, 75 por ciento de las muertes violentas en todo el país estaría relacionado con distintos grados de intolerancia social. Aunque las cifras de la institución indican que en Colombia se cometieron en este año unos 15.700 homicidios –el menor registro en más de 20 años–, el severo deterioro en Cali y Medellín, así como aumentos en Barranquilla, Sincelejo y Bogotá, disparan los indicadores urbanos. Entre todos los casos no hay nada más grave que lo que sucede en las capitales del Valle y Antioquia. Según Medicina Legal, a principios de diciembre Medellín llegó a 1.996 muertes y se presume que superará las 2.000 antes de terminar el año, un indicador que hace retroceder a esa urbe a tiempos pasados. En Cali, la Secretaría de Gobierno reporta 1.673 homicidios, casi 400 más que el año pasado. Si bien las dinámicas mafiosas

presentes en ambas ciudades explican una buena parte de este marcado incremento, pues mucha de la violencia se da entre delincuentes, es inevitable que sus habitantes queden en medio del fuego cruzado. Precisamente, en la Capital de la Montaña el Gobierno está desplegando una estrategia policiva y social para reducir los asesinatos: aumento del pie de fuerza, coordinación de inteligencia y de las entidades judiciales y extinción de dominio contra el microtráfico de drogas. En materia social, el presidente Álvaro Uribe anunció esta semana un programa de “servicio comunitario” para alejar de las actividades delictivas a 3.500 jóvenes de Medellín, Cali y Bucaramanga. Los resultados del despliegue en la primera son positivos: en dos meses se pasó de 72 a 32 homicidios por semana. No obstante, su impacto es aún pequeño en comparación con las dinámicas de violencia en el 2009, como lo reconoció el Primer Mandatario. Estas reflexiones no apuntan a minimizar los logros de la política de seguridad democrática, sino más bien a dimensionar de mejor manera sus retos actuales. En especial, el de los efectos de las nuevas bandas criminales en la seguridad urbana y el de las estrategias orientadas a que los habitantes de las grandes capitales recuperen la confianza. Sin subestimarlos ni sobreestimarlos, el fenómeno de las bandas criminales y su accionar en entornos metropolitanos –venta de droga, extorsión, prostitución, abastos, juegos de azar– está alterando de manera tangible las políticas de georreferenciación del crimen y concentración de pie de fuerza que en los últimos años ayudaron a bajar los índices de homicidios en las ciudades colombianas. Las estrategias policivas y sociales del Gobierno para reducir los homicidios enfrentan la dura prueba de un fenómeno complejo.

Titulo: **La verdad del infierno**

Palabras Clave: **EDITORIAL;BOMBARDEO A CAMPAMENTO GUERRILLERO**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-22**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **18/12/2009**

Pagina: **16**

Lead: **El informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, revelado ayer tras más de un año de investigaciones, revive uno de los capítulos más trágicos y controvertidos de la historia contemporánea del país. Como quedó grabado en la memoria de los colombianos, el 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 “tomó a sangre y fuego” el edificio vecino a la plaza de Bolívar y secuestró a decenas de personas, incluyendo a los magistrados de la Corte suprema y el Consejo de Estado. Luego de 28 horas de enfrentamientos con la Fuerza Pública, que desataron un infierno en la construcción, la toma terminó con un trágico saldo de 12 desaparecidos y 95 muertos, entre guerrilleros y rehenes.**

Texto:

Las conclusiones de la Comisión –conformada por la Corte suprema e integrada por tres ex presidentes del alto tribunal– describen fallas en la protección de los magistrados, la flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario por parte del M-19 y el exceso de fuerza del Ejército en la operación de retoma. El documento no solo encuentra responsabilidades en el Gobierno de la época, encabezado por Belisario Betancur, sino que insta al ex mandatario y a sus altos funcionarios a “aceptar la responsabilidad política” por el accionar militar.

Después de más de 24 años, y a pesar de múltiples libros y piezas periodísticas publicadas sobre el tema, es justo y necesario que el país conozca un recuento autorizado de la toma del Palacio de Justicia y de las atroces desapariciones y ejecuciones que le siguieron. Aunque la Comisión responsabiliza al comando guerrillero por el asalto y muestra su conexión con el cartel de Medellín, las autoridades civiles y militares del momento también tienen su cuota en lo ocurrido. El texto afirma que “nunca hubo intención real del Gobierno de tratar de salvar la vida de los rehenes” y que este “tomó la decisión de censurar” a los medios de comunicación.

Sin ninguna atribución judicial ni facultades para derivar responsabilidades individuales, esta Comisión de la Verdad ostenta un mandato “ético, académico e histórico” orientado al esclarecimiento de los confusos hechos. Aparte de resaltar el desprecio de los guerrilleros por los civiles y la Justicia en sí misma, las recomendaciones del informe sobre la necesidad de reconocer las responsabilidades políticas deberían ser adoptadas por quienes hace 25 años lideraban el Gobierno y la Fuerza Pública.

Como lo afirman los autores del reporte, un gesto en esa dirección ayudaría a cerrar tan fatídico capítulo, tanto a los familiares de las víctimas y desaparecidos, como al resto de los colombianos. Reconocer los errores del Estado en la retoma –su exceso en el uso de la fuerza, su énfasis en no dialogar y la ausencia del presidente Betancur– no implica en absoluto el desconocimiento de las atrocidades del M-19 en el asalto y la constatación histórica de la narcoalianza que lo inspiró en parte. Ningún proceso de paz podrá borrar de los ex integrantes de ese grupo el hecho de haber sido útiles a los intereses de la mafia de Pablo Escobar. Una actitud así tampoco se puede traducir en una falta de respaldo al papel de la Fuerza Pública en la lucha contra los grupos ilegales, tanto ayer como hoy. Las comisiones de la verdad son precisamente instrumentos que las sociedades emplean para aclarar y poner en blanco y negro los excesos propios de la guerra. Así mismo, son útiles para derivar de esas investigaciones las lecciones pertinentes para que tan trágicos acontecimientos no se repitan. Casi un cuarto de siglo después, las víctimas de este holocausto merecen tanto la reparación como la verdad y la administración de justicia. Y que estos tres aspectos de la memoria se reflejen en los fallos, los textos de historia, las placas conmemorativas, los restos forenses y las compensaciones a que haya lugar. Casi 25 años después las víctimas del asalto al Palacio de Justicia merecen tanto la verdad de los hechos como que se acepten las responsabilidades.

Titulo: **Un absurdo sacrificio**

Palabras Clave: **EDITORIAL;SECUESTRO DE GOBERNADOR**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-28**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **23/12/2009**

Pagina: **22**

Lead: **En la noche del pasado lunes –precisamente doce años después de la toma de Patascoy–, un comando armado de las Farc secuestró en su residencia al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar. Tras la persecución de las Fuerzas militares, los guerrilleros asesinaron canallamente al mandatario regional en un paraje rural. Este absurdo sacrificio merece la más drástica condena y ratifica los niveles de degradación en las filas subversivas.**

Texto:

El plagio y posterior muerte del político caqueteño son una acción que no tenía antecedentes recientes. Si bien en abril del 2002 las Farc privaron de la libertad al entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, quien falleció en un posterior intento de rescate en el 2003, ambos casos no son comparables. Pero, tal como ocurrió en aquella ocasión, en la presente y con su repudiable acción, que viola flagrantemente el derecho internacional humanitario y configura un crimen de guerra, la guerrilla intentó infructuosamente regresar a la agotada estrategia de secuestrar líderes políticos como arma de chantaje contra el Gobierno. Este trágico secuestro –el quinto que sufría el político de 69 años– constituye una evidencia clara de la falta de congruencia y del descaro de la cúpula subversiva. No se explica de otra manera que, al tiempo que las Farc negocian con el Ejecutivo términos para las liberaciones unilaterales de dos de los múltiples uniformados secuestrados –Pablo Moncayo y Josué Calvo–, desplieguen un operativo de plagio de un mandatario local en ejercicio. Con razón hay quienes dicen que esta es una cachetada de las Farc contra quienes, desde la sociedad civil y la actividad política, creyeron en sus intenciones de terminar con el secuestro de civiles como herramienta de presión para exigir la liberación de sus mandos medios presos en las cárceles. La decisión del Gobierno de ordenar el rescate militar de todos los secuestrados es la respuesta obvia a la abortada ofensiva guerrillera e inevitablemente enrarece el ambiente para continuar el proceso de liberación de los uniformados. El escenario ideal sería que estos jóvenes que llevan

años pudriéndose en la selva respiraran pronto el aire de la libertad y que la operación humanitaria prosiguiera de acuerdo con la petición de las familias. Sin embargo, la realidad es que el brutal asesinato del gobernador Cuéllar tira por la borda el esfuerzo de varios meses y confirma que para la guerrilla los rehenes no son más que mercancía con la que juegan a su antojo. No hay que olvidar que las Farc son y seguirán siendo las únicas responsables del bienestar, la libertad y la seguridad de los Policías y soldados en su poder. Por otra parte, el episodio muestra la capacidad terrorista de una guerrilla que está diezmada en su liderazgo, desmotivada en sus filas y desorientada en su cúpula. Subestimar su capacidad de planear secuestros de altos funcionarios y golpes militares como los de los últimos meses es un craso error que la sociedad no puede darse el lujo de cometer. Por más que el equilibrio general de fuerzas siga beneficiando al Estado gracias a los resultados acumulados en siete años, este tipo de operativos de alto impacto están orientados a agrietar el respaldo social a la política de seguridad democrática. Por ello, el Gobierno necesita arrancar el 2010 con estrategias frescas y aprendizajes necesarios para reafirmar lo ganado y recuperar el ritmo. La discusión sobre los ajustes a la estrategia empleada ya sobrepasó el contrapunteo analítico de un experto contra otro o la insinuación oficial de intereses políticos. El desafío inmediato es impedir, con reacción rápida e inteligencia, el retorno de epidemias, como los secuestros de políticos, que el país creía superadas. El secuestro y muerte del gobernador de Caquetá confirman la necesidad de ajustar la política de seguridad democrática.

Titulo: **Cine de ficción**

Palabras Clave:

EDITORIAL;VIDEO;GUERRILLEROS FARC

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-14**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **08/01/2010**

Pagina: **14**

Lead: Una verdadera oleada de indignación ha generado en el país la presentación de un documental hecho por realizadores argentinos y presentado en Buenos Aires a mediados de noviembre pasado, pero de cuya existencia no se supo hasta esta semana. El video, que tiene el título 'Farc: insurgencia del siglo XXI', muestra a varios grupos de guerrilleros con su fusil a la espalda realizando labores del campo.

Texto:

Un comandante de la organización subversiva aparece hablando de tales oficios y sostiene que se trata de producir los alimentos que esta consume, al tiempo que afirma que no cultivan coca ni marihuana. Un guerrillero raso, por su parte, le muestra a la cámara unas semillas que tiene en su mano y habla del 'cacao fariano'. En ningún momento se hace mención de prácticas mucho más usuales y siniestras, como la siembra de minas antipersonas, con las cuales el grupo terrorista deja una cosecha de sangre y muerte.

Así las cosas, no ha faltado quien diga que el documental de marras debería ser presentado en la categoría de 'cine de ficción'. Pero, más allá de la visión distorsionada que este da, no está de más hacer varias reflexiones sobre el contraste que existe entre lo que se proyecta en la pantalla y lo que pasa en la realidad. Esa diferenciación es algo que los colombianos tienen claro, como lo demostró el vil asesinato del gobernador del Caquetá a finales de diciembre, o las amenazas que recibieron hace pocos días cuatro alcaldes del sur del Tolima, al igual que el mandatario seccional, por cuenta de la guerrilla.

No obstante, en buena parte de Latinoamérica y en ciertos países de Europa, el accionar de las Farc es observado casi de manera romántica. Los aplausos que despertó el video entre el público que lo observó en Argentina son reveladores y, al mismo tiempo, preocupantes. El respaldo es equiparable a lo hecho por una organización no gubernamental con sede en Dinamarca, que se ha empeñado en recaudar dinero para enviarlo al movimiento guerrillero, a pesar de dictámenes judiciales en contra.

Resulta inconcebible que en pleno siglo XXI sea posible financiar la producción de una pieza de este estilo, cuyo objetivo es que sean bien vistas las acciones violentas contra la democracia colombiana, que han dejado miles de víctimas entre la población civil. Más todavía cuando las muestras de simpatía tienen lugar en naciones en donde las dictaduras dejaron profundas heridas que no han acabado de cerrar del todo. Sin desconocer las falencias del Estado y los abusos ocasionales de algunos de sus agentes, en Colombia existe creciente conciencia sobre el respeto de los derechos humanos, al igual que mecanismos para castigar a quienes cometen abusos. Como consecuencia del gravísimo caso de los ‘falsos positivos’, tuvo lugar una importante purga en las Fuerzas militares y están en marcha procesos judiciales que, más allá del tropiezo que constituye la liberación de varios sindicatos por vencimiento de términos, deberían desembocar en penas ejemplares.

De tal manera, es evidente que la estrategia de comunicación que impulsa el Gobierno dista de ser efectiva internacionalmente y que esta requiere un manejo mucho más hábil que en el pasado. Se trata, por supuesto, de mostrar la realidad, pero reconociendo que verdades que son obvias para los colombianos, no necesariamente son fáciles de entender para quienes viven en otras latitudes.

La responsabilidad de transmitir ese mensaje, que ojalá sea concreto, claro y sencillo, le corresponde a la Cancillería a través de las embajadas. Es deseable que en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores sea capaz de enmendar las fallas que tuvo a la hora de explicar apropiadamente el acuerdo de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, con respecto al uso de siete bases militares en territorio nacional, que tantos dolores de cabeza ha causado.

Titulo: **Cooperación fronteriza**

Palabras Clave: **COOPERACIÓN MILITAR;EDITORIAL;FRONTERA COLOMBIA ECUADOR;GOLPE FARC**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-20**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **23/01/2010**

Pagina: **20**

Lead: Tres duros golpes recibió esta semana el frente 48 de las Farc, que opera en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Gracias a la cooperación militar binacional, los militares del vecino país se enfrentaron con subversivos en Sucumbíos y ocuparon un campamento guerrillero mientras que las fuerzas armadas colombianas atacaron la sede principal de ‘Édgar Tovar’, jefe del reducto armado, en el río San Miguel, en el Putumayo.

Texto:

Si bien las operaciones fueron desplegadas por cada uno de los Ejércitos dentro de los respectivos territorios, es alentador comprobar que los buenos frutos de la recuperación de la confianza entre ambas capitales están llegando hasta al polémico y delicado campo de la seguridad fronteriza. Los golpes dados a estas estructuras guerrilleras son el resultado directo del intercambio de información e inteligencia entre las fuerzas militares de los dos países.

Además, constituyen una muestra inicial del nivel de éxito contra las Farc que esta cooperación fronteriza está en capacidad de generar en un futuro cercano. Información compartida y ataques coordinados en ambos lados de la línea divisoria podrían convertirse en poderosas tenazas que asfixien los corredores de salida, retaguardia y abastecimiento de los guerrilleros, con el fin de que les produzcan una desesperada sensación de arrinconamiento geográfico. Merecido, entonces, el reconocimiento que las autoridades colombianas le hicieron al Ejército ecuatoriano por lo sucedido. En palabras del presidente Álvaro Uribe, “eso nos ayuda mucho”.

El ministro de Defensa, Gabriel Silva, destacó así mismo que la cooperación se origina en el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas ocurrido a finales del año pasado. Tales lazos se habían roto a causa de la incursión de Colombia a territorio ecuatoriano para bombardear el campamento de ‘Raúl Reyes’ en marzo del 2008. La “hoja de ruta” establecida por los dos Gobiernos, inicialmente en Nueva York y revisada en sucesivos encuentros, ha venido confirmando en sus diversos aspectos la conveniencia de haberle dado al diálogo la oportunidad que merecía. Los avances de los últimos meses, que

incluyen el nombramiento de encargados de negocios y el desmonte parcial de las restricciones arancelarias a los productos colombianos, se complementan ahora con resultados tangibles en el combate contra el accionar guerrillero en las zonas fronterizas. Se ratifica la reciente reactivación de la Combifron –Comisión Binacional de Frontera– como un paso adelante en la generación de confianza mutua y de respeto institucional, así como el espacio propio para la reafirmación de atacar a los grupos ilegales, sin excepciones.

En medio de este nuevo ambiente, es acertada la decisión del Gobierno colombiano de asistir a la reunión de viceministros de Defensa de los 12 países de la Unasur, convocada para la próxima semana en Quito. Aunque el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ya confirmó que el sonado acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia hará parte de la agenda del encuentro, con lo cual es factible que se repitan las quejas de otros miembros, se espera que el tema no pase a mayores.

Lo sucedido en materia militar debería servir de ejemplo en otros campos para que se reactiven los programas de cooperación, esta vez con el objetivo de beneficiar a la población fronteriza, mediante el avance de programas conjuntos que abran nuevas posibilidades de desarrollo. Con la llegada esta semana de Ricardo Patiño como nuevo Canciller ecuatoriano, lo deseable sería que no se presentaran mayores cambios en la voluntad política y la disposición diplomática del vecino país de normalizar plenamente, y en un plazo ojalá breve, sus lazos con Colombia.

Titulo: **Alianza siniestra**

Palabras Clave: **EDITORIAL;ALIANZA ELN - FARC**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-14**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **26/01/2010**

Pagina: **14**

Lead: **En días pasados se han conocido más detalles del pacto político-militar entre las Farc y el ELN, al parecer suscrito en noviembre pasado. En un comunicado conjunto, las cúpulas de ambas guerrillas –el Secretariado de las primeras y el Comando Central (Coce) de los segundos– anuncian la unión de sus fuerzas para enfrentar al Gobierno de Álvaro Uribe, “el más perverso títere de los planes del imperio”.**

Texto:

A lo largo de cuatro puntos, los firmantes acuerdan el fin de los enfrentamientos entre las dos organizaciones y el rompimiento de cualquier contacto con el Gobierno. Además, identifican a Estados Unidos y las bases militares que estos usarán en Colombia como su “enemigo común”. Aunque al salir a la luz pública esta alianza fue desestimada por el Ministerio de Defensa y por la comandancia de las Fuerzas militares, sería aconsejable no perder de vista los eventuales movimientos estratégicos que provengan de tal unión, así como tener en cuenta el entorno internacional en que se está dando. Tanto las Farc como el ELN han sido golpeados en los siete años de la política de seguridad democrática. A esto se suma el alto costo de la confrontación entre ambas guerrillas en las zonas fronterizas de Arauca y Nariño. La nueva estrategia de combinación de fuerzas podría provenir de su relativa debilidad actual y de la imposibilidad de seguir manteniendo el propósito de hacerse daño militar mutuamente. Ello implicaría un potencial fortalecimiento de la capacidad de los frentes subversivos en dichas regiones.

La posibilidad de que esta alianza siniestra se traslade de las palabras de los comandantes a una fuerza conjunta Farc-ELN en el campo de batalla es considerada lejana por analistas del conflicto. Las heridas de años de confrontación mutua no son tan fáciles de borrar y los tamaños y despliegues operativos de ambas guerrillas son diversos. Además, el acuerdo no contempla la fusión de las estructuras delincuenciales, por lo que, en materia financiera, cada uno seguirá secuestrando, traficando y extorsionando en las zonas geográficas compartidas. Por último, hay experiencias previas de

unión, como la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que hace 20 años no mostró resultados inquietantes.

Sin embargo, un poderoso pegante para cimentar la improbable coalición podría surgir de los realineamientos internacionales. De acuerdo con las denuncias de las autoridades colombianas, Venezuela se ha convertido en la sede de la retaguardia de los jefes guerrilleros de ambos grupos. Más aún, en territorio vecino se llevaron a cabo los encuentros entre el Secretariado y el Coce para sellar la alianza. Asimismo, el acceso a ese país no es la única ventaja para los ‘elenos’. Por todo el territorio bolivariano está desplegado personal cubano que podría hacer fácil contacto con una comandancia guerrillera como la del Coce, cuyos orígenes históricos, inspiración ideológica, estrategia diplomática y entrenamiento militar han estado íntimamente ligados al régimen de los Castro. Por otro lado, el acuerdo de cooperación militar entre Bogotá y Washington ha servido de fermento para el renacimiento continental de la retórica “antiimperialista”. Ya sin “guerra fría” ni “liberación nacionalista” que las sostengan, las Farc y el ELN pueden encontrar en las polémicas bases el discurso internacional propicio para proyectarse como “defensores” de la soberanía y “víctimas” del intervencionismo estadounidense. En resumen, se entiende que el Gobierno se haya apresurado a minimizar el alcance de esta estrategia subversiva. Su puesta en marcha es complicada y su potencial de desequilibrio en el campo de batalla está por verse. Pero eso no significa que se pueda ignorar o que no se deban analizar sus repercusiones en todos los campos.

Titulo: **Los estudiantes informantes**

Palabras Clave: **EDITORIAL;ESTUDIANTES INFORMANTES;MEDELLÍN INSEGURIDAD**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-20**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **28/01/2010**

Pagina: **18**

Lead: Dentro del paquete de medidas que el presidente Álvaro Uribe anunció el martes pasado para combatir la inseguridad en Medellín se cuenta la polémica invitación a los estudiantes de esa ciudad a integrar la red de informantes. La meta del Primer Mandatario es que mil jóvenes antioqueños reciban una bonificación mensual de 100.000 pesos por ayudar en labores de inteligencia a la Fuerza Pública.

Texto:

Para sus defensores, la iniciativa trasladaría los éxitos de la red de cooperantes en la lucha antiterrorista a la investigación de homicidios y otras actividades delictivas en la capital de Antioquia. Con una disparada de más del 100 por ciento en el número de homicidios en Medellín, según datos de Medicina Legal, se espera que el Gobierno les apueste a abordajes poco convencionales.

No obstante, la contratación de estudiantes para estas actividades conlleva grandes riesgos, tanto en la ejecución de la medida como en el espíritu de la misma. Una cosa es la información que es capaz de proveer un desertor o un espía, inmerso ya en el conflicto, y otra la que podría generarse en las aulas de colegios y universidades. Además, no hay claridad sobre el mecanismo de selección de los eventuales miembros de la red, el procesamiento de los datos que produzcan y las reglas del uso de esa información. El peligro de terminar empleando jóvenes para crear 'falsos positivos', saldar cuentas entre bandas o desatar venganzas y retaliaciones es alto. O lo que es peor: que confundan la libertad de expresión y la diversidad ideológica, propias de un ambiente de estudios y base de la educación moderna, con un delito por denunciar.

Por otra parte, la inclusión de estudiantes como informantes del Ejército es convertir los salones de clase en un nuevo campo de batalla. Al ser compelidos a proveer datos a cambio de efectivo, los jóvenes serían forzados a entrar a la dinámica del espionaje y quedar a las puertas de la delincuencia y la extorsión. No se trata de impedirle a la Fuerza Pública el desarrollo de actividades de inteligencia en los campus para detectar

guerrilleros encubiertos, sino de hacerlo con un personal con el profesionalismo y entrenamiento militar necesarios.

Por último, no es evidente que la activación de una red de estudiantes informantes conduzca directamente a la disminución de los homicidios en Medellín o a la prevención del accionar de las bandas ligadas al narcotráfico. Dado que estos grupos son responsables de buena parte del escandaloso incremento del año pasado, lo deseable sería el despliegue de medidas puntualmente orientadas a su desmantelamiento, y no el desgaste de estrategias sin garantía de resultados.

editorial@eltiempo.com.co

Titulo: **El tijeretazo**

Palabras Clave: **EDITORIAL;PLAN COLOMBIA;RECORTE**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-16**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **03/02/2010**

Pagina: **16**

Lead: Todo indica que la ayuda de Estados Unidos contemplada en el Plan Colombia tendrá un nuevo recorte, cercano a los 55 millones de dólares. Así lo establece el proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno de Barack Obama al Congreso, que ahora enfrentará el largo trámite legislativo.

Texto:

Las reacciones han sido negativas por el nada despreciable tamaño del tijeretazo, y en medio de la campaña electoral varios candidatos y congresistas concluyeron, en forma prematura, que la disminución de la ayuda es un fracaso de la diplomacia colombiana, un castigo a los malos resultados de la política antidrogas y hasta una expresión de disgusto por la posibilidad de que haya una segunda reelección de Álvaro Uribe.

En realidad, el ajuste se veía venir. Forma parte de una tendencia de largo plazo y responde a varios factores, como la propia naturaleza del Plan Colombia, que siempre fue concebido como una ayuda temporal: su versión inicial tenía una vigencia de cinco años, que después se prolongó a diez. No menos importante es la situación actual de las finanzas gubernamentales en Estados Unidos –Obama acaba de anunciar un fuerte apretón– y el surgimiento de otras prioridades en el frente externo, como la guerra contra las drogas en México y el incremento de la presencia estadounidense en Afganistán.

También ha sido determinante la visión del Partido Demócrata, que en los últimos años ha abogado por una reducción de la cuantía militar y de su proporción frente a rubros de índole social. No por coincidencia, un grupo de senadores influyentes –con el presidente del Comité de Apropiaciones, Patrick Leahy, a la cabeza– acaba de solicitarle al presidente Obama una reducción de la ayuda. El Gobierno colombiano y la sociedad en general tienen que asumir esta tendencia de largo plazo como una realidad que obligará al país a continuar la ‘colombianización’ de algunos de los programas hasta ahora financiados por Estados Unidos.

Desde luego, el que la reducción sea inminente y explicable no significa que sea deseable ni justa. El propio presidente Obama acaba de reiterar que las

relaciones con Colombia corresponden a las de un aliado clave. Esa visión debería reflejarse en una estrategia efectiva de la Casa Blanca para superar el momento político difícil y evitar que el pulso entre demócratas y republicanos siga manteniendo en el congelador el TLC con Colombia y alimentando las presiones por mayores reducciones en la ayuda. Sobre todo cuando algunos de los rubros que van a salir más afectados tienen que ver con la lucha antidrogas y con la fumigación, campo en el que no se han cumplido las metas de erradicación, aunque los resultados mejoraron en el último año.

Será oportuna la visita programada para la próxima semana del ministro de Defensa, Gabriel Silva, a Washington para argumentar que hay una relación entre el recorte de la ayuda y los resultados, que tanto interesan a Washington, en reducción de cultivos ilícitos.

En todo caso, la política exterior tiene que asumir el cambio en el clima de las relaciones bilaterales. Es indispensable buscar otros aliados, retomar el discurso multilateral de lucha contra las drogas y evaluar hasta dónde el famoso acuerdo de cooperación militar –el de las llamadas ‘bases’– sustituirá a largo plazo la ayuda que ha llegado en la última década dentro del Plan Colombia.

Titulo: **Hay que poner la cara**

Palabras Clave: **EDITORIAL;INFORME
HUMAN RIGHTS WATCH;DERECHOS
HUMANOS COLOMBIA**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-18**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **05/02/2010**

Pagina: **16**

Lead: **Pocas veces en la historia republicana de Colombia los ciudadanos habían visto algo similar a lo ocurrido el miércoles pasado, cuando el presidente Álvaro Uribe se hizo presente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, con ocasión de un conversatorio en el que se congregaron algunos de sus más ácidos críticos. Fiel a su espíritu frentero, el Mandatario se defendió a lo largo de cuatro horas, en las que contestó a fuertes acusaciones que tuvieron que ver con el Estado de Opinión, el paramilitarismo o las políticas de su Gobierno. A juzgar por los aplausos que recibieron quienes estaban en la mesa principal, el auditorio reconoció la valentía y los planteamientos que fueron esgrimidos.**

Texto:

Contra lo que podría esperarse, todo ocurrió en medio de un clima de civilidad que habla bien de los asistentes y que debería servirles de lección al país y a más de un funcionario público. Una vez más se volvió a demostrar que es posible tratar los temas más difíciles conservando normas elementales de decoro y sin necesidad de irrespetar al adversario. Ese ejemplo es clave, justo cuando empieza a calentarse la campaña electoral y vuelven a aflorar pullas e insultos entre candidatos. También es importante que el Congreso tome nota sobre cómo los vacíos que ha tenido en su papel fiscalizador han empezado a ser llenados por ciudadanos que tienen inquietudes válidas sobre la marcha del país.

No menos importante es la actitud de Álvaro Uribe, quien, lejos de quedarse encerrado en la Casa de Nariño, no se arredra a la hora de poner la cara. Decidido a defender su obra de Gobierno, todo hace pensar que el Jefe de Estado dedicará parte de los próximos meses a eventos similares al de hace un par de días. Incluso quienes creen que las posibilidades del referendo reeleccionista son cada vez menos claras sostienen que el actual mandatario

seguirá hablando con frecuencia, aun como ex presidente, cada vez que sus políticas sean cuestionadas.

Pero antes de entrar en dichas elucubraciones, lo que vale la pena señalar es la importancia de responder bien, y a tiempo. Ojalá ese mensaje sea entendido en otras instancias del Ejecutivo, que reaccionaron con cajas destempladas a la presentación del más reciente informe de Human Rights Watch, una influyente entidad defensora de los derechos humanos con sede en Washington, que manifestó su preocupación ante un supuesto resurgir del paramilitarismo en Colombia. No es la primera vez que tal institución logra sacar de casillas a la presente administración o a las que la han precedido, pues las denuncias sobre connivencia o complicidad de integrantes de la Fuerza Pública con organizaciones criminales siempre causan encono. Sin embargo, una cosa es controvertir con argumentos las afirmaciones hechas y otra, cancelar citas a última hora. Eso fue lo que hizo el Ministerio de Defensa, que alegó la presencia de una emboscada mediática, a la que no quiso hacerle el juego. El episodio fue recogido por la prensa internacional y no faltó quien tratara de hacer un paralelo con lo sucedido en Venezuela a finales de septiembre pasado, cuando el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, fue expulsado por el Gobierno de Hugo Chávez por presentar un informe particularmente crítico. En consecuencia, es necesaria una contestación pronta y precisa. El motivo es que Colombia en general y el Ministerio en particular tienen mucho que mostrar con respecto al tema de los derechos humanos. Los manuales expedidos, las visitas de funcionarios internacionales recibidas, las rendiciones de cuentas hechas y las explicaciones ofrecidas dan fe de un compromiso serio y constante con el tema. Pero dichos progresos hay que hacerlos conocer, incluso mientras se reciben críticas que pueden parecer injustas. Porque a la seguridad democrática hay que defenderla con argumentos y no con portazos.

Titulo: **Paz de papel**

Palabras Clave: **ACUERDOS DE PAZ;EDITORIAL;BANDAS CRIMINALES**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-14**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **12/02/2010**

Pagina: **12**

Lead: **El pasado primero de febrero las organizaciones de ‘Valenciano’ y ‘Sebastián’, capos del delito en Medellín, acordaron un “pacto de no agresión”, con los oficios de la llamada Comisión por la Vida y la autorización del Gobierno Nacional. Esta semana se conoció otro permiso oficial, otorgado a la Iglesia Católica para que realice acercamientos a las bandas criminales surgidas del proceso con los paramilitares en Córdoba, Norte de Santander y Chocó.**

Texto:

Al mismo tiempo, la Policía y el Presidente de la República han reiterado que los operativos contra los grupos delictivos continúan. “El único camino que tienen es someterse a la justicia”, afirmó el Primer Mandatario hace pocos días. Esta dualidad de mensajes del Gobierno –aval a los diálogos liderados por entes privados y órdenes de persecución policial– ha enrarecido una situación peligrosamente confusa, donde no hay claridad sobre si existe una negociación en marcha, con quién y qué se está negociando y cuál es el marco legal.

Aunque Álvaro Uribe ha insistido en que no acepta “treguas entre criminales”, lo cierto es que los herederos de la ‘oficina de Envigado’ mantienen hoy en pausa su guerra interna, responsable en buena medida de la criminalidad en Medellín. Sin embargo, la capital antioqueña ya ha vivido frágiles pactos de paz entre estructuras ilícitas, que terminan rompiéndose y desatando peores ciclos de violencia. Para algunos analistas, el incremento inusitado de los homicidios que hoy sufre la ciudad –y que coincide con la actual administración de Alonso Salazar– ha sido resultado del quiebre de uno de esos estadios artificiales.

El efecto político de una tregua de estas características en elecciones es inocultable: las tasas de homicidios caen y las críticas al fracaso de la seguridad democrática en las urbes se morigeran. Cabe entonces preguntarse si los diálogos de los prelados de la Iglesia conducirán a una serie de pactos de no agresión en varias regiones del país como muestra de buena voluntad de las agrupaciones criminales. En otras palabras, los acuerdos

entre estos herederos del narcoparamilitarismo y el respiro que les dan a los ciudadanos y a las estadísticas justificarían el acceso de los nuevos capos a un generoso proceso de desmovilización y sometimiento a la justicia. Sin el incentivo de recibir un tratamiento político como el de procesos pasados, no es claro por qué un cabecilla de estos grupos estaría dispuesto a entregarse.

El problema radica en que, a diferencia de las antiguas autodefensas, estas bandas emergentes no cuentan con ninguna motivación política, ni siquiera con la excusa de la lucha contra la subversión. Tanto 'Valenciano' y 'Sebastián' como el resto de los 4.000 miembros de 'los Paisas', 'los Urabeños', 'los Rastrojos' y los demás 'combos' son delincuentes dedicados al narcotráfico, la extorsión, las redes de prostitución, los juegos ilegales y otros delitos comunes. Estos contactos están más cerca de los acuerdos con los carteles de la droga de los años 90 que con el proceso de desmonte del paramilitarismo. La confusión surge del intento del Gobierno de ganar por ambas puntas: mantiene la "mano dura" y avala contactos que temporalmente bajan la violencia urbana. No obstante, el costo de la estrategia es una ambigüedad peligrosa, que eleva las expectativas de los criminales y desestimula al aparato policial y judicial, que lucha diariamente contra los delincuentes. Ni hablar de que se genera un espacio de desinstitucionalización, que termina premiando al bandido por disparar la criminalidad.

En resumen, estas negociaciones tienen problemas en su espíritu, pues no se dan con organizaciones políticas, y en sus mecanismos, al ser pactos de no agresión entre delincuentes. Son la fórmula perfecta para una paz de papel.

La autorización a la Iglesia para hablarles a las bandas criminales genera una confusión sobre qué se está negociando y dentro de qué marco legal.

Titulo: **Sicarios en Cartagena**

Palabras Clave: **CARTAGENA
INSEGURIDAD;EDITORIAL**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-16**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **16/02/2010**

Pagina: **14**

Lead: El problema de la inseguridad en las ciudades sigue creciendo. A la polémica sobre la “tregua” entre bandas de Medellín y la red de taxistas informantes de Cali se suma el incremento del sicariato en Cartagena. En lo corrido del año se han presentado en La Heroica 29 asesinatos, perpetrados con la modalidad del matón por encargo, que condujo a tres nuevas muertes el pasado fin de semana. El problema no es nuevo: el año pasado, las víctimas llegaron a 149 y en el 2008 alcanzaron 163.

Texto:

La situación es de tal gravedad que ayer el presidente Álvaro Uribe realizó un consejo de seguridad en la capital de Bolívar para tratar la problemática local de inseguridad y criminalidad. Para las autoridades cartageneras, el control de las rutas del narcotráfico y los ajustes de cuentas estarían detrás de la disparada de este tipo de homicidios. El Corralito de Piedra se estaría convirtiendo en un campo de batalla de organizaciones delincuenciales del Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander. Este es un alarmante fenómeno para una ciudad que vive del turismo y cuya tasa de homicidios está dentro de las más bajas del país: 27 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, los atentados personales se están cometiendo en zonas de alta presencia de visitantes, como el Centro Histórico y Bocagrande.

Por más que a nivel general Cartagena de Indias mantenga niveles bajos de violencia, el impacto del sicariato en la percepción de seguridad de habitantes y visitantes no puede subestimarse. Al fin y al cabo, lo que está en juego es el dinamismo de uno de los motores más importantes de la economía de la ciudad y el futuro del destino turístico emblemático del país. Una vez perdida esa sensación de seguridad, su recuperación es lenta, costosa y difícil para cualquier urbe.

Las autoridades locales y nacionales son conscientes de esa situación. Al bloque de búsqueda recién constituido por la Fiscalía, el DAS, la Policía y la Armada Nacional se sumaron ayer los anuncios de la lista de los criminales más buscados de la capital bolivareña, la extinción de dominio

de los bienes usados por los expendedores y microtraficantes de droga, así como una ofensiva contra los promotores de juegos ilegales y los extorsionistas.

La criminalidad urbana constituye indudablemente un duro desafío a la política de seguridad del Gobierno. Cada ciudad importante del país enfrenta hoy en día dinámicas y fenómenos propios con algunos denominadores comunes: el microtráfico de drogas y los choques entre bandas criminales. Cartagena es otro territorio donde se pondrán a prueba las nuevas estrategias oficiales contra el delito.

editorial@eltiempo.com.co

Titulo: **La extradición negada**

Palabras Clave: **DIEGO
VECINO;EDITORIAL;EXTRADICIÓN
ESTADOS UNIDOS**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-14**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **19/02/2010**

Pagina: **14**

Lead: Ha creado polémica la decisión de la Corte suprema de Justicia de negar la extradición a Estados Unidos de 'Diego Vecino', jefe paramilitar de Sucre. Los magistrados consideraron que las investigaciones pendientes del cabecilla desmovilizado dentro del proceso de Justicia y Paz, por las masacres de Mapuján y Las Brisas, ameritaban frenar el pedido de Washington.

Texto:

La decisión contrasta con la que llevó a que una veintena de comandantes paramilitares hoy se jueguen su suerte en los tribunales estadounidenses. Tales entregas han golpeado inevitablemente el ritmo de avance de los procesos de verdad, justicia y reparación que esos jefes de las autodefensas enfrentan hoy en día por los delitos de lesa humanidad que cometieron. En contraste, la posición de la Corte frente al caso de 'Vecino' ratifica que los crímenes ejecutados en Colombia gozan de prioridad frente a aquellos perpetrados en Estados Unidos.

Es la segunda vez en los últimos meses que el alto tribunal evita la extradición de un comandante paramilitar con el argumento de que los derechos de las víctimas no pueden ser vulnerados. Sin embargo, el endurecimiento de los magistrados no es sorpresivo. En las más recientes extradiciones, estos habían solicitado que no se llevaran a cabo sin que finalizaran las investigaciones pendientes de los delitos investigados por Justicia y Paz.

Lo sucedido es una buena noticia para las víctimas de 'Diego Vecino' –acusado de homicidios, torturas, actos sexuales violentos y prostitución forzada–, que han ganado un tiempo valioso en su proceso de reparación. No obstante, el concepto de la Corte podría terminar enviando un peligroso estímulo a los jefes 'paras' con pedidos de extradición: mientras más se demoren las investigaciones de Justicia y Paz más se retrasará la temida entrega a Estados Unidos. En eso, las autoridades deben tener claridad en los plazos y en la evaluación de la cooperación dada por los desmovilizados, sobre todo a la hora de contar la verdad oportunamente.

En conclusión, la decisión del alto tribunal debe ser respetada y analizada

desde la órbita de lo jurídico. El mensaje al Gobierno es claro frente a la necesidad de agilizar los procesos de verdad y reparación si quiere que las solicitudes de extradición de jefes narcoparamilitares sean aprobadas en el futuro. Así mismo, es un llamado a no vulnerar el espíritu de la ley de Justicia y Paz y a garantizar los derechos de las víctimas. Esta negativa tampoco implica un rechazo al mecanismo de la extradición como herramienta jurídica de lucha contra el narcotráfico.
editorial@eltiempo.com.co

Titulo: **Cauca: frente de batalla**

Palabras Clave: **EDITORIAL;FARC ATAQUES CAUCA**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-16**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **05/03/2010**

Pagina: **16**

Lead: **En el transcurso del último mes, la guerrilla de las Farc ha intensificado de manera notoria sus actividades en el departamento del Cauca. Varios municipios, como Caloto, Jambaló, Corinto, Cajibío, Toribío, Puracé y Santander de Quilichao, han sufrido serios hostigamientos protagonizados por subversivos del sexto frente y la columna móvil 'Jacobo Arenas'.**

Texto:

La ofensiva de las Farc en esa región del suroccidente del país tiene fundamentos tanto estratégicos como financieros y políticos. La presión guerrillera sobre dicho territorio tiene que ver con la lucha por el mantenimiento de un corredor estratégico hacia los departamentos de Valle, Tolima y Huila para el tránsito de armas y droga. Además, los golpes infligidos por la Fuerza Pública a las estructuras subversivas en Cundinamarca y la región central en estos años de seguridad democrática han girado el eje de la confrontación a las zonas de los alrededores de las cordilleras Occidental y Central, que incluyen, así mismo, a Nariño y sirven de puente al Caquetá y el Putumayo.

Como pocos territorios del país, el Cauca es un verdadero microcosmos del conflicto armado, con la presencia activa de varios grupos de las Farc y el ELN y bandas criminales herederas de los paramilitares, como 'Los rastros'. También sufre las consecuencias de los fenómenos asociados a la ilegalidad, como el narcotráfico, el desplazamiento, los cultivos ilícitos, el contrabando de armas, el reclutamiento forzado de menores y el terrorismo. Todo esto en medio de una geografía difícil, habitada por unos 200.000 indígenas en más de 80 resguardos y 115 cabildos, la mayor proporción de todo el país. Estos, junto con una cuantiosa población afrocolombiana en el Litoral Pacífico, inevitablemente terminan en medio del fuego cruzado. Por décadas han sido pueblos que han vivido en carne propia la complejidad y el salvajismo de la violencia en Colombia.

No sorprende, entonces, que los mandos guerrilleros hayan decidido recrudecer la violencia en el Cauca a menos de dos semanas de las elecciones parlamentarias. Por la presencia histórica y la dificultad geográfica, a las

Farc no les queda difícil hostigar estaciones de Policía, sembrar terror con disparos indiscriminados en la Carretera Panamericana y hasta atentar contra la vida de dirigentes indígenas como Daniel Piñacué. Cada acción busca enturbiar el balance de la política de seguridad democrática –algo previsible en tiempos de campaña presidencial– y enviar un mensaje de supervivencia ante las inocultables muestras de su creciente debilidad. Por el lado de la financiación, la guerrilla necesita asegurar espacios de tránsito y abastecimiento, así como controlar zonas para sostener el negocio del narcotráfico, en el que también participan los otros grupos al margen de la ley que operan en el departamento. Según cálculos de las autoridades regionales, los subversivos dependerían en un 80 por ciento de los recursos de la droga.

El Gobierno es consciente de la trascendencia de repeler a los violentos en el Cauca. Unos seis batallones, la Tercera División del Ejército y más de 2.000 hombres han sido desplegados en una difícil confrontación. Pero, más allá del terreno militar, es urgente que se nombre rápidamente el nuevo Consejero Presidencial para el Departamento, que anunció recientemente el Ministro de Defensa en un consejo de seguridad, pues este servirá de enlace entre la región y la Casa de Nariño. En el entretanto, las Fuerzas Armadas enfrentan el importante reto de garantizar una jornada electoral pacífica en una docena de municipios de la región, donde ya los distintos observatorios han detectado un altísimo riesgo de que ocurran actos que alteren los comicios. El desafío no es fácil, pero con voluntad, preparación y recursos, las autoridades deberían lograr su cometido.

Titulo: **La paz como camino**

Palabras Clave: **20 AÑOS
DESMOVILIZACIÓN M-19;EDITORIAL**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-14**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **09/03/2010**

Pagina: **12**

Lead: **Un día como hoy, hace 20 años, los guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) firmaron en Santo Domingo (Cauca) el acuerdo de paz con el Gobierno de Virgilio Barco. Dicha desmovilización, con entrega de armas y reincorporación a la vida civil, abriría el camino a otros procesos similares con organizaciones subversivas, como el EPL, el PRT, el Quintín Lame, un sector de las autodefensas y, unos años más tarde, una disidencia del ELN: la Corriente de Renovación Socialista.**

Texto:

La trascendencia histórica de ese momento aún sigue vigente, pues constituyó el primer proceso de paz con un grupo guerrillero activo que concluyó exitosamente, no solo con el desarme de sus integrantes, sino con su posterior participación en la escena política del país. Prácticamente desde su nacimiento, ese pacto fue amenazado. Apenas mes y medio después de la firma, los paramilitares asesinaron al comandante del M-19 y candidato presidencial Carlos Pizarro. A pesar de un golpe tan brutal al esfuerzo de paz, los desmovilizados cumplieron su palabra y continuaron con su reintegro a la civilidad.

La amnistía y el indulto de los delitos permitieron a la cúpula del M-19 ser protagonista de primera línea en la transformación democrática más importante de los últimos años: la discusión y redacción de la Constitución de 1991. Los ex guerrilleros obtuvieron el 27 por ciento de los votos en la elección de los constituyentes, y su líder de entonces, Antonio Navarro Wolff, compartió la presidencia de la Asamblea Constituyente con dos figuras del bipartidismo tradicional: el liberal Horacio Serpa y el conservador Álvaro Gómez. Aunque el partido político nacido del proceso de entrega de armas tendría corta vida, un vocero suyo hoy en día encabeza un Gobierno regional –Navarro Wolff en Nariño– y otro tiene a su cargo la candidatura presidencial de la izquierda democrática –el ex senador Gustavo Petro–. A pesar del tiempo transcurrido, las lecciones y reflexiones surgidas en ese momento histórico mantienen su validez en la Colombia del 2010. La más importante es la ratificación de los acuerdos de paz como un camino, difícil

pero exitoso, en la reducción de la violencia y en la reconciliación de los colombianos. No obstante que en los últimos años la negociación ha sido vista por amplios sectores de la población y de la dirigencia política como sinónimo de debilidad estatal, la paz con el M-19 y otros grupos no solo ha sido permanente, sino que condujo al desarme efectivo de cientos de guerrilleros.

Mirar con ojos de hoy los procesos de los años 90 ha despertado en algunos preguntas sobre la justicia o la reparación de las víctimas. Sin embargo, sería injusto y tendencioso aplicar instrumentos, contextos y debates contemporáneos a una realidad pasada. El éxito del acuerdo de paz es contundente: el M-19 como organización subversiva desapareció, sus miembros se reincorporaron a la sociedad y sus líderes han sido actores del debate político por 20 años.

Las heridas generadas por sus atrocidades –el holocausto del Palacio de Justicia, entre ellas– siguen abiertas en muchos corazones, como lo comprobó la publicación reciente del informe de la Comisión de la Verdad. Pero el camino de reconciliación que se abrió hace dos décadas entre los guerrilleros y la sociedad colombiana no se ha cerrado y ha permitido que los líderes del desaparecido movimiento gocen del respaldo electoral de regiones enteras.

El debate que tuvo lugar en 1990 sobre la pérdida del sentido histórico de la lucha armada y su imposibilidad de éxito está en mora de darse entre los cabecillas de las Farc y del ELN. Solo así ellos podrán comprender que la paz negociada es el mejor camino. Y la historia reciente así lo demuestra.

Titulo: **A responder por 'Kéner'**

Palabras Clave: **DANIEL
SERNA;EDITORIAL;FUGA**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-22**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **10/03/2010**

Pagina: **20**

Lead: **La fuga de Daniel Serna, 'Kéner', jefe de sicarios de la 'oficina de Envigado', fue un escape anunciado. En dos ocasiones en el último mes, el líder de la banda de 'Los paisas' se había evadido sin permiso del domicilio donde se encontraba detenido. El pasado domingo, 'Kéner', quien gozaba del beneficio de casa por cárcel debido a supuestos quebrantos de salud, rompió el brazalete de vigilancia electrónica y se dio a la fuga. Por fortuna, este cabecilla de una de las organizaciones criminales más poderosas del país fue recapturado ayer.**

Título: **Un matrimonio fatal**

Palabras Clave:

ALIANZA;EDITORIAL;FARC;NARCOTRÁFICO

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Página de Bogotá: **1-18**

Last publication info

Publicación: **EL TIEMPO**

Edición: **NACIONAL-1**

Sección: **OPINION**

Fecha Publicación: **12/03/2010**

Página: **16**

Lead: **“La culebra sigue viva y es el narcotráfico”, fueron las palabras escuetas del general Óscar Naranjo, director de la Policía, en amplia entrevista concedida a este diario el pasado domingo. Los hechos registrados esta semana le dan la razón a quien conoce al monstruo.**

Texto:

Una vez más ha vuelto a quedar en evidencia que el comercio ilegal de narcóticos es la fuente fundamental de recursos de los grupos violentos, comenzando por las Farc y el ELN. “Están dedicadas al narcotráfico y cada vez tienen dinámicas más mafiosas”, enfatizó Naranjo. Dicho involucramiento tiene expresiones crecientes. Atrás han quedado los tiempos en los que la guerrilla cobraba una suma por permitir cultivos de coca o amapola en sus zonas de influencia, aparte de garantizarles seguridad a los mafiosos. Ahora, en cambio, las organizaciones subversivas se comportan como un cartel más, en el que abundan los capos. Así ocurrió con el abatido ‘Édgar Tovar’, jefe del frente 48 de las Farc. Los archivos del computador que le fue incautado dejan ver el mapa de rutas, negocios y alianzas que incluyen a sus antiguos enemigos a muerte: las autodefensas. Todo vale, al parecer, para incrementar el negocio, que no es solo de tráfico de drogas, sino de siembra, producción, distribución y canje por armas. Pruebas como esa dejan claro que los guerrilleros no cultivan café o yuca, como quisieron divulgarlo en un video reciente, que más bien producía irónicas sonrisas. Desde hace rato andan de la mano con cabecillas mafiosos como alias ‘Chupeta’, ‘Cuchillo’ o Daniel el ‘Loco’ Barrera, entre otros delincuentes. Demostración de este contubernio criminal es la incautación que hizo la Policía hace ocho días en Cali de 234 fusiles M-16 y AK-47, que al parecer ‘Comba’ había entrado al país para pagarle una deuda de cocaína al frente 30 de las Farc en el Valle del Cauca. **El matrimonio fatal por conveniencia entre guerrilla y narcos es un hecho y en él, triste y vergonzosamente, a veces participan los militares activos.** Ha causado repudio el video que reveló, en exclusiva, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO de la fiesta de bodas del reconocido narco Néstor

Ramón Caro, en el 2004, en el que aparecen cuatro oficiales del Ejército, entre ellos el actual agregado militar en Brasil, coronel Juan Carlos Castañeda, junto con el coronel Rodrigo Martínez, jefe del comando operativo número 18, de Arauca, donde el contrayente sentaba sus reales. Como Caro para esa época ya estaba pedido en extradición, la institución ha decidido prescindir de personas que, en el mejor de los casos, mostraron una gran falta de criterio.

En conclusión, a la serpiente hay que quitarle el veneno. Está bien que el Departamento de Estado de Estados Unidos aumente su lista de jefes de las Farc pedidos en extradición, como lo ha anunciado. También, que se siga la lucha que permita dar severos golpes, como el propinado a 'Édgar Tovar' y la incautación de 20 toneladas de marihuana fariana en Guasanó (Cauca). Todo lo anterior se suma a los hechos en los años pasados, que incluyen la destrucción de 203 toneladas de cocaína. Gracias a esa labor, la Junta Internacional de Fiscalización de la ONU (Jife) afirma que los cultivos ilícitos han caído 29 por ciento. Pero se necesitan soluciones más de fondo. No se puede desechar el camino sugerido por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, reunida en Río de Janeiro en el 2009, en la que participaron los ex presidentes César Gaviria, Ernesto Zedillo, de México, y Fernando Cardoso, de Brasil. Allí se sugirió, entre otras medidas, despenalizar la marihuana y tratar el consumo como un asunto de salud pública. Esto, además de la participación de E.U. y Europa, en busca de la reducción de la demanda. Porque, a pesar de unos 7.000 millones de dólares gastados en el Plan Colombia, la culebra sigue poniendo huevos malditos. Hay que quitarle el veneno, pero el solo camino de la represión no es suficiente.

Titulo: **Terror en el puerto**

Palabras Clave: **EDITORIAL;TERRORISMO
BUENAVENTURA**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-24**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **25/03/2010**

Pagina: **24**

Lead: En la mañana de ayer, un carro bomba con 40 kilos de explosivos detonó en el centro de Buenaventura y dejó el saldo trágico –hasta el momento de escribir esta nota– de 6 muertos y 42 heridos. Todo indica que el cobarde ataque terrorista estaba orientado a golpear la sede de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y la alcaldía municipal, que se encuentra a pocos metros. Otras versiones apuntan a que el objetivo era la Policía, ya que el automóvil fue activado al paso de una patrulla uniformada.

Texto:

Respecto a los autores del atentado, las primeras pesquisas señalarían a varias estructuras de las Farc que operan en la ciudad, como el frente 30, el frente urbano Manuel Cepeda y el bloque móvil Arturo Ruiz. La actividad guerrillera está disparada esta semana en la zona: en la ruta entre Cali y Buenaventura, subversivos armaron un retén el lunes pasado y encendieron fuego a varias tractomulas.

Sin embargo, por varios años, el puerto más importante del país sobre el Océano Pacífico ha sido eje estratégico del negocio del narcotráfico y, asimismo, ha sufrido la presencia de las viejas y nuevas versiones del paramilitarismo. Lo anterior no permite descartar a estos actores armados como posibles responsables del acto, ya que han recibido algunos golpes. Tanto guerrilleros como narcos estarían interesados en amedrentar a los funcionarios de la administración de justicia en la zona, pues dentro de los heridos se encuentran una fiscal y varios agentes del CTI de la Fiscalía. En los últimos tres años, Buenaventura y sus alrededores han sido escenario de atentados, escaramuzas e incursiones de varios grupos ilegales, que han dejado un buen número de víctimas. La vulnerabilidad del puerto en materia de seguridad quedó en evidencia y se espera que el Gobierno tome las medidas necesarias para evitar la intimidación que significa el carro bomba.

Más allá del grupo que sea identificado como responsable, las autoridades enfrentan el reto de impedir que la campaña presidencial termine ambientada por el terrorismo. En un intento fútil por demostrar trascendencia, probar supervivencia e influir en el debate político, los grupos armados pueden

estar tentados a desplegar una serie de ataques en la geografía del país de aquí a la primera vuelta. En manos de los organismos de seguridad están no sólo la protección de los habitantes de la ciudad golpeada, sino también las garantías de que los colombianos podrán elegir al próximo mandatario sin temor.

editorial@eltiempo.com.co

Titulo: **Magnitud de un drama**

Palabras Clave:

**EDITORIAL;SECUESTRADOS
FARC;LIBERACIÓN**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-24**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **25/03/2010**

Pagina: **24**

Lead: **La inminente liberación del sargento Pablo Moncayo, tras 12 años de cautiverio, y del soldado Josué Calvo, así como la entrega de los restos del mayor Julián Guevara, todos criminalmente retenidos por las Farc, ha traído de regreso la tragedia del secuestro a las primeras planas. Aunque este atroz delito sigue golpeando a la sociedad colombiana, la intensidad y expansión de tan inhumana práctica han venido disminuyendo en los últimos tiempos.**

Texto:

De modo que el debate ya no está en cuáles son las mejores herramientas policivas, de prevención y de combate contra los delincuentes. Tras décadas de sufrir este abominable flagelo, las autoridades han acumulado un acervo de conocimientos, técnicas y estrategias que, indudablemente, están dando resultados positivos a lo largo y ancho del país. Los tiempos en los que los grupos armados ilegales apresaban civiles inocentes al borde de una carretera para financiarse y despertar terror son, afortunadamente, una pesadilla del pasado. La discusión está hoy en determinar la magnitud real de este drama.

En este orden de ideas, Fondelibertad, la entidad estatal a cargo de coordinar la lucha contra dicho delito, ha venido desarrollando desde el 2008 una depuración de las bases de datos que contienen los nombres de las personas aún en cautiverio. Ese ejercicio partió de unos 3.300 secuestrados: 2.800 registrados desde 1996 y 500 reportados durante el año pasado. El tamaño del grupo fue depurado mediante diferentes mecanismos, como cruces de información con otras entidades públicas, EPS y empresas de celulares, y la sustracción de liberados y fallecidos, con lo cual la lista se redujo a 79 víctimas en el país.

Era de esperarse que la publicación de un guarismo de sólo dos dígitos despertara una polémica dentro de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con los secuestrados y sus familias. Pasar de la popularizada cifra de más de 3.000 cautivos a menos de 100 en dos años tiene toda la apariencia de constituir un juego estadístico destinado a favorecer las políticas de

seguridad del Gobierno de turno. En ese preciso sentido se han manifestado reconocidas organizaciones preocupadas por el tema, como País Libre, que no vacilan en acusar a Fondelibertad de “maquillar” los datos. Sin embargo, una lectura más cercana de las distintas metodologías de depuración empleadas en el ejercicio muestra que no se trata de cuentas alegres. Hay que partir del hecho de que la cifra real de secuestrados es difícil de determinar con exactitud científica. Además, Gobierno y ONG coinciden en que la calidad y robustez de las bases de datos anteriores al 2007 dejaban mucho que desear. A esto se añaden criterios de conteo, por ejemplo, en la clasificación de un secuestrado como desaparecido, pues se calculan en 744 los casos de este delito de lesa humanidad. Los cruces de información con empresas, alcaldías, Registraduría y Fiscalía permitieron detectar que 1.148 personas están en libertad y que 211 víctimas fallecieron. El informe reconoce, no obstante, que en más de 600 casos la información disponible no es concluyente y su estatus está por definirse. Esto conduce a la “sospechosa” reducción del 97 por ciento del flagelo en pocos años. Pero la claridad está en que la línea base de partida no era la más exacta y que, como se comprobó, se contabilizaron como secuestros casos que no lo eran. Lo anterior se combina con el despliegue de una política de seguridad que cerró algunos corredores que las guerrillas mantenían para transportar a sus cautivos. Durante el 2009 y hasta marzo de este año se reportaron únicamente 19 nuevas víctimas. Si bien la polémica es bienvenida, no ayuda que se acuse a Fondelibertad de “desaparecer” a los secuestrados. Existe una depuración de datos con criterios transparentes, los cuales deberían ser analizados con veedurías independientes. Definir el limbo de los 600 casos es asimismo prioritario para clarificar aún más el panorama de este delito en Colombia.

Titulo: ¡Libre al fin!

Palabras Clave: EDITORIAL;JOSUÉ DANIEL CALVO;LIBERACIÓN;PABLO EMILIO MONCAYO;SECUESTRADOS FARC

Estado: Finalizado

Longitud: LARGO

Pagina de Bogota: 1-20

Last publication info

Publicacion: EL_TIEMPO

Edicion: NACIONAL-1

Seccion: OPINION

Fecha Publicacion: 31/03/2010

Pagina: 18

Lead: Ayer, después de un atroz cautiverio de más de 12 años y tres meses en poder de las Farc, recuperó la libertad el sargento Pablo Emilio Moncayo. Este joven uniformado de Sandoná (Nariño), quien retornó con un inusitado y loable aplomo, se convirtió en símbolo nacional de la tragedia de los Policías y militares secuestrados por la guerrilla, tras la marcha que su padre, el profesor Gustavo Moncayo, realizó hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá por su liberación hace más de dos años. El domingo pasado terminó también el drama del soldado Josué Calvo, retenido en el Meta en el 2009 y con quien comenzó la doble entrega unilateral. Queda por concretar la promesa, hasta ahora incumplida por el grupo armado, de entregar los despojos mortales del mayor Julián Guevara.

Texto:

Que ambas liberaciones, gestionadas por Colombianos por la Paz, en cabeza de la senadora Piedad Córdoba, y con el acompañamiento de la Iglesia, representada por monseñor Leonardo Gómez Serna, y con Brasil como país garante, hayan sido llevadas a cabo sin contratiempos es una excelente noticia para sus agobiadas familias. Esta, además, ha despertado la discusión pública sobre la puesta en marcha de un acuerdo humanitario en los últimos meses del Gobierno actual. La eventual iniciativa contemplaría a los 21 uniformados que aún siguen pudriéndose en la selva, incluyendo a Libio José Martínez, secuestrado con Moncayo en Patascoy en 1997 y es ahora quien lleva más tiempo en las garras de las Farc. Aunque tanto el Gobierno como la guerrilla han suavizado sus posiciones en tiempos recientes –por ejemplo, las Farc no piden despeje y el presidente Uribe no le cerró la puerta al intercambio–, sería erróneo suponer que el regreso de Moncayo y Calvo automáticamente le da viabilidad a un acuerdo de esta naturaleza.

Por los lados del grupo armado, esta es la cuarta entrega unilateral de ‘canjeables’ que realiza desde febrero del 2009, aunque la comandancia subversiva anunció que sería la última. De hecho, fue necesario esperar más de once meses entre el anuncio de la liberación de Moncayo y su efectiva entrega. Por los lados del Gobierno, el fin de la administración implica contar con un cierre con broche de oro de la política de seguridad democrática que comprometa al sucesor de Uribe a mantenerla sin mayores

cambios. Dejar salir de la prisión a mandos medios guerrilleros sin mecanismos fuertes de verificación de sus comportamientos y en medio de una reactivación de la actividad subversiva y terrorista de las Farc en Nariño y Cauca no se correspondería con el deseo de cimentar un legado que es popular.

Esto no significa que los esfuerzos de la sociedad civil, como los de Colombianos por la Paz, hayan sido en vano. Una importante lección de las más recientes operaciones humanitarias gestionadas por este grupo es cómo la mediación de un tercero, en este caso Brasil, genera las garantías y confianza suficientes para destrabar los nudos gordianos. Este país podría recibir en su territorio a los guerrilleros canjeados y asegurarle a Colombia que no continuarán delinquiendo.

No obstante, las Farc parecen estar apuntando al próximo Gobierno con este gesto unilateral. El nuevo Presidente, aun si es elegido con el mandato de continuar las actuales políticas, no carga con los ocho años de posturas contrarias al intercambio que sostuvo Álvaro Uribe y, de hecho, un sondeo entre los aspirantes muestra que están divididos en torno al tema. Lo que esta interpretación no contempla es que, sea quien sea el siguiente ocupante de la Casa de Nariño, tendrá en sus primeras de cambio el reto de mostrar su dureza y no su magnanimidad. Resta, entonces, la desesperada invitación de los familiares de los uniformados secuestrados a que “la voluntad humanitaria se imponga sobre la política”, una petición poco probable de hacerse realidad en medio de la campaña presidencial, en los últimos meses del Gobierno Uribe y sin los secuestrados más simbólicos, como Moncayo o políticamente respaldados como Ingrid Betancourt.

Titulo: **Llega la 'paraeconomía'**

Palabras Clave:

EDITORIAL;PARAECONOMÍA

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-14**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **13/04/2010**

Pagina: **14**

Lead: La reciente captura de tres hacendados de Antioquia y Chocó, por la promoción y financiación de grupos paramilitares, podría darle impulso a la siguiente etapa de las investigaciones sobre la infiltración de tales estructuras ilegales en la sociedad colombiana. Se trata de la 'paraeconomía', nombre con el que podrían describirse los nexos monetarios, logísticos y políticos que sectores legales de varias regiones del país ofrecieron a los cabecillas de las autodefensas para la comisión de sus más atroces delitos de lesa humanidad.

Texto:

Después de un seguimiento de varios años de la Policía, la Fiscalía tiene en la mira a 19 implicados, dentro de los que se incluyen un palmicultor, un terrateniente y un comerciante de la zona de Dabeiba. Las autoridades los acusan de haber orquestado con los frentes de extrema derecha que operaban en el Urabá el asesinato de más de 500 personas, así como el desplazamiento de un número similar de campesinos y afrodescendientes. Con este destierro forzado vino la apropiación ilegal de sus tierras. La alianza de los agroempresarios de la región con el bloque 'Élmer Cárdenas' y el frente 'Pavarandó' para ejecutar a quienes estaban en las "listas negras" ha sido un secreto a voces por más de una década. Por fin, un puñado de protagonistas del brazo privado que estimuló la brutal guerra que Carlos Castaño desencadenó entre 1997 y 1998 enfrenta ahora el peso de la Ley. En años recientes, los esfuerzos de los entes investigadores del Estado colombiano se han concentrado tanto en la estructura armada de las autodefensas como en los distintos "pactos" que sus comandantes celebraron con políticos en sus respectivas zonas de influencia. Con estos acuerdos, la cúpula paramilitar aseguró la elección de congresistas y mandatarios locales cercanos a sus intereses mientras los políticos garantizaban la conservación de sus curules. Las investigaciones de dichos nexos han sido conocidas por el país como la 'parapolítica' y han conducido a decenas de parlamentarios a prisión. Sin embargo, mientras la 'parapolítica' avanza con resultados tangibles, la lentitud del castigo a la 'paraeconomía' es preocupante.

Es innegable que el poder regional y la captura de los dineros públicos, como los de la salud, no fueron la única esfera que sirvió a estas organizaciones armadas ilegales para consolidar su régimen de terror. Empresarios, terratenientes y hasta multinacionales pagaron por protección y encargaron a las autodefensas de la macabra tarea de asesinar campesinos y líderes sindicales. Así mismo, muchos desplegaron un sistemático despojo de cientos de miles de hectáreas y el usufructo de las mismas en actividades como la minería, la ganadería, la agroindustria, los cultivos ilícitos y la explotación maderera.

Es, por lo tanto, hora de abrir una nueva fase en la búsqueda colectiva de la verdad de los vínculos íntimos de los paramilitares con el sector privado y de conocer cómo prestantes y reconocidos miembros de la sociedad crearon alianzas con estos Ejércitos ilegales no sólo para financiar sus sangrientas actividades sino también para impulsar sus negocios e inflar sus ganancias. No se puede olvidar que dar una lista de posibles víctimas a unos asesinos o robarles los predios a unos campesinos pobres debe ser considerado tan criminal como haber apretado el gatillo.

La Policía, de la mano de la Fiscalía, ha desarrollado una serie de 15 seguimientos que cubren el Urabá antioqueño y chocono, así como otras regiones ubicadas en Meta y Caquetá. Y hay que seguir. Los procesos de la 'paraeconomía' no pueden detenerse y las autoridades deben contar con el total apoyo de la sociedad, para que esta olla se destape. Así sucedió con los 'parapolíticos', los paraempresarios tienen en su haber miles de atroces delitos a los que deben responder.

Titulo: **Fondos insuficientes**

Palabras Clave: **EDITORIAL;REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-24**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **02/05/2010**

Pagina: **26**

Texto:

A principios de esta semana, unas 10.000 personas se congregaron en el coliseo Carlos Mauro Hoyos de Medellín para averiguar si su solicitud de reparación por vía administrativa como víctimas del conflicto había sido aceptada. Estas largas filas por varios días en la capital antioqueña son sólo una pequeña muestra de los más de 316.000 colombianos que hasta el pasado martes habían registrado sus formularios en la Agencia Presidencial de Acción Social.

La reparación es un componente fundamental dentro del proceso de Justicia y Paz con los grupos paramilitares. Además de no continuar delinquir y de decir la verdad acerca de los crímenes cometidos, los desmovilizados tienen la obligación de entregar bienes y dinero a un fondo estatal si pretenden penas de prisión más benevolentes. De este Fondo de Reparación saldrían los billonarios recursos para cumplir con la obligación económica que el Estado colombiano tiene hoy con cientos de miles de compatriotas que han sufrido los vejámenes de la guerra.

El problema radica en que, tras cinco años de la desmovilización y del proceso de paz con las Autodefensas, este fondo nacional reporta la lamentable cifra de 33.000 millones de pesos en bienes entregados por los paramilitares: un poco más de 9.000 millones en efectivo y propiedades que al monetizarse alcanzarían otros 24.000 millones.

* * * *

Una rápida mirada a las actas públicas del Fondo refleja la escandalosa discrepancia entre el poder económico que detentaron algunas de las cabecillas más reconocidas del paramilitarismo y las irrisorias sumas que han entregado para efectos de la reparación. Por ejemplo, todo el bloque Norte de las Auc reporta una volqueta, tres camionetas y siete motocicletas; 'don Mario', 200 millones de pesos en efectivo, y Luis Eduardo Cifuentes el 'Águila', otros 205 millones en varios cheques. Y aunque otros jefes como Salvatore Mancuso y 'Jorge 40' han registrado varios predios y casalotes en sus antiguas zonas de influencia, el monto sigue siendo muy pequeño en comparación con los multimillonarios flujos de recursos por las actividades

criminales, especialmente el narcotráfico, que estas estructuras delictivas manejaron por varios años, así como las grandes extensiones de tierra que consiguieron acumular tras años de guerra.

No se puede olvidar que estos bloques paramilitares traficaron con estupefacientes; se apropiaron de incontables hectáreas de las tierras más fértiles y productivas del país; cobraron extorsiones y “cuotas” de protección en distintas regiones; capturaron las rentas públicas de muchos municipios en áreas como la salud y las obras públicas; controlaron los negocios de los juegos de azar, la prostitución, el contrabando, el lavado de dinero y el robo de gasolina. El desequilibrio entre el desmonte tangible de los aparatos militares y la vitalidad de esas antiguas estructuras financieras en manos de nuevos cabecillas es uno de los lunares del proceso de desmovilización.

* * * *

Una razón que esgrime Acción Social para una cifra tan baja es la imposibilidad de aceptar cualquier bien que los postulados de Justicia y Paz quieran entregar. Algunas propiedades enfrentan líos administrativos –hipotecas, embargos y problemas de titulación–, otras requieren de mantenimiento y administración. Sin embargo, varios años de proceso es un lapso razonable para que las entidades estatales encargadas de financiar la reparación de las víctimas hayan diseñado mecanismos más expeditos y eficientes para traducir los bienes de los ‘paras’ desmovilizados en recursos para este fondo. De no acelerar estas entregas y aumentar ostensiblemente sus montos, el Estado se verá en la onerosa obligación de continuar destinando del erario público la gruesa parte de los varios billones de pesos que se calcula costarán estos pagos graduales a las víctimas. A marzo de este año, Acción Social ya había entregado un billón. Esta reparación individual por vía administrativa dista mucho de ser un proceso sin críticas. Voces autorizadas reclaman un mayor énfasis en la rehabilitación, la restitución y las garantías para la no repetición. No obstante, sobre el Gobierno pesa hoy la inmensa responsabilidad de recordarles a los jefes ‘paras’ que la reparación es una de las condiciones a las que se comprometieron en el proceso. Las cifras del Fondo de Reparación para las Víctimas tienen que reflejar de manera más coherente los niveles de riqueza y de poderío económico que el paramilitarismo desplegó en sus años de apogeo y que financiaron sus atrocidades. Esto también hace parte de la justicia y de la paz.

editorial@eltiempo.com.co

Los escasos bienes entregados por los paramilitares para compensar a las víctimas no se equiparan con el poder económico que ejercieron.

Titulo: **El General y la Corte Penal**

Palabras Clave: **CORTE PENAL INTERNACIONAL;EDITORIAL;PROCESOS FALSOS POSITIVOS**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1 - 28**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **08/05/2010**

Pagina: **26**

Lead: El pasado lunes, el general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares, reaccionó ante un informe de EL TIEMPO que registraba que los procesos de los ‘falsos positivos’ habían entrado a la lista de asuntos colombianos a los que la Corte Penal Internacional les está siguiendo la pista. “Hay que creer en la justicia colombiana –dijo el alto mando militar–. ¿Cómo así que tenemos que acudir a una justicia internacional para que nos aclare la situación?”.

Texto:

Estas declaraciones del máximo jefe de los militares levantaron polvareda, como era de esperarse. Para algunos críticos, el general Padilla estaría negando la jurisdicción del alto tribunal internacional o deslegitimándola. Ante la magnitud y características brutales de estas ejecuciones extrajudiciales, más de 1.150 según la Fiscalía, la sensibilidad sobre estos procesos es naturalmente alta. Mucho más si proviene de la jerarquía del estamento militar, cuyos miembros se encuentran procesados como presuntos responsables de estos delitos de lesa humanidad.

Por ese motivo, es importante revisar al detalle no sólo las palabras del General, sino también la actitud que las Fuerzas Armadas y el Gobierno han tenido frente a estas atrocidades. La invitación de Padilla está orientada a dejar que los procesos judiciales surtan su curso dentro de la justicia ordinaria. No debería sorprender a nadie que el Comandante de las Fuerzas Militares haga un llamado a la confianza en el aparato judicial colombiano y destaque el profesionalismo de sus jueces. Más aún cuando el Gobierno y la cúpula castrense decidieron hace más de tres años que este tipo de acusaciones criminales contra uniformados fueran del resorte de la Fiscalía y no de la Justicia Penal Militar.

Para algunos familiares de las víctimas, los procesos judiciales de los ‘falsos positivos’ no van a la velocidad adecuada. Las circunstancias de los crímenes alimentan una entendible desconfianza frente al Estado, y la justicia internacional se proyectaría ante sus ojos como una opción más transparente. Pero lo primero es que los jueces nacionales impartan sus

fallos bajo el imperio de la ley colombiana. De presentarse anomalías o flagrantes injusticias, el espacio para una intervención internacional ganaría terreno.

Y en eso precisamente consistieron las declaraciones del general Padilla. Un importante apoyo en el desafío de administrar justicia en este escándalo es, sin duda, que el máximo militar confíe en esas instituciones y acate sus decisiones.

editorial@eltiempo.com.co

Titulo: **Un giro inconveniente**

Palabras Clave: **CORTE SUPREMA;EDITORIAL;NEGACIÓN EXTRADICIONES ESTADOS UNIDOS**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-20**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **13/05/2010**

Pagina: **20**

Lead: **Con la reciente decisión de la Corte suprema de negar el envío del jefe paramilitar Freddy Rendón a la justicia de Estados Unidos, queda confirmado el giro de postura del alto tribunal en materia de extradiciones. Lo que comenzó en agosto del año pasado como una determinación excepcional, después de que la misma corporación autorizara la entrega de 14 ‘paras’ en el 2008, se ha convertido en una doctrina de hecho, que ha cobijado tanto a cabecillas de las autodefensas como a guerrilleros de las Farc.**

Texto:

Los fallos de los magistrados se centran en el concepto de que acusados como alias el ‘Alemán’ y su hermano Daniel Rendón, ‘don Mario’, deben cumplir con las condiciones previstas en la Ley de Justicia y Paz antes de enfrentar cargos por narcotráfico en cortes estadounidenses. Para la Corte, de ser autorizadas las extradiciones de estos dos sindicados, así como de ‘Diego Vecino’ y el ‘comandante Chaparro’, se vulnerarían los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas por los delitos de lesa humanidad cometidos en suelo colombiano. Además, los magistrados le dan un carácter prioritario al juzgamiento en instancias nacionales de los crímenes atroces cometidos por los desmovilizados y que incluyen desapariciones, torturas y homicidios de personas protegidas, por encima de los cargos por drogas, investigados en el extranjero.

A primera vista, la decisión de defender a las víctimas del conflicto interno no tendría mayores reparos. Sin embargo, al frenar la extradición, los supremos jueces amenazan con descarrilar uno de los instrumentos jurídicos más poderosos con los que cuenta el Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, el Gobierno de Álvaro Uribe ha repotenciado esta arma, tan temida por las organizaciones delictivas, con más de mil nacionales entregados a la justicia de Estados Unidos. Quienes critican la “masificación” de la extradición y su supuesta “politización” ignoran que ambas guerras, contra la droga y contra los grupos alzados en armas, se encuentran hoy intrínsecamente ligadas. Cabecillas paramilitares y jefes guerrilleros violan la ley de manera

indiscriminada. No se trata de equiparar los delitos asociados al narcotráfico con las atrocidades. Los tratados internacionales son claros en la identificación y tipificación de las acciones que clasifican como de lesa humanidad y ningún gobernante puede unilateralmente cambiarlas. La cuestión es reconocer la realidad mixta del conflicto colombiano, en el que estas actividades criminales se confunden y entremezclan cada vez más.

Otra razón que gravita tras el giro jurídico de la Corte está relacionada con las dificultades para las autoridades nacionales de proseguir con los procesos de Justicia y Paz de los narcoparamilitares extraditados. En este punto cabe preguntarse si la presencia física de los victimarios genera automáticamente un ritmo más rápido en la reparación. Lamentablemente, por otros motivos más estructurales, los casos en general no avanzan satisfactoriamente. Por ende, negar sistemáticamente estas extradiciones no es la vía que garantiza el cumplimiento de los acuerdos previstos en la ley. Conductos más expeditos entre Bogotá y Washington, así como mecanismos de cooperación judicial más integrales entre ambos Gobiernos, podrían asegurar simultáneamente el respeto de los derechos de las víctimas y el mantenimiento de la herramienta de la extradición como poderosa arma en la lucha antidroga. Ante esta nueva doctrina de la Corte suprema, lo mínimo que habría que esperar sería que los ‘paras’ y guerrilleros, hoy protegidos de las cortes de Estados Unidos por su vinculación a Justicia y Paz, sean en poco tiempo los símbolos de la reparación. Eso está por verse.

Titulo: **Los niños del Cauca**

Palabras Clave: **EDITORIAL;ATAQUE FARC CAUCA**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-14**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **17/05/2010**

Pagina: **14**

Lead: El jueves pasado, en Siberia (Cauca), uno de los pueblos que ha sido martirizado por las Farc en esa zona del país, en medio de una calle de honor formada por 650 niños sollozantes, compañeros del colegio Los Comuneros, se fue para siempre el pequeño Juan Pablo Chicangana, a quien la guerrilla apenas le dejó disfrutar cinco años de su vida.

Texto:

Juan Pablo fue víctima de esas bombas hechizas, o ‘tatucos’, que las Farc lanzaron contra la estación de Policía de la localidad. Como siempre, sin reparar en niños, jóvenes ni viejos, pues en derechos humanos la guerrilla no se detiene a pensar. Lo exige, pero no los practica. En el atentado resultó gravemente herida la madre del menor, la concejala Luz Marina Patiño, que no pudo despedir a su ángel en el campo santo, porque estaba en el hospital.

El sacrificio de menores por parte de las Farc es tan cruel como viejo. El pasado 24 de marzo, en otro acto miserable, que no fue suficientemente condenado, el frente 29 de esa agrupación, en El Charco (Nariño), engañó a un niño de 12 años que salía de la escuela para que llevara un paquete a la estación de Policía. Resultó ser una bomba que, cuando el menor apenas llegaba a las puertas, fue detonada a distancia. El pequeño murió y dos Policías y tres civiles resultaron heridos.

Las Farc no sólo siguen reclutando niños, especialmente en Guaviare y Cauca, a los que utilizan, según el Ejército, para que hagan labores de inteligencia, sino que los están usando como carne de cañón. Fuentes oficiales calculan que unos 73 jóvenes, especialmente pertenecientes a cabildos indígenas, que fueron reclutados a la fuerza recientemente, se hallan en el sexto frente y en la columna móvil Jacobo Arenas, distribuidos en 12 municipios del norte y sur del Cauca.

Una, mil, y las veces que sean necesarias, hay que exigirles a las Farc que, por lo menos, dejen por fuera de su brutalidad a los niños. El pequeño Juan Pablo se agrega a la lista de víctimas este año en el Cauca: ocho Policías, tres militares y doce civiles. Todo porque les interesa cuidar, a sangre y

fuego, sus cultivos ilícitos, especialmente de marihuana. De allí se calcula que sale el 95 por ciento de esa droga que se mueve en el país. El Ejército y la Policía están haciendo una labor titánica, con aumento de pie de fuerza. Y es vital que cuenten con el resuelto respaldo de la comunidad, a la que la guerrilla le interesa amedrentar. Pero no lo lograrán, más cuando les están matando a sus pequeños. La tarea de erradicar a las Farc y sus cultivos de allí es fundamental. De ello depende la vida de miles de familias. Pero en especial de los niños.

editorial@eltiempo.com.co

El mejor candidato

Autor: **RAVILA**

Estado: **Pendiente**

Longitud: **LARGO**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **23/05/2010**

Pagina: **38**

Texto:

Dentro de una semana, 30 millones de colombianos tendrán la oportunidad de participar en las elecciones en las cuales se definirán ya sea el próximo Presidente de la República o los nombres de los dos finalistas que se enfrentarán en una segunda y última vuelta el 20 de junio. Ese momento crucial ocurre después de una campaña atípica, que acabó siendo más corta de lo normal debido a la incertidumbre que rodeó durante varios meses la suerte del referendo reeleccionista. Pero, así y todo, es necesario decir que el tiempo fue suficiente para contrastar estilos y personalidades, lo cual hace pensar en la conveniencia de que, en futuras contiendas, el cronograma se restrinja a un lapso más corto, inferior en todo caso al año que tradicionalmente se emplea en estos asuntos.

A lo largo de la campaña, los electores han tenido amplias oportunidades para comparar los distintos programas hechos por quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño. El análisis de las propuestas deja claro que el abanico de candidatos es de muy alta calidad y que, más allá de sus diferencias en temas puntuales, todos han estudiado a fondo los problemas nacionales. En contraste con lo que ocurre en otros países de América Latina, los postulantes a ocupar la Presidencia no han sido dados a las posiciones extremas ni a las soluciones irrealizables. El populismo, tan en boga en otras latitudes, ha brillado por su ausencia.

Sin embargo, en medio de la categoría notable de ese grupo, es necesario escoger a una persona que, según el albedrío de cada uno, les garantice un mejor futuro a esta nación y a todos y cada uno de sus más de 45 millones de habitantes. En el caso de EL TIEMPO, ese ejercicio nos lleva a apoyar el nombre de Juan Manuel Santos, quien representa al partido de 'la U', como futuro sucesor de Álvaro Uribe.

Los fundamentos de esa determinación son varios. En primer lugar, Santos tiene una valiosa experiencia como servidor público, que complementa una brillante preparación académica y un exitoso tránsito por el sector privado. Su desempeño en los ministerios de Comercio, Hacienda y Defensa lo ha

capacitado en tres áreas que son trascendentales para garantizar que haya prosperidad, empleo y desarrollo social y que la paz sea un anhelo cada vez más cercano. En segundo término, su nombre asegura que haya continuidad con un Gobierno que ha sido exitoso y que el próximo 7 de agosto entregará un balance muy diferente del que recibió en el 2002. Esa promesa de mantener el rumbo es imprescindible, como también lo es la de poder introducir, con toda la legitimidad, correctivos en lugares en donde son necesarios ajustes importantes.

A su favor, Santos tendrá significativas mayorías en el Congreso, que deberían permitir el paso de reformas en diversos sectores, los cuales van desde los asuntos tributarios hasta los de la salud. El amplio espacio para gobernar es clave en un país en el cual el Legislativo debe hacer uso de su independencia para ejercer las labores de control que le asigna la Constitución, pero también ser capaz de trabajar con el Ejecutivo en el examen de las distintas iniciativas que pongan a su consideración.

Además de los elementos de preparación, continuidad y gobernabilidad mencionados, es imposible pasar por alto uno subjetivo. Como es bien conocido, Juan Manuel Santos tuvo una larga e ilustre carrera en EL TIEMPO, el diario que perteneciera a su familia y del cual fue socio hasta hace poco. Fue en esta casa periodística donde, aparte de merecidos galardones a su tarea reporteril, se ganó el respeto y admiración de cuantos laboraron a su lado. Es precisamente porque conocemos de primera mano su capacidad de trabajo, su honestidad sin tacha, su inteligencia y su compromiso indeclinable con Colombia, por lo que recomendamos su nombre sin ambigüedades.

Por tales razones, no nos cabe duda de que el candidato de 'la U' también sabrá escuchar la voz de inconformismo de los ciudadanos que no desean que todo siga igual. Hay en el país demasiada corrupción, desigualdades y violencia, que son al tiempo causa y efecto de nuestros principales males. Es necesario, por lo tanto, introducir un cambio para acabar de una vez por todas con la politiquería y castigar de manera ejemplar a quienes se enriquecen con las arcas públicas. Asimismo lo es el promover políticas para generar empleos formales y dirigir la acción del Estado a sacar de la pobreza y la miseria a millones de personas que demandan un futuro mejor. No menos importante es mejorar la seguridad en las ciudades y buscar la paz como propósito indeclinable.

Hecha esa declaración, es indispensable reiterarles a nuestros lectores el profundo respeto que nos merecen quienes escojan otras opciones, tal como ocurre en los sistemas democráticos. Por ese motivo, desde el comienzo mismo de la campaña hemos buscado informar al público de manera eficiente y oportuna, cubriendo en forma equilibrada a los diferentes candidatos en su quehacer diario. Todos ellos han podido, además, expresar directamente sus opiniones en estas páginas editoriales, al tiempo que los columnistas habituales y ocasionales han manifestado sus preferencias dentro de la más amplia libertad. Así ha sido y así seguirá siendo, sin importar el veredicto de las urnas el próximo domingo.

Titulo: **Palma, tierra y víctimas**

Palabras Clave: **EDITORIAL;REPARACIÓN VÍCTIMAS**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-14**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **25/05/2010**

Pagina: **14**

Lead: La semana pasada se presentaron dos hechos que reflejan cada una de las caras de la moneda en la lucha por la reparación de las víctimas del paramilitarismo. Hace ocho días fue asesinado Rogelio Martínez, líder de los campesinos desplazados de la finca 'La Alemania', en San Onofre (Sucre), mientras que el pasado jueves la Fiscalía ordenó la captura de 24 palmicultores por el desplazamiento forzado de los habitantes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó.

Texto:

Martínez era uno de los propietarios de varios predios –con un área total de 500 hectáreas–, adjudicados por el Incoder en 1997 en los Montes de María. Poco después, el grupo de alias 'Cadena', jefe del bloque paramilitar de la región, desalojó a punta de terror y masacres a más de 50 familias de la finca y estableció ahí una base de operaciones de su escuadrón de la muerte. Una larga y sangrienta estela de 15 campesinos asesinados ha dejado la lucha de estos propietarios por regresar a 'La Alemania'. Rogelio Martínez, representante legal de los desplazados, venía enfrentando una serie de amenazas contra su vida, que se materializaron hace una semana. El temor no termina: en su sepelio, el viernes pasado, los asistentes denunciaron intimidaciones.

La trágica muerte de este agricultor no es la primera de la ya sistemática eliminación de líderes de víctimas que los herederos y reductos de los paramilitares han venido desplegando en años recientes. Cabe recordar a Yolanda Izquierdo, dirigente comunitaria de Córdoba asesinada en julio del 2007; a otros seis labriegos del Urabá antioqueño y chocoano; a Ana Isabel Gómez, de los desplazados de 'Las Córdobas', y a muchos otros sacrificados por buscar la restitución de sus tierras, que les robaron los grupos armados. En una doble victimización, sus voceros están encarando una desigual e injusta batalla contra el despojo, que pagan con su vida. Por más resultados que el Gobierno pueda mostrar en otras áreas de la reparación y

la verdad, la devolución de parcelas a los desplazados por la violencia paramilitar registra no solo un balance lamentable, sino un recrudecimiento de la violencia contra las organizaciones de campesinos.

La otra cara de la moneda la ofrece la decisión de la Fiscalía de apresar a dos docenas de empresarios de la palma por su presunta responsabilidad en el destierro de varias comunidades afrocolombianas en Chocó. Se calcula que en esta acción fueron desplazadas forzosamente unas 15.000 personas. En alianza con cabecillas 'paras', estos "hombres de negocios" ocuparon las tierras abandonadas por el miedo y las sembraron con cultivos de palma africana. Cuando los legítimos dueños regresaron, los proyectos agroindustriales estaban construidos en sus antiguas fincas, cultivos y viviendas. A pesar de contar con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Estado colombiano que reconocen la propiedad de los terrenos, quienes salieron no han podido retornar y varios de sus voceros han sido asesinados, tal como les sucedió a los de 'La Alemania'.

Que los entes investigadores empiecen a procesar a quienes hicieron negocio con el dolor de las víctimas es un paso adelante. La 'paraeconomía', que comprende los nexos entre empresarios y 'paras', debe destaparse con tanta celeridad y contundencia como los procesos contra los políticos. El país debe enfrentar e identificar a aquellos que desde el sector privado financiaron o se enriquecieron con el terror de las autodefensas. Pero, antes que cualquier cosa, es perentoria la protección física de los líderes de los desplazados y las garantías y apoyo estatales para que puedan readquirir lo que les robaron. **Sin agilizar la restitución activa de tierras ni profundizar en los 'paranegociantes', la justicia, la verdad y la reparación quedarán incompletas.**

Titulo: **El sistema hace agua**

Palabras Clave: **EDITORIAL;TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **18**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **13/06/2010**

Pagina: **18**

Lead: La escena del pasado jueves en la noche, cuando el Presidente de la República apareció en las pantallas de televisión acompañado por el Ministro de la Defensa y los altos mandos militares y de Policía, es la demostración fehaciente sobre el fuerte remezón que ocasionó la sentencia en contra del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, dada a conocer pocas horas antes.

Texto:

Como es sabido, la jueza María Stella Jara condenó al ex militar a 30 años de cárcel, al considerarlo culpable de la desaparición de 11 personas que salieron con vida de los restos humeantes del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

Por su severidad, como por la solicitud de reabrir investigaciones en contra del ex presidente Belisario Betancur y de quienes estaban a cargo de las Fuerzas Armadas en la época en que ocurrieron los hechos, el fallo tiene serias implicaciones que superan el campo penal individual, pues sus repercusiones también son políticas e institucionales. Tanto, que el próximo Gobierno deberá adentrarse en el tema con el fin de revisar a fondo un esquema que hoy evidencia fallas profundas. Solo así se podrá cumplir el doble objetivo de preservar a la justicia, como reconocer el fuero que merecen y tienen en la mayoría de sociedades del planeta quienes visten el uniforme.

Para los millones de colombianos que nacieron después de la tragedia del Palacio de Justicia hace casi un cuarto de siglo, lo ocurrido suena distante, e incluso ajeno, pero eso no disimula su trascendencia histórica, ni las profundas heridas que abrió y siguen sin cerrarse. Todo por cuenta de la insensatez del M-19, único culpable directo de una tragedia que enlutó a decenas de familias y que les costó la vida a los más brillantes magistrados, cuya ausencia aún le duele a la nación entera.

Tan doloroso capítulo quedó parcialmente cerrado con la firma de los acuerdos de paz en los cuales el grupo insurgente aceptó dejar las armas y reintegrarse a la vida civil. Sin embargo, las evidencias aparecidas con el paso de los años, referentes a la muerte de un grupo de ciudadanos que

salieron por sus propios medios de las ruinas, una vez concluida la operación militar, llevaron a la búsqueda de los culpables.

No es este el espacio indicado para evaluar a fondo las pruebas exhibidas en contra del coronel Plazas durante el largo proceso al que fue sometido, como tampoco cuestionar el extenso pronunciamiento de la jueza, de más de 300 páginas. Simplemente, hay que reiterar que a los familiares de las víctimas les asiste la razón a la hora de pedir que se castigue a los responsables. Al mismo tiempo, hay que señalar que es extraño que toda la responsabilidad se centre en una persona, lejana del lugar de los acontecimientos, y que era un eslabón más de la cadena de mando. Es cierto que, en uso de sus derechos, el ex militar condenado apelará el castigo, pero independientemente de lo que suceda, el proceso tiene ramificaciones que van mucho más allá de lo que determinen los tribunales.

La razón es que hay varias tareas pendientes. Estas deben comenzar por profundizar el diálogo interinstitucional, lo que contribuiría significativamente a limar las asperezas y evitar que se abuse de las garantías constitucionales para afectar la integridad de la Fuerza Pública. Lamentablemente, dicha solicitud se da en el contexto del cada vez más agrio e inconveniente enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Justicia. Esa coincidencia es desafortunada, porque el carácter político del pulso de poderes le quita objetividad a la discusión de fondo.

Para que quede algo constructivo de la controversia, el debate debería centrarse precisamente en cuál es el marco jurídico que les respete el fuero y las garantías a los militares y Policías, pero que al mismo tiempo impida la impunidad en los casos de violaciones de la Ley o los derechos humanos. Si de ese análisis surge la decisión de reforzar la justicia penal militar debe ser claro que esta tiene un grave problema de credibilidad que solo se corrige con hechos. Al mismo tiempo, cualquier resultado debe pasar por una mayor capacitación de jueces y fiscales, que a veces profesan falta de conocimiento en temas operacionales militares.

El esfuerzo de reforma es urgente y necesario, porque el sistema actual hace agua, y mucha. Los soldados se sienten expuestos y condenados sin un debido proceso, las víctimas se creen desprotegidas y la sociedad teme que se pierda lo alcanzado por la seguridad democrática, ante la posible desmoralización de la tropa. Tiene razón el presidente Uribe al convocar al país y a los estamentos del Estado a una reflexión seria, jurídica y técnica, que lleve a resolver las innumerables zonas grises que hoy existen y que permiten que a veces los intereses ideológicos u oscuros, como también la mera ignorancia, distorsionen la pronta y debida aplicación de la Ley. Con el fin de iniciar ese proceso con pie derecho, el Ejecutivo debe refrenar su visible inconformidad con el Poder Judicial. También les ha llegado la hora a los jueces de dejar de arrojarse en la supuesta infalibilidad de sus actos y decisiones, pues estos deben aceptar que en una democracia su accionar no escapa del escrutinio al que se someten los demás ciudadanos e instituciones del Estado. En fin, hay que trabajar con urgencia y de forma constructiva en un tema que les debe interesar a todos los colombianos. editorial@eltiempo.com.co

Titulo: **¡Cuatro más, libres!**

Palabras Clave: **EDITORIAL;OPERACIÓN CAMALEÓN;RESCATE SOLDADOS SECUESTRADOS FARC**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-18**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **15/06/2010**

Pagina: **16**

Lead: Rotundo éxito. Solo así se puede calificar el balance de la operación ‘Camaleón’, que las Fuerzas Armadas desplegaron en las selvas del Guaviare y que este fin de semana produjo la liberación de cuatro uniformados en poder de las Farc. Después de seis meses de preparación, 300 hombres de las Fuerzas Especiales del Ejército rescataron sanos y salvos al general Luis Mendieta, a los coroneles Enrique Murillo y William Donato y al sargento Arbey Delgado. Estos dos últimos llegaron con las cadenas de la tortura aún en el cuello.

Texto:

El operativo militar constituye un contundente golpe a la guerrilla en pleno corazón de su retaguardia selvática, y fue conducido, como lo afirmó el ministro de Defensa, Gabriel Silva, con precisión “quirúrgica”. Hay que añadir que las Farc no solo ven reducido su macabro “botín” de militares y Policías secuestrados, sino que también pierden al general Mendieta, el oficial de más alto rango sometido al brutal horror del cautiverio. ‘Camaleón’ se suma así a una serie de exitosas operaciones militares en años recientes, donde las Fuerzas Armadas han debilitado la estrategia guerrillera de intercambiar uniformados por subversivos en prisión. Después de la famosa ‘Jaque’, este es el operativo con mayor número de liberaciones y, como su antecesora, fue el resultado de una intensa actividad de inteligencia.

Para Mendieta, Murillo, Donato y Delgado, este fin de semana terminó una pesadilla de casi 12 años desde que fueron secuestrados, los dos primeros, en la toma de Mitú, en noviembre de 1998, y, los dos últimos, en la de Miraflores, en agosto de ese mismo año. Culmina, asimismo, el calvario de sus familias que, por más de una década, sufrieron la incertidumbre, el temor y la separación que conlleva esta inhumana tragedia. El coronel Murillo, por ejemplo, pudo abrazar a dos hijos suyos que solo lo conocían por fotografías.

'Camaleón' cierra con broche de oro militar la decisión política del presidente Álvaro Uribe de no negociar ningún acuerdo humanitario con las Farc. Duramente criticada hace unos años, la opción del Gobierno por los rescates militares ha dejado, sin duda, un balance de libertad con muy poco costo en vidas. A pesar del entendible rechazo de los familiares de los secuestrados a estas operaciones tipo comando, el compromiso de Uribe de buscar a los militares secuestrados ha rendido frutos y hoy la opinión pública comparte el rechazo gubernamental a cualquier iniciativa de canje. Más aún, los dos aspirantes presidenciales que se enfrentarán en segunda vuelta este domingo coinciden en esa posición política.

Sin embargo, aún quedan 19 uniformados en la selva, y las opciones para liberarlos están reducidas al rescate militar, como el del fin de semana, o a las entregas unilaterales y voluntarias de la guerrilla, como en el caso del sargento Pablo Moncayo. En términos humanitarios, la búsqueda de salidas creativas a tan largo y brutal cautiverio no se deben detener. Sin las figuras políticas, y ahora sin los oficiales de alto rango, el riesgo de que estos secuestrados pierdan valor estratégico para la cúpula guerrillera es mucho mayor que antes. Un reconocimiento de este hecho innegable sería su completa e incondicional liberación.

Desde el punto de vista político, la apuesta de las Farc por el intercambio humanitario como herramienta de presión sobre el Gobierno se está desmoronando por sustracción de materia. La férrea postura del presidente Uribe, junto con el exitoso despliegue de audaces operativos militares de rescate, es responsable de la neutralización de facto de esa "arma" guerrillera en sus ocho años de mandato. Otro aspecto positivo de la política de seguridad democrática.

Titulo: **Santos, Presidente**

Palabras Clave: **EDITORIAL**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-26**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **21/06/2010**

Pagina: **26**

Texto:

Desde cuando era un adolescente, Juan Manuel Santos se fijó como meta llegar a la Presidencia de la República. Ese objetivo se vio concretado ayer, cuando el candidato del partido de 'la U' confirmó el primer lugar que había logrado en las elecciones del 30 de mayo. Según el conteo hecho por la Registraduría Nacional, este economista de 58 años obtuvo 9 millones de votos y logró así una amplia ventaja de 41,5 puntos porcentuales sobre su contendor, Antanas Mockus, quien recibió el apoyo de cerca de 3,6 millones personas. El aumento del índice de abstención, sobre todo en las principales capitales, tuvo su explicación en el clima lluvioso y en la amplia diferencia obtenida por el ganador en la primera vuelta, con lo cual un número importante de ciudadanos consideró definida de hecho la carrera y prefirió quedarse en su casa. Pero esa circunstancia en nada opaca la apabullante victoria de Santos. Su triunfo es, sin duda, un premio a la persistencia y a la preparación de una persona con un sólido bagaje académico, que se desempeñó con brillantez en las carteras de Comercio, Hacienda y Defensa. La capacidad que mostró en dichos cargos ha sido una constante en su vida profesional, como lo puede certificar este diario, que tuvo la fortuna de tenerlo en su cuerpo de periodistas. Más técnico que político, el nuevo Presidente llega a la primera magistratura sin haberse presentado antes a un cargo de elección popular, pero con un profundo conocimiento del país y sus necesidades. Comienza así una nueva etapa para Colombia, en la cual hay que mirar al futuro sin olvidar el pasado. Con su veredicto, los ciudadanos expresaron que aprecian la gestión de Álvaro Uribe, quien tiene un respaldo inmenso y logró que su ex ministro lo suceda en el solio de Bolívar. Al mismo tiempo, el surgimiento del Partido Verde es una demostración de que los colombianos quieren un cambio y desean desterrar las prácticas corruptas en los asuntos públicos. En tal sentido, es claro que las políticas deben evolucionar y que ahora la llamada prosperidad democrática reemplazará los pilares de seguridad, confianza inversionista y cohesión social que por ocho años pregonó el actual inquilino de la Casa de Nariño. Todo dentro de un marco de unidad, nacido del propósito de Santos de abrirles las puertas del Ejecutivo a personas de las más diversas tendencias que tengan el fin común de trabajar por Colombia. Una unidad que ha comenzado, como dijo anoche en un

emotivo discurso, en el que trazó pautas, envió mensajes de concordia a todas las fuerzas políticas y a los países vecinos, y les advirtió a las Farc que su tiempo se ha agotado.

El reto no es nada fácil. De un lado, el nuevo mandatario cuenta con un enorme margen de maniobra, con miras al periodo que comienza el 7 de agosto.

Aparte de que su triunfo fue abultado, Santos representa a buena parte de las colectividades que integran el Congreso, lo cual le permitirá impulsar reformas y hacer transformaciones en múltiples áreas, con más velocidad y profundidad que sus antecesores en el cargo.

Sin embargo, semejante oportunidad –que no dudamos en calificar de histórica– viene acompañada de desafíos, como el de manejar una coalición variopinta, en la cual no faltan rencillas y las rivalidades. Esa situación hace particularmente compleja la conformación del Ejecutivo, pues la aspiración que tiene cada sector que acompañó al candidato es la de maximizar su participación en el gabinete o en los altos cargos de la administración. Tampoco será sencillo deslindarse de su predecesor, ante la necesidad de darle a su Gobierno una personalidad propia.

Afortunadamente, no es la primera vez que Santos se enfrenta a desafíos complejos. Por eso, al felicitarlo por su victoria, es necesario reiterar la confianza que genera la voluntad que tiene de hacer las cosas bien, respaldada en el respeto a sus compatriotas, el trabajo honesto y el gran amor que tiene por Colombia.

Gracias a su amplio triunfo, el mandatario electo tiene una oportunidad histórica de impulsar reformas en las más diversas áreas.

Titulo: **Al segundo lugar**

Palabras Clave: **EDITORIAL;INFORME
ONU;CULTIVO HOJA DE COCA COLOMBIA**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-20**

Last publication info

Publicacion: **EL_TIEMPO**

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **30/06/2010**

Pagina: **22**

Lead: La semana pasada, un reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) dio una noticia trascendental: en el 2009, Perú superó a Colombia como el mayor productor mundial de hoja de coca, con 119.000 toneladas. Según el director ejecutivo de la agencia citada, de mantenerse las tendencias, el país vecino se convertiría en el mayor abastecedor global del alcaloide, posición que no ocupa desde mediados de los años 90.

Texto:

Mientras en territorio colombiano los cultivos de la mata han disminuido en 60 por ciento en los últimos diez años hasta llegar a 68.000 hectáreas, el área total peruana ha venido aumentando por cuarto periodo consecutivo hasta alcanzar las 59.900 hectáreas. Este crecimiento se presenta en medio de una caída del 5 por ciento en el total sembrado de la planta en la región andina y de una marcada disminución de la producción mundial de cocaína en los últimos cinco años.

El informe, que cubre además a Bolivia, destaca las distintas actividades de erradicación y fumigación y los programas gubernamentales en las zonas cocaleras como las principales razones de la reducción colombiana. Precisamente, hace unos días, en el seno del Conpes, fue aprobado un documento que convierte parte de ese paquete de iniciativas, en especial las de erradicación manual, en política nacional.

Que la ONU afirme que cultivar coca en Colombia pierde rentabilidad y es riesgoso para los narcotraficantes no es gratuito. Es el resultado de un largo esfuerzo institucional del Estado con un elevadísimo costo en recursos públicos y en vidas de soldados, Policías y campesinos. Un cuarto de siglo cumplió ayer la Policía Antinarcóticos, que en la última década ha destruido más de 10.000 laboratorios de procesamiento del alcaloide, ocupado unos 14.000 bienes de procedencia ilícita y capturado a más de medio millón de delincuentes.

Este desplazamiento de cultivos de coca de las selvas nacionales hacia territorio peruano es motivo de satisfacción para las autoridades antidrogas

del país. Sin embargo, el fenómeno ratifica que, en materia de plantíos ilícitos, se presenta un comportamiento de globo de agua: la presión en un lugar simplemente hace fluir los arbustos de coca hacia otras zonas menos asediadas. A esto obedece el llamado de Naciones Unidas al Gobierno del presidente Alan García para reforzar su estrategia antinarcóticos y detener el rápido crecimiento de la producción.

Desafortunadamente, las buenas noticias para Bogotá son malas para Lima. Así mismo, constituyen la confirmación del carácter transnacional del delito del narcotráfico y de la imperiosa necesidad de la corresponsabilidad en la lucha contra esta actividad criminal –postura que Colombia ha defendido en todos los escenarios diplomáticos–. A la administración entrante le corresponde el reto de sostener y profundizar estos incipientes logros. Frente a la inevitable realidad del deterioro de los indicadores de control de la coca en el Perú, solo les resta a las autoridades colombianas ofrecer a sus contrapartes limeñas la experiencia, el conocimiento y el entrenamiento que dan décadas de detección y erradicación de cultivos ilícitos.

Como todo avance, en esta interminable guerra contra los estupefacientes hay que mantener los pies en la tierra. El Informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas confirma el crecimiento del mercado europeo de la cocaína, cuyo número de consumidores se ha duplicado en el último decenio. Estados Unidos y países del Viejo Continente, como el Reino Unido, España e Italia, siguen en mora de poner en marcha medidas contra la demanda de sus ciudadanos, así como contra las redes locales de distribución. La carga de la lucha sigue, sin duda, desbalanceada en contra de Colombia.

Titulo: **Medellín, sitiada**

Palabras Clave: **EDITORIAL**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-14**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **07/07/2010**

Pagina: **14**

Texto:

Lo sucedido este pasado puente festivo en Medellín retrata los notables avances y los peligrosos retrocesos que la capital antioqueña ha experimentado en los últimos años. El fin de semana empezó violentamente con una masacre de ocho personas en una discoteca de Envigado, municipio del área metropolitana del valle de Aburrá, por venganzas entre las bandas criminales. Luego vendría el cierre del V Congreso Iberoamericano de Cultura, dedicado a las músicas, una muestra más de cómo esta urbe se ha convertido en sede de eventos internacionales.

En la mañana del domingo, un joven líder cultural, participante en ese encuentro y gestor artístico de la Comuna 13, fue acribillado por un sicario, al parecer por equivocación. Y mañana se da inicio a la vigésima edición del Festival Internacional de Poesía, al que asistirán 100 bardos de 58 países. En años recientes, los logros urbanísticos de la metrópoli antioqueña han sido contrarrestados, lamentablemente, por un imparable crecimiento de los índices de violencia. La irrupción de la guerra sin cuartel es inocultable: según Medicina Legal, de 788 homicidios cometidos en el 2007, la ciudad pasó a registrar 1.066 en el 2008. El año pasado, la estadística se duplicó a 2.186 y la tasa subió a 94,35 asesinatos por cada 100.000 habitantes, más de cuatro veces la de Bogotá. Solo en el primer semestre del año, el saldo en rojo va en 1.040 muertes violentas y contando. Aunque los guarismos están aún lejos de la tasa de 381 homicidios de 1991, en plena actividad de Pablo Escobar, el ritmo de la tendencia preocupa. El compás de espera hasta julio que pidió la Alcaldía en enero para frenar la oleada criminal ya se agotó sin los resultados esperados. Hoy, Medellín está de nuevo asediada por la lucha armada entre las bandas delictivas, esta vez entre los herederos de 'don Berna': 'Sebastián' y 'Valenciano'. La ciudad está sitiada por una sangrienta batalla territorial entre grupos de jóvenes sicarios, provenientes de las comunas populares.

Existen fronteras 'invisibles' en estos barrios, y las matanzas en lugares públicos para enviar mensajes han regresado. La contienda responde al control de la venta al detal de drogas en las plazas y en las más de 750 'ollas' distribuidas por todo el perímetro urbano. Asimismo, el vacío de poder que dejó 'don Berna' es cubierto por otros lucrativos negocios ilegales, como extorsión de comerciantes, juegos de azar y prostitución, entre otros. Por último, los tentáculos de estas estructuras infiltran y amedrentan a las autoridades y a la Justicia. La capital antioqueña se arriesga a transitar un oscuro camino de retorno a los altísimos índices de homicidios de finales de los años 90, que parecían superados. Permanentes ciclos de violencia desbordada, seguidos de frágiles treguas, han marcado ya a dos generaciones de medellinenses. La línea de sangre se puede reconstruir en la sucesión de los protagonistas y sobrevivientes: de los sicarios de Escobar a los milicianos de las comunas, a los matones de 'la Terraza', a los narcoparamilitares de 'don Berna' y a los actuales miembros de las bandas criminales emergentes. Todo esto en medio de fallidos intentos de procesos de paz, momentáneamente exitosos, pero, a la larga, generadores de nuevos ciclos. Si bien en una notable menor intensidad que hace dos décadas, la violencia en Medellín es el mayor desafío de la seguridad democrática en las ciudades, que recibe la entrante administración Santos. Y, hasta ahora, las medidas de los Gobiernos nacional y local han sido insuficientes y necesitan reforzarse. Al importante aumento del pie de fuerza policial y la creación de jueces nacionales hay que añadir estrategias de contrainteligencia, que no solo permitan capturar a los jefes, sino también conocer la extensión de su poder fáctico sobre la ciudad.

La violencia desatada por la guerra de las bandas criminales en la capital antioqueña es el mayor desafío urbano de la política de seguridad.

Titulo: **Una década agridulce**

Palabras Clave: **EDITORIAL;PLAN COLOMBIA**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-14**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **19/07/2010**

Pagina: **14**

Lead: Hace diez años el Congreso de Estados Unidos aprobó el primer desembolso de 1.300 millones de dólares para financiar una agresiva iniciativa de lucha contra el narcotráfico para nuestro país. El Plan Colombia, impulsado por los entonces mandatarios Bill Clinton y Andrés Pastrana, surgió con una ambiciosa meta: la reducción de un 50 por ciento de los cultivos de coca en el territorio nacional. Una década y más de 7.000 millones de dólares después, es oportuno revisar tanto sus logros como sus falencias a la luz de los desafíos actuales.

Texto:

En sus primeros años, el programa buscó conciliar los intereses encontrados de Bogotá y Washington. Mientras la Casa de Nariño estaba embarcada en 1999 en un proceso de paz con las Farc, la Casa Blanca tenía la mira puesta en golpear la oferta de drogas y en evitar a toda costa que la cooperación escalara en una intervención militar, en “otro Vietnam”. Alrededor de ese latente riesgo giraron las críticas internas en Colombia y las alertas diplomáticas de los países vecinos. Hoy, en comparación con las misiones estadounidenses en Irak y Afganistán, Colombia es un ejemplo de una presencia restringida y limitada.

Para quienes le apostaron al Plan Colombia como la batalla final para resolver, de una vez por todas, la guerra contra las drogas, el balance es insatisfactorio. En estos diez años, el mercado europeo de la cocaína se ha disparado –mientras el de Estados Unidos se ha reducido–, los cultivos del alcaloide han venido aumentando en Perú y Bolivia y nuevas estructuras de narcos, como los carteles mexicanos, se han consolidado y llevado la violencia a otros países. Ayer, precisamente, Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica, afirmó en entrevista a este diario: “La guerra contra el narcotráfico se librará en Centroamérica”.

Sin embargo, una mirada más detallada a las estadísticas de Colombia no genera un panorama tan desalentador. Si bien se necesitó el doble del tiempo calculado, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, la extensión de cultivos de coca ha caído en más del 50 por ciento, de 163.300 hectáreas en el inicio del Plan Colombia a 68.000 en el 2009. Aunque esa área actual basta para satisfacer al mercado norteamericano, la producción mundial del alcaloide ha venido disminuyendo sostenidamente desde el 2004.

Otro hecho que cambió esta iniciativa fueron los atentados del 11 de septiembre del 2001 en territorio estadounidense. A partir de entonces, Washington autorizó el uso de los recursos en asuntos de seguridad, es decir, atacar directamente a las Farc. Por ese motivo, una evaluación del Plan Colombia, especialmente en los ocho años del Gobierno Uribe, no puede ignorar los avances de la política de seguridad democrática. Sería injusto desconocer que la cooperación de Estados Unidos contribuyó a las dramáticas reducciones en secuestros, actos terroristas y violencia de los años recientes.

Más que rotundo fracaso o sonoro éxito, el balance de diez años de esta polémica iniciativa ejemplifica los complejos desafíos de la guerra contra las drogas. Ahora que la Casa Blanca dedica atención y recursos a otros frentes externos en Asia y Oriente Medio, Colombia necesita explorar nuevas estrategias para enfrentar al narcotráfico. Y en especial a sus nuevos protagonistas –las bandas emergentes– y sus nuevos escenarios –la venta en los barrios y parques de las ciudades, así como el consumo doméstico–. Al Gobierno entrante le queda el reto de no sólo reemplazar el cada vez más reducido monto de ayuda –no más de 600 millones de dólares en el 2011– sino también abrir la discusión seria a abordajes alternativos como las propuestas de los ex presidentes César Gaviria, Fernando Cardoso y Ernesto Zedillo. Hay que transformar esta crisis de recursos en una oportunidad de giro a una estrategia que muestra sus profundas limitaciones.

Titulo: **Justicia y Paz: 5 años**

Palabras Clave: **EDITORIAL;JUSTICIA
TRANSICIONAL**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-26**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **25/07/2010**

Pagina: **26**

Lead: **Hoy hace un lustro, el Diario Oficial publicó el texto de la Ley 975 del 2005, más conocida como de Justicia y Paz.**

Texto:

La iniciativa concentró el esfuerzo de la administración Uribe en desmovilizar las estructuras paramilitares a cambio de conocer la verdad de sus horrores, reparar a sus cientos de miles de víctimas y garantizar la no repetición de las atrocidades. En medio de un conflicto vigente y sin negociar políticas de Estado, el Gobierno enfrentó el dilema de la justicia transicional: la delicada combinación de dosis de paz que implicaba el desmonte de las autodefensas, y de justicia, consistente en penas reducidas por crímenes de lesa humanidad.

La tarea impuesta por esta ambiciosa normatividad ha sido tanto titánica como abrumadora. Las diversas modalidades de los delitos –desde desplazamiento masivo hasta agresiones sexuales–, la inmensa extensión de la violencia y las intrincadas redes del fenómeno paramilitar han desbordado, sin duda, los recursos gubernamentales. Todo esto en medio de innumerables procesos enredados en una maraña judicial, y de las consecuencias imprevistas de decisiones bienintencionadas y multimillonarios fallos difíciles de pagar. Si de someter la ley a un frío corte de cuentas sobre sus distintos componentes se trata, el balance es modesto y el éxito parece lejano.

*** * * ***

En materia de sentencias judiciales, verdades reconstruidas, bienes recuperados para la reparación y garantías de no repetición, la Ley 975 ratificó muchos de los temores que surgieron en estos cinco años de aplicación. Las condenas de jefes paramilitares han sido escasas, como la reciente contra ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ por crímenes contra Mampuján, y en otros procesos de justicia transicional estos fallos toman mucho más tiempo. La norma no tuvo los dientes suficientes para arrebatarles los bienes a los desmovilizados y así robustecer financieramente la

reparación. Hoy, el fondo que maneja Acción Social registra 101 actas de bienes entregados, insuficientes ante las demandas de cientos de miles de víctimas.

En cuanto a la reconstrucción de la verdad, la extradición de los máximos líderes de las autodefensas a Estados Unidos por narcotráfico sirvió para imponerles penas más altas, pero truncó en buena medida la oportunidad de conocer en Colombia la profundidad de sus lazos con otros sectores de la sociedad, más allá de los políticos regionales. Que estos nexos con empresarios, militares, funcionarios públicos y élites locales sigan sin documentarse ni transformándose en investigaciones confirma que el resto del iceberg continúa bajo el mar y oculto a los ojos de la sociedad. Además, frente a la no repetición, el país presencia impotente cómo medio centenar de líderes de asociaciones de víctimas del conflicto han sido asesinados en los últimos años. Esta revictimización no solo atenta contra el espíritu de la ley, sino enfrenta al Estado a la responsabilidad de proteger a las personas y garantizarles el derecho a la vida.

* * * *

No obstante, sería injusto medir los logros de Justicia y Paz únicamente por sus máximos estándares, aquellos que la mayoría de países en conflicto han sido incapaces de igualar. Unos 4.346 individuos han confesado más de 25.000 hechos delictivos y se han exhumado 2.719 fosas comunes. El número de colombianos registrados como víctimas alcanzó los 300.000 en todo el país y más de 50.000 han participado en las 2.431 versiones libres efectuadas. Si bien grandes porciones de la verdad sobre quiénes crearon, financiaron, entrenaron y se enriquecieron con los paramilitares siguen sin destaparse, miles de compatriotas conocieron el destino de sus seres queridos gracias a esta ley. La condición de víctimas es hoy reconocida y los derechos que esta implica cuentan con instrumentos, algunos no tan bien diseñados, para ejercerse. Ante un aparato de justicia tradicionalmente lento e incapaz de resolver los crímenes atroces del conflicto, el desempeño de la Fiscalía y de las agencias gubernamentales merece reconocimiento.

Para muchos expertos, en ese intercambio entre verdad y justicia, los delincuentes han dado poco de aquella y recibido menos de esta última. Y en cuanto a la reparación por vía administrativa, los insuficientes recursos están saliendo de las arcas públicas y no de los patrimonios mafiosos de los paramilitares. Como experiencia de justicia transicional, la Ley 975 hoy sufre preocupantes vacíos en el trámite judicial, en el aparato institucional y en los mecanismos de reparación, y el limbo jurídico para delitos cometidos después del 25 de junio del 2005. Revisiones drásticas que el Estado está en mora de abordar en diálogo con sectores sociales, internacionales y académicos. Pero una tarea incompleta, por más huecos que tenga, no es sinónimo de una tarea fallida.

Colombia necesita agilizar el impulso que traen estos procesos de justicia, verdad y reparación. El Gobierno entrante de Juan Manuel Santos ya incluyó entre sus prioridades el diseño de un programa de restitución de tierras para víctimas del conflicto, en cabeza del próximo ministro de Agricultura,

Juan Camilo Restrepo. La presión sobre los jefes desmovilizados para que profundicen la verdad del fenómeno paramilitar debe ir acompañada de mayor celeridad en los procesos judiciales y en la captura de los bienes.
editorial@eltiempo.com.co

Aunque con escasas condenas, poca reparación y sin la completa verdad, la experiencia de justicia transicional debe continuar.

Titulo: **Morir por resistir**

Palabras Clave: **EDITORIAL;HOMICIDIOS
COLOMBIA**

Estado: **Finalizado**

Longitud: **LARGO**

Pagina de Bogota: **1-22**

Last publication info

Publicacion:

EL TIEMPO

Edicion: **NACIONAL-1**

Seccion: **OPINION**

Fecha Publicacion: **29/07/2010**

Pagina: **20**

Lead: Las alarmas que se han encendido por el deterioro permanente de los indicadores de seguridad en las ciudades del país no son nuevas. En la campaña presidencial del semestre pasado, todos los aspirantes coincidieron en identificar los escenarios urbanos como uno de los mayores desafíos de la política de seguridad democrática. Un vistazo al registro de los homicidios de los primeros meses del 2010 muestra preocupantes dinámicas en alza en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Texto:

No obstante, hay momentos en que las frías estadísticas globales se sacuden con las miles de tragedias individuales que las conforman. Como el pasado domingo en Popayán, donde el atleta Bréiner Gustavo Sánchez fue asesinado de varias puñaladas, cuando entrenaba, por dos ladrones que le arrebataron su teléfono celular. O el triste caso de otra joven trabajadora, María Carminia Carvajal, a quien, hace menos de un mes, los asaltantes de un bus en Bogotá lanzaron al asfalto en un intento criminal de distraer a las autoridades y le produjeron la muerte cerebral y su posterior fallecimiento. A esto hay que añadir que buena parte de los perpetradores han resultado ser menores de edad. Hace dos días, un sicario adolescente asesinó en Cali a un directivo universitario enfrente de sus estudiantes a la misma hora en que el alcalde de esa ciudad, Jorge Iván Ospina, dirigía un consejo de seguridad. Lo más espeluznante de esta situación –el homicidio como respuesta a la resistencia al atraco y la delincuencia juvenil– es que se ha convertido en un drama mucho más frecuente de lo que se piensa. Solo en la capital de la República y en el primer semestre del año en curso, 102 bogotanos que se resistieron al hurto de teléfonos, joyas, dinero o chaquetas fueron cobardemente asesinados. Este guarismo es un 40 por ciento más alto que el registrado en el mismo período del año pasado. No sorprende, entonces, que el atraco sea el delito al que más temen los ciudadanos, con un 43 por ciento en las encuestas de la Cámara de Comercio de Bogotá. Una urbe en la que uno de cada diez homicidios ocurre por evitar un robo está, sin duda,

fallando en sus políticas de seguridad ciudadana y dejando que las calles y los buses se conviertan en territorios del miedo.

Y la respuesta no está, como afirma una campaña lanzada recientemente, en 'no dar papaya'. Sin desconocer que 30 por ciento de los hurtos en la capital son resultado del descuido, un mensaje de este corte pone sobre los hombros de los capitalinos la responsabilidad del acto delictivo y no sobre las autoridades que deben prevenirlo y capturar a quienes lo cometen. Cuando los ladrones están empezando a asesinar a sus víctimas por un celular, cabe preguntarse si la impunidad es de tal magnitud que ya se perdió el poder disuasor del castigo penal. Es hora de que la Alcaldía escoja en firme un Secretario de Gobierno experto en estos temas, después de cuatro meses de interinidad, y de que el resto de burgomaestres no bajen la guardia ante esta alarmante realidad.

Frente a los delitos cometidos por menores de edad, la sociedad se encuentra en el dilema entre su protección y la sanción acorde con un acto criminal. Precisamente, después del consejo de seguridad donde se anunciaron refuerzos policiales para Cali, las autoridades de la capital vallecaucana pidieron la revisión del Código de Infancia y Adolescencia para fortalecer las medidas contra la delincuencia juvenil. Llegó el momento de reconocer que la mano blanda con el menor infractor está retroalimentando un incremento de la participación impune de jóvenes en delitos cada vez más violentos. Asimismo, de desplegar en las capitales colombianas estrategias que impidan que el hurto de un celular no sea la antesala de una puñalada mortal solo porque el asesino cree que se saldrá con la suya.

7.2 Programa Narrativo Editoriales El Tiempo

(Agosto 2009 – Julio 2010)

Según los análisis previamente realizados al discurso editorial del periódico El Tiempo en el periodo comprendido entre el 1 agosto de 2009 hasta el 31 de Julio de 2010, último año de mandato del Presidente Uribe,

“El debate (...) sobre la pérdida del sentido histórico de la lucha armada y su imposibilidad de éxito está en mora de darse entre los cabecillas de las Farc y del ELN”¹⁹⁷. “Una buena parte de la región –ya sea a nivel nacional, regional o municipal– está gobernada hoy por líderes que se autodenominan socialistas o tienen afinidad con el comunismo“, hay un ““innegable progreso electoral, validez continental de las reglas democráticas y superación de la vía armada para llegar al poder.”¹⁹⁸

“Hace 20 años, los guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) firmaron en Santo Domingo (Cauca) el acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco”¹⁹⁹. El éxito del “acuerdo de paz es contundente: el M-19 como organización subversiva desapareció, sus miembros se reincorporaron a la sociedad y sus líderes han sido actores del debate político por 20 años”²⁰⁰. “Pero el camino de reconciliación que se abrió hace dos décadas entre los guerrilleros y la sociedad colombiana no se ha cerrado y ha permitido que los líderes del desaparecido movimiento gocen del respaldo electoral de regiones enteras.”²⁰¹

Y es que “a pesar del tiempo transcurrido, las lecciones y reflexiones surgidas en ese momento histórico mantienen su validez en la Colombia del 2010. La más importante es la ratificación de los acuerdos de paz como un camino, difícil pero exitoso, en la reducción de la violencia y en la reconciliación de los colombianos.

¹⁹⁷ Ibid. 9 Marzo 2010

¹⁹⁸ Ibid. 11 Diciembre 2009

¹⁹⁹ Ibid. 9 Marzo 2010

²⁰⁰ Ibid. 9 Marzo 2010

²⁰¹ Ibid. 9 Marzo 2010

No obstante que en los últimos años la negociación ha sido vista por amplios sectores de la población y de la dirigencia política como sinónimo de debilidad estatal, la paz con el M-19 y otros grupos no solo ha sido permanente, sino que condujo al desarme efectivo de cientos de guerrilleros“.

Aunque el Gobierno en agosto del 2002, ratificó “su adhesión al Tratado de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI)”²⁰², también “introdujo una salvaguarda de siete años por la cual el tribunal internacional sólo podría investigar crímenes de guerra perpetrados después de ese período”²⁰³. “La idea detrás de esta decisión radicaba en que los grupos armados ilegales contaran con la posibilidad de desarrollar un proceso de paz con el Estado colombiano sin el temor de eventuales requerimientos de la justicia penal internacional”²⁰⁴. “Sin embargo, ese “período de gracia (...) se venció sin que los grupos guerrilleros entraran en ningún tipo de desmovilización, entrega de armas o proceso de diálogo”²⁰⁵

Gracias a “la seguridad democrática –el legado transformador del Gobierno Uribe”²⁰⁶, “los colombianos hoy viven unas circunstancias de paz y tranquilidad que no se conocían desde hace muchas décadas. Esta mejoría se ha dado principalmente por los logros en desarticular la guerrilla y las organizaciones del narcotráfico.”²⁰⁷ Por ejemplo, “a pesar de que las Farc habían mantenido durante décadas una presencia histórica en la región (del Sumapaz), las Fuerzas militares, con tres batallones y una brigada móvil, recuperaron este corredor estratégico y asestaron duros reveses a los subversivos, incluyendo, por ejemplo,

²⁰² Ibid. 5 Agosto 2009

²⁰³ Ibid. 5 Agosto 2009

²⁰⁴ Ibid. 5 Agosto 2009

²⁰⁵ Ibid. 5 Agosto 2009

²⁰⁶ Ibid. 3 Agosto 2009

²⁰⁷ Ibid. 5 Octubre 2009

la muerte del ‘Negro Antonio’, cabecilla del bloque oriental²⁰⁸ y “permitieron la celebración de las elecciones locales en el 2007, tras siete años sin comicios²⁰⁹”.

La “guerrilla, que está diezmada en su liderazgo, desmotivada en sus filas y desorientada en su cúpula²¹⁰, “está reactivando su accionar militar en los últimos meses²¹¹, “quieren recuperar su corredor de seguridad perdido²¹², es por eso que “las Fuerzas Armadas y la población civil enfrentan ataques y hostigamientos²¹³. Quieren “enturbiar el balance de la política de seguridad democrática –algo previsible en tiempos de campaña presidencial– y enviar un mensaje de supervivencia ante las inocultables muestras de su creciente debilidad²¹⁴. Este panorama “pone a prueba la consolidación regional de la política de seguridad democrática y la capacidad de reacción del Estado²¹⁵”.

“Los que sí negociaron durante ese tiempo (Gobierno Uribe) fueron los líderes y bases combatientes de las Autodefensas bajo la Ley de Justicia y Paz²¹⁶, el Gobierno “enfrentó el dilema de la justicia transicional: la delicada combinación de dosis de paz que implicaba el desmonte de las autodefensas, y de justicia, consistente en penas reducidas por crímenes de lesa humanidad.”²¹⁷ En este proceso de Justicia y paz, según el diario El Tiempo, el “si de someter la ley a un frío corte de cuentas sobre sus distintos componentes se trata, el balance es modesto y el éxito parece lejano” ²¹⁸, “en materia de sentencias judiciales, verdades reconstruidas, bienes recuperados para la reparación y garantías de no repetición, la Ley 975 ratificó muchos de los temores que surgieron en estos cinco

²⁰⁸ Ibid. 21 Octubre 2009

²⁰⁹ Ibid. 21 Octubre 2009

²¹⁰ Ibid. 23 Diciembre 2009

²¹¹ Ibid. 23 Diciembre 2009

²¹² Ibid. 23 Diciembre 2009

²¹³ Ibid. 23 Diciembre 2009

²¹⁴ Ibid. 5 Marzo 2010

²¹⁵ Ibid. 21 Octubre 2009

²¹⁶ Ibid. 5 Agosto 2009

²¹⁷ Ibid. 25 Julio 2010

²¹⁸ Ibid. 25 Julio 2010

años de aplicación²¹⁹: “las condenas de jefes paramilitares han sido escasas²²⁰, “la norma no tuvo los dientes suficientes para arrebatárles los bienes a los desmovilizados y así robustecer financieramente la reparación²²¹, “en cuanto a la reconstrucción de la verdad, la extradición de los máximos líderes de las autodefensas a Estados Unidos por narcotráfico sirvió para imponerles penas más altas, pero truncó en buena medida la oportunidad de conocer en Colombia la profundidad de sus lazos con otros sectores de la sociedad, más allá de los políticos regionales²²², además, “frente a la no repetición, el país presencia impotente cómo medio centenar de líderes de asociaciones de víctimas del conflicto han sido asesinados en los últimos años²²³.

“Como experiencia de justicia transicional, la Ley 975 hoy sufre preocupantes vacíos en el trámite judicial, en el aparato institucional y en los mecanismos de reparación, y el limbo jurídico para delitos cometidos después del 25 de junio del 2005. Revisiones drásticas que el Estado está en mora de abordar en diálogo con sectores sociales, internacionales y académicos. Pero una tarea incompleta, por más huecos que tenga, no es sinónimo de una tarea fallida²²⁴. No obstante tales dificultades, “el modelo de justicia transicional debe continuar²²⁵.

“Con la reciente decisión de la Corte suprema de negar el envío del jefe paramilitar Freddy Rendón a la justicia de Estados Unidos, queda confirmado el giro de postura del alto tribunal en materia de extradiciones (...) después de que la misma corporación autorizara la entrega de 14 ‘paras’ en el 2008, se ha convertido en una doctrina de hecho, que ha cobijado tanto a cabecillas de las autodefensas

²¹⁹ Ibid. 25 Julio 2010

²²⁰ Ibid. 25 Julio 2010

²²¹ Ibid. 25 Julio 2010

²²² Ibid. 25 Julio 2010

²²³ Ibid. 25 Julio 2010

²²⁴ Ibid. 25 Julio 2010

²²⁵ Ibid. 25 Julio 2010

como a guerrilleros de las Farc.”²²⁶, “el mensaje al Gobierno es claro frente a la necesidad de agilizar los procesos de verdad y reparación si quiere que las solicitudes de extradición de jefes narcoparamilitares sean aprobadas en el futuro”²²⁷. “A primera vista, la decisión de defender a las víctimas del conflicto interno no tendría mayores reparos. Sin embargo, al frenar la extradición, los supremos jueces amenazan con descarrilar uno de los instrumentos jurídicos más poderosos con los que cuenta el Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico”²²⁸ y se podría convertir en un “peligroso estímulo a los jefes ‘paras’ con pedidos de extradición: mientras más se demoren las investigaciones de Justicia y Paz más se retrasará la temida entrega a Estados Unidos.”²²⁹

Ahora bien, las nuevas bandas criminales “surgidas del rearme de algunos desmovilizados, de las unidades paramilitares que no entraron al proceso con el Gobierno,”²³⁰ “siguen extendiéndose y constituyen uno de los mayores retos a la política de seguridad”²³¹ del Gobierno Uribe. Estas bandas criminales conservan “continuidades militares, organizativas y territoriales”²³² de los grupos paramilitares, aunque es posible “marcar una línea divisoria entre el paramilitarismo de antes de la desmovilización y este ‘nuevo’ narcotráfico delictivo.”²³³ La editorial del periódico El Tiempo propone que “lo deseable sería el despliegue de medidas puntualmente orientadas a su desmantelamiento”²³⁴, dado que estas organizaciones no cuentan “con ninguna motivación política, ni siquiera con la excusa de la lucha contra la subversión”²³⁵. Una eventual negociación con estas bandas criminales tendrían problemas “en su espíritu, pues no se dan con organizaciones políticas, y en sus mecanismos, al ser pactos de no agresión entre

²²⁶ Ibid. 13 Mayo 2010

²²⁷ Ibid. 19 Febrero 2010

²²⁸ Ibid. 13 Mayo 2010

²²⁹ Ibid. 19 Febrero 2010

²³⁰ Ibid. 19 Agosto 2009

²³¹ Ibid. 19 Agosto 2009

²³² Ibid. 19 Agosto 2009

²³³ Ibid. 19 Agosto 2009

²³⁴ Ibid. 28 Enero 2010

²³⁵ Ibid. 12 Febrero 2010

delincuentes, son la fórmula perfecta para una paz de papel”²³⁶, es por eso que, “la lucha contra ellas necesita refuerzos”²³⁷

En cuanto a las víctimas, “hoy no se conoce el número exacto de desaparecidos en el país, aunque algunas organizaciones de derechos humanos calculan el total de víctimas entre 15.000 y 50.000.”²³⁸ “Solamente los paramilitares que se han sometido a la Ley de Justicia y Paz han confesado 21.000 asesinatos”²³⁹, “pero se habla de 26.000.”²⁴⁰ Esto, “sin contar los horrores cometidos por las Farc, que tienen en su negro prontuario varias de las más escalofriantes masacres, además de las que siguen cometiendo. O de las víctimas del Eln.”²⁴¹ “A ello, desde luego, hay que agregarles crímenes de Estado, como la vergüenza de los mal llamados ‘falsos positivos’: las desapariciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, donde se busca esclarecer la muerte de 812 personas.”²⁴² En cuanto a las víctimas de las minas antipersona, “en el 2008, 777 colombianos –más de dos por día– sufrieron sus terribles e inhumanas secuelas de muerte y mutilación.”²⁴³ Así las cosas, “la condición de víctima es hoy reconocida y los derechos que esta implica”²⁴⁴.

El Gobierno debe “agilizar los procesos de justicia y reparación”²⁴⁵ y por eso “ya se incluyó como una de las prioridades del Gobierno Santos el diseño de un programa de restitución de tierras a las víctimas.”²⁴⁶

En cuanto a las fuerzas militares, el Gobierno y el Ministerio de Defensa tienen “mucho por mostrar con respecto al tema de los derechos humanos: los manuales

²³⁶ Ibid. 12 Febrero 2010

²³⁷ Ibid. 19 Agosto 2009

²³⁸ Ibid. 16 Septiembre 2009

²³⁹ Ibid. 16 Septiembre 2009

²⁴⁰ Ibid. 16 Septiembre 2009

²⁴¹ Ibid. 16 Septiembre 2009

²⁴² Ibid. 16 Septiembre 2009

²⁴³ Ibid. 29 Noviembre 2009

²⁴⁴ Ibid. 25 Julio 2010

²⁴⁵ Ibid. 19 Febrero 2010

²⁴⁶ Ibid. 25 Julio 2010

expedidos, las visitas de funcionarios internacionales recibidas, las rendiciones de cuentas hechas y las explicaciones ofrecidas dan fe de un compromiso serio y constante con el tema.”²⁴⁷ Por ejemplo, “como consecuencia del gravísimo caso de los ‘falsos positivos’, tuvo lugar una importante purga en las Fuerzas Militares y están en marcha procesos judiciales.”²⁴⁸

En cuanto a la comunidad internacional, “el liderazgo que Colombia está asumiendo en la erradicación de las minas merece ser acompañado por la comunidad internacional: con respaldo diplomático al condenar duramente a las Farc y con ayuda económica para asumir las pesadas cargas”²⁴⁹, además, “ las Farc merecen el repudio internacional”²⁵⁰. Por su parte, “el régimen chavista debe definir si permite en su territorio las actividades políticas de grupos que avalan el terrorismo de las Farc.”²⁵¹

²⁴⁷ Ibid. 5 Febrero 2010

²⁴⁸ Ibid. 8 Enero 2010

²⁴⁹ Ibid. 29 Noviembre 2009

²⁵⁰ Ibid. 29 Noviembre 2009

²⁵¹ Ibid. 11 Diciembre 2009